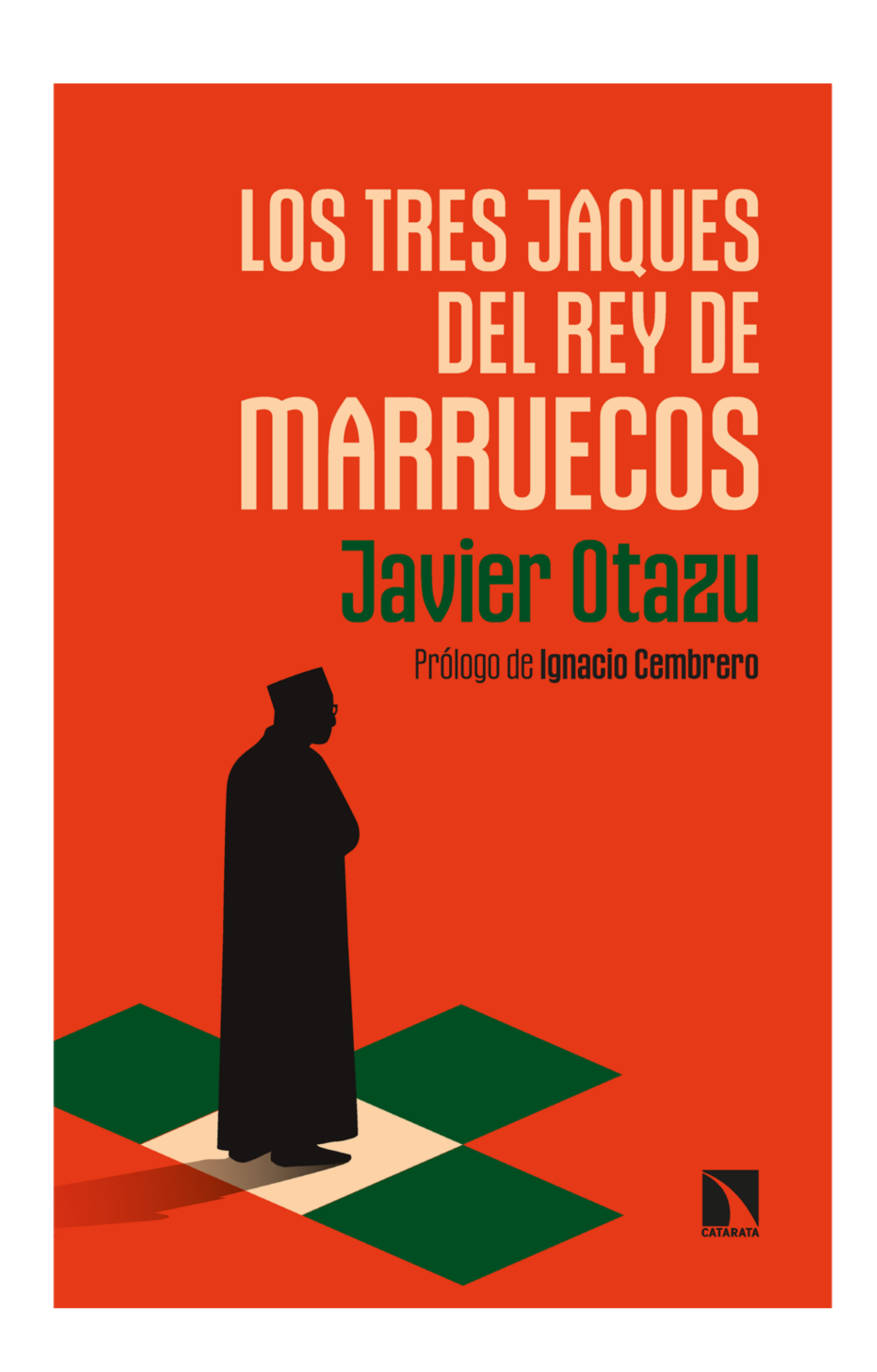
LOS TRES JAQUES DEL REY DE MARRUECOS

Javier Otazu

Prólogo de **Ignacio Cembrero**




LOS TRES JAQUES
DEL REY DE
MARRUECOS
Javier Otazu
Prólogo de Ignacio Cembrero
CATARATA



JAVIER OTAZU

Actualmente delegado de la Agencia EFE en Nueva York, ha vivido en Marruecos 16 años en dos diferentes etapas, durante el reinado de Hasán II y más tarde en el de su hijo Mohamed VI. Entre ambos periodos ha residido en Madrid, El Cairo y Lima, y ha recorrido una gran parte del mundo árabe y de otros países musulmanes como Irán, Pakistán y Afganistán. Su conocimiento del islam y de la lengua árabe le ha permitido comprender en profundidad al país magrebí, en cuyo primer libro llamó "el extraño vecino", por ser un país todavía muy desconocido para los españoles. El año 2021, especialmente turbulento en las relaciones hispanomarroquíes, es el objeto de estudio en esta su segunda obra sobre el Marruecos contemporáneo, la obra que no pudo escribir ni publicar mientras vivió allí.

Javier Otazu

Los tres jaques del rey de Marruecos

Prólogo de Ignacio Cembrero



DISEÑO DE CUBIERTA: PABLO NANCLARES

FUENCARRAL, 70
28004 MADRID
TEL. 91 532 20 77
WWW.CATARATA.ORG

LOS TRES JAQUES DEL REY DE MARRUECOS

ISBNE: 978-84-1352-335-4
ISBN: 978-84-1352-304-0
DEPÓSITO LEGAL: M-24.527-2021
THEMA: 1HBM/JP

IMPRESO EN ARTES GRÁFICAS COYVE

PRÓLOGO

ROMPER EL SILENCIO TRAS DIEZ AÑOS EN MARRUECOS

Ser corresponsal de una agencia de prensa en Marruecos es una doble frustración. La primera, inherente a todo periodista que trabaja para una agencia como la española EFE, es que debe escribir con sobriedad rehuyendo los adjetivos que darían color a su crónica. La segunda es que tiene que informar de un país en el que la libertad de prensa brilla por su ausencia. Debe, por tanto, evitar franquear algunas líneas rojas so pena de ser expulsado o, más probablemente, que se le retire su acreditación y no pueda seguir cubriendo las noticias que allí se generan.

"Tuve que callarme como nos sucede tantas veces a los periodistas en este país", escribe Javier Otazu después de que, a finales del año pasado, las fuerzas de seguridad marroquíes le impidieran viajar hasta El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental. Si en Marruecos la libertad es un bien escaso, en esa antigua colonia española bajo control marroquí es inexistente.

Es larga la lista de medios marroquíes independientes obligados a cerrar estos años asfixiados por las presiones a los anunciantes para que retiren su publicidad a causa de las multas que imponen los tribunales bajo diversos pretextos o porque su director y su redactor jefe acaban detrás de los barrotes como es el caso de *Akhbar al Youm*. Ese diario, el que más intentó aprovechar los exiguos márgenes de libertad, cerró en marzo de 2021.

Estos últimos años, también un puñado de corresponsales extranjeros han perdido su acreditación que les permitía trabajar, y los militares también han expulsado a varios enviados especiales, sobre todo aquellos que han osado pisar el Sáhara. El frenesí represor abarca también a los *youtubers* y trasciende incluso las fronteras del reino. El Gobierno de Marruecos me denunció en diciembre de 2013 a este periodista en la Fiscalía General del Estado de España por enaltecimiento del terrorismo.

Cuando se archivó la denuncia, en mayo de 2014, puso una querella por el mismo motivo en la Audiencia Nacional. Corrió la misma suerte. El objetivo era amedrentar al periodista incluso fuera de Marruecos.

Ahora que Javier Otazu ha concluido su segunda etapa de corresponsal en Marruecos, donde estuvo diez años (2011-2021) —precedida de un anterior periodo de seis años—, ya no se calla. Antes, sus crónicas bordeaban las líneas rojas tratando de informar lo mejor posible, pero sorteando la expulsión. Ahora, a lo largo de las páginas de este libro, cuenta el Marruecos real: aquel del que el régimen no quiere que se hable, aquel que los políticos europeos prefieren no ver cuando ensalzan la amistad con el país vecino.

El suyo es un excelente libro de desquite. Lástima que no pudiera hacerlo con regularidad durante su larga estancia en Marruecos. Habríamos aprendido mucho más, porque Otazu sabe más de ese país que varias embajadas europeas juntas. Hace dos años escribió su primer libro, *Marruecos, el extraño vecino* (Los Libros de la Catarata); todavía vivía en Rabat. No tuvo más remedio que dejarse unas cuantas cosas en el tintero.

El reinado de Mohamed VI, que empezó con buen pie hace 22 años, se caracteriza esta última década por una constante "erosión de las libertades" como afirma el autor. Prueba de ello es que hay ahora cuatro periodistas prestigiosos encarcelados, ninguno por sus escritos, sino todos por delitos sexuales o complicidad en la comisión de esos delitos. Qué curioso que todo aquel que arremete contra el régimen en la prensa de Marruecos sea un pervertido sexual.

Prueba de esa deriva autoritaria es también que las decisiones del monarca no se discuten lo más mínimo, ni en el Parlamento ni en el seno de los partidos, ni en la prensa, incluso cuando son manifiestamente impopulares. Establecer en diciembre relaciones con Israel lo era, porque la opinión pública marroquí es abrumadoramente propalestina, pero el palacio real no permitió ningún debate. Hasta los islamistas moderados del Partido de la Justicia y del Desarrollo se lo tragaron sin apenas rechistar. Tampoco hubo discusión sobre la participación de Marruecos en la guerra de Yemen, ni sobre las crisis diplomáticas desencadenadas por Rabat con Berlín y con Madrid.

Otazu ha tenido suerte porque en los últimos meses de su estancia en

Rabat las autoridades marroquíes se han quitado la careta y han actuado, por primera vez abiertamente, como un Estado gamberro. Y por eso ha podido narrar en este libro, con todo lujo de detalles, como en mayo se "hundió la imagen de Marruecos".

El Ministerio del Interior de Marruecos empujó a entrar en Ceuta, entre el 17 y el 19 de mayo, a más de 10.000 civiles marroquíes, la quinta parte menores de edad. Ese aluvión migratorio que cayó sobre la ciudad formaba parte del castigo impuesto a España por haber hospitalizado en Logroño, el 18 de abril de 2021, a Brahim Ghali, el líder septuagenario del Frente Polisario, enfermo de COVID.

El impacto que la utilización de civiles para alcanzar fines políticos causó en Europa fue de tal calibre que, por primera vez en un cuarto de siglo, el pleno del Parlamento Europeo aprobó el 10 de junio una resolución muy crítica con Marruecos. Para intentar hacer olvidar ese episodio bochornoso, Rabat se ofreció dos meses después a repatriar una parte —algo más de 700— de esos niños y adolescentes que entraron irregularmente en Ceuta.

El otro golpe a la imagen de Marruecos se lo asestó la prensa, concretamente Forbidden Stories, una asociación de 17 medios de comunicación entre los que figuran algunos de los más prestigiosos del mundo como *The Washington Post*, *The Guardian*, *Le Monde* y *Süddeutsche Zeitung*. Revelaron el 18 de julio de 2021 que las autoridades marroquíes habían fijado una lista de unos 10.000 móviles a infiltrar con el programa malicioso Pegasus producido por la empresa israelí NSO. En esa lista figuraban 6.000 números argelinos, unos mil franceses —incluido el del presidente Emmanuel Macron— y, curiosamente, solo uno español. Rabat ha desmentido haber adquirido y utilizado Pegasus.

Para aquellos que como Javier Otazu siguen de cerca la actualidad marroquí estas "gamberradas" suponen un salto cualitativo, pero no son del todo una sorpresa. Las relaciones exteriores de Marruecos están salpicadas de provocaciones que no han tenido respuesta. Abundan los ejemplos que afectan a España, desde el cierre unilateral de la aduana comercial de Melilla, en agosto de 2018, hasta la aprobación, en enero de 2020, de una Zona Económica Exclusiva que se solapa con la solicitada por España para Canarias. Rabat tomó esas iniciativas sin consultar a España.

España no ha sido la única potencia que ha padecido esas vejaciones. Marruecos suspendió durante once meses —de febrero de 2014 a enero de 2015— la cooperación judicial y antiterrorista con su principal valedor en Europa y en el Mundo, Francia. Lo hizo además en una época en la que los atentados eran frecuentes. Era su réplica a la convocatoria, el 20 de febrero de 2014, por una jueza de instrucción parisina, de Abdellatif Hammouchi, el gran jefe policial marroquí, contra el que habían sido puestas en París tres denuncias por torturas. Poco después de ese episodio, el ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, mandó condecorar a Hammouchi.

A Rabat tampoco le ha temblado el pulso ante Naciones Unidas, a la que no dudó en sancionar en 2016. Su secretario general, Ban Ki-moon, visitó ese mismo año los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en el suroeste de Argelia. Antes había intentado en vano viajar al Sáhara Occidental, un territorio vetado por Rabat hasta para los emisarios de la ONU. Bank Ki-moon empleó en Tinduf la palabra "ocupación" para describir la situación en la excolonia española y desató la ira de Marruecos. Las autoridades marroquíes expulsaron entonces del Sáhara a decenas de miembros de la MINURSO, el contingente de "casos azules" allí desplegado.

Marruecos se comporta con frecuencia como un pequeño matón de puertas para fuera al que nadie pone freno, excepto en casos extremos, como cuando "invade" pacíficamente Ceuta. De puertas para dentro, su régimen se va también tiñendo de autoritarismo sin que nadie censure esta evolución pese a ser un socio privilegiado de la Unión Europea. En la orilla norte del Mediterráneo es el que más se beneficia de la cooperación europea sin que se le exija ninguna contrapartida, por pequeña que sea, en materia de derechos humanos. Ya le gustaría al venezolano Nicolás Maduro, o el nicaragüense Daniel Ortega gozar de un trato similar para sus países.

Esa Europa tan preocupada, a veces, por las violaciones de los derechos humanos en Latinoamérica o en Rusia y Bielorrusia no levantó la voz cuando, en julio de 2021, tres periodistas marroquíes fueron condenados a entre uno y seis años de prisión que están cumpliendo. Solo Estados Unidos lo hizo, en términos contundentes, a través de varias declaraciones del portavoz del Departamento de Estado.

No deja de ser llamativo que esos demócratas españoles, sobre todo

socialistas, que tanto reclamaban —y conseguían— la solidaridad de las fuerzas políticas europeas con la oposición al franquismo en España sean ahora incapaces de expresar públicamente su preocupación por los atropellos de los derechos humanos en el país vecino. Y es igual de llamativo que esa Francia a la que le gusta describirse, desde la Revolución francesa, como "la patria de los derechos humanos" los ignore en Marruecos, incluso si las víctimas poseen la nacionalidad francesa.

Ignacio Cembrero

INTRODUCCIÓN

Un viejo saharaui gravemente enfermo de COVID-19 llegó un 17 de abril de 2020 con toda discreción al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en cuidados intensivos. Se llamaba Brahim Ghali, aunque en los registros del hospital pidió que lo inscribieran bajo la identidad argelina de un tal Mohamed Benbatouch.

Un mes después, y por una llegada tan aparentemente anodina, Marruecos y España se encontraban al borde de la ruptura. El Gobierno marroquí había llamado a consultas a su embajadora Karima Benyaich, quien antes de salir, y saltándose todos los usos diplomáticos, se había permitido amenazar a España con una frase que todos entendieron: "Hay actos (la llegada de Ghali a España) que tienen consecuencias".

Las consecuencias de las que Benyaich hablaba se habían traducido días antes en la llegada en apenas 36 horas de más de 10.000 emigrantes ilegales a la ciudad de Ceuta, el 17 y el 18 de mayo (exactamente un mes después del ingreso hospitalario de Ghali), en una invasión perfectamente orquestada desde Rabat. El ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, tuvo a bien decirme en una entrevista esos días que aquello se debió a "la fatiga de los policías por las fiestas del fin del ramadán, unida a la inacción total de la policía española". Pero un policía español había grabado un vídeo demoledor donde se veía ese mismo día 18 a un agente marroquí de las Fuerzas Auxiliares abrir con descaro una de las puertas de la valla metálica que hace de frontera en Ceuta y dar paso sin el menor control a cientos de emigrantes que se colaron sin dar crédito a tantas facilidades.

Al ministro Bourita no le hicieron mella que las imágenes de aquel vídeo recorrieran el mundo y mostraran la cara de su país como una especie de Estado gamberro que no respeta sus compromisos internacionales. Porque, además, Bourita se empeñaba esos días en no responder a la

pregunta que más escandalizaba al mundo: ¿Cómo justificaba que entre los "invasores" hubiera más de 1.500 menores, muchos de ellos niños de apenas 10 años, que habían sido utilizados como carne de cañón? ¿Cómo podía explicar que, diez días después de la llegada de todos esos niños a Ceuta, Rabat continuara poniendo todo tipo de trabas para su devolución a Marruecos? Ante esas preguntas, Bourita, como todos sus colegas de Gobierno, callaba.

En España, la llegada de 10.000 emigrantes a una ciudad donde, de pronto, suponían un aumento del 12% de la población (84.202 habitantes en Ceuta en 2020 según el Instituto Nacional de Estadística), más la legión de niños desamparados que deambulaban por sus calles haciendo declaraciones incoherentes a los numerosos periodistas llegados de la península, desató primero la sorpresa, más tarde la indignación y por último el resurgimiento de reflejos atávicos de odio contra Marruecos. Si periódicos como *The Economist* o *Le Monde* escribían escandalizados sobre el uso de los ciudadanos por parte de Rabat como arma de presión política, en España los tertulianos de radios y televisiones se fijaban sobre todo en los menores y daban rienda suelta a la retórica más exaltada contra Marruecos y su rey, resucitando una serie de agravios más o menos olvidados donde aparecía la Marcha Verde, la Guerra Civil o hasta la Reconquista.

En aquel río revuelto, el fundador de Vox, Santiago Abascal, se presentó en Ceuta el 24 de mayo para sacar partido a sus temas preferidos: los emigrantes, los niños "menas", la invasión mora y la blandura con que el Gobierno español trataba con el vecino felón. La Delegación del Gobierno prohibió el mitin por el riesgo de disturbios que comportaba, pero, además, la Plaza de África, donde se había convocado, ya se había llenado de un público hostil que no iban a dejar que Abascal reventase la convivencia secular de la ciudad, puesta estos días a prueba.

Y es que otro de los daños colaterales de esta crisis migratoria había sido el deterioro del ambiente en Ceuta entre sus dos poblaciones principales, la cristiana y la musulmana, esta última mirada con frecuencia con suspicacia por suponérsele una connivencia necesaria con los vecinos del sur, dados los innegables lazos familiares que los unen con los habitantes de Castillejos, Rincón, Alcazarseguir y todas las poblaciones marroquíes

cercanas que rodean Ceuta.

El día de la invasión, Ceuta no atravesaba por su mejor momento. La ciudad llevaba trece meses con la frontera cerrada, cuando Marruecos así lo decidió para protegerse de la COVID-19. Ceuta, como Melilla, habían quedado así cortadas brutalmente de su *hinterland* marroquí y aquel cierre las puso de bruces con una realidad incómoda: la dependencia absoluta para todo tipo de servicios de España, un país que queda más allá del Estrecho y que las tiene habituadas al olvido. Además, los ceutíes y melillenses se sentían doblemente agraviados por Marruecos, porque el país magrebí había prohibido el contrabando transfronterizo, secando así una de las principales fuentes de ingresos de las dos ciudades y arrojando además al desempleo y la precariedad a las cerca de 18.000 personas que lo practicaban de forma regular como principal sustento. El ambiente en las regiones vecinas de Ceuta, más incluso que en Melilla, era catastrófico y en ese caldo de cultivo llegó la apertura de las fronteras y la avalancha de migrantes en Ceuta.

Pero si ese incidente había despertado odios atávicos en España contra el vecino moro, no era menos cierto que un sentimiento paralelo crecía en Marruecos contra España y los españoles, hecho de resentimientos antiguos. Muchos marroquíes se referían esos días a los españoles como *buraqaa* (andrajosos), un adjetivo con el que ochenta años atrás obsequiaban a las masas de españoles empobrecidos que huían de la España franquista en busca de una mejor vida al sur del Estrecho. Eran muchos los marroquíes quienes en los días de la avalancha migratoria criticaban los abusos de la policía española o la guardia civil al tratar de contener la oleada, y las acusaciones de racismo o de "prepotencia ibérica" hacían fortuna en la prensa marroquí esos días.

Este libro trata de contar, con los ánimos aún calientes, algunas de las causas más profundas que originaron toda esta situación: la obsesión migratoria marroquí, el enfado de Rabat por la hospitalización de Ghali, la propia evolución del conflicto saharaui y el momento de regresión democrática que vive Marruecos. Es necesario un poco de contexto para entender el trasfondo de una crisis que ha arrojado por la borda décadas de paciente trabajo diplomático para tejer entre España y Marruecos una relación civilizada entre vecinos, donde los conflictos se dirimen en mesas

de negociación.

Desde Rabat, donde he vivido los diez últimos años y trabajado como periodista, las cosas se ven con una perspectiva distinta a la española, la que da el continuo roce con los marroquíes, del poder y de la oposición, en despachos ministeriales o en cafés. Hay mucha información de primera mano, y sobre todo mucha de la que no he podido escribir mientras vivía allí por razones evidentes. El libro intentará explicar cómo la confluencia de los tres grandes temas que marcan y condicionan desde hace cincuenta años la relación entre España y Marruecos —el Sáhara, la emigración y Ceuta— han confluido en esa ocasión para formar la tormenta perfecta.

CAPÍTULO 1

UNA FIESTA DESLUMBRANTE

El 30 de julio de 2019 medio Gobierno español se había dado cita en los jardines de la residencia de la Embajada de Marruecos en Madrid para celebrar la Fiesta del Trono, la celebración más importante del calendario político marroquí y que en esa ocasión conmemoraba los veinte años de Mohamed VI en el poder.

A la gran fiesta marroquí habían acudido la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro de Exteriores Josep Borrell, el de Interior Fernando Grande-Marlaska y otros tres ministros más, además de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega y de políticos del anterior Gobierno del Partido Popular, como Ana Pastor o Isabel García Tejerina. Nadie quería perderse la suntuosa recepción de Marruecos, que pasa por ser una de las más opíparas de las embajadas en Madrid.

La reina de la fiesta fue sin duda la embajadora Karima Benyaich, que vestida con un elegante caftán de color crema se fotografió con todos y cada uno de los invitados hasta llenar varias páginas de la revista *¡HOLA!*, que dio buena cuenta de la ceremonia.

¿Quién imaginaba entonces que menos de dos años después esa misma embajadora se iba a convertir en la cara más agresiva de un país que amenazaba con cortar sus relaciones con España por haber acogido en su suelo al presidente saharaui Brahim Ghali? ¿Que esta hija de una granadina iba a revolverse de esa manera contra el país que había sido el suyo hasta tres años atrás, cuando tuvo que renunciar a su pasaporte para representar a Mohamed VI en Madrid?

Aquel año de la fastuosa Fiesta del Trono Karima Benyaich había desplegado además una imponente operación de seducción de la opinión pública española a través de la prensa: en la semana que precedió a la fiesta, se sucedieron en *El País*, *ABC*, *La Vanguardia* y *El Mundo* una serie de artículos ditirámbicos escritos no por cualquier pluma, sino por el

mismo presidente del Gobierno Pedro Sánchez, sus antecesores José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, o Miguel Ángel Moratinos, quien nunca faltaba en toda cita donde se pudiera halagar a Rabat. Todos los artículos tenían dos ideas comunes: había razones para celebrar las "dos décadas de progreso" en Marruecos (como titulaba Rajoy) y España tenía el mayor interés del mundo en caminar junto a su vecino del sur en un futuro lleno de intereses compartidos.

Era curioso que los firmantes de aquellos artículos desplegasen tanto almíbar ante el vecino cuando los periodistas que trabajábamos en Marruecos nos esforzábamos en dibujar las luces y sombras que rodeaban los veinte años de Mohamed VI en el trono de los alauíes. Por aquellos días, un ministro marroquí tuvo a bien reprenderme por teléfono por haber escrito en mi análisis que Mohamed VI, tras haber llegado al trono con fama de ser el rey de los pobres, se había convertido en esas dos décadas en el mayor empresario del país y en un ávido millonario con puesto en la lista de Forbes. En Marruecos, escribir esas cosas era buscarse problemas, por eso funcionaba tan eficazmente la autocensura: en lo referente al rey, lo único seguro era y sigue siendo escribir alabanzas sin fin.

En el otoño de ese mismo año publiqué mi libro *Marruecos, el extraño vecino*, en cuyo último capítulo recordaba que las relaciones de España con Marruecos eran sistemáticamente descritas con un cúmulo de superlativos tales como extraordinarias, modélicas, ejemplares y fructíferas. Aquello era entonces rigurosamente cierto: no había nubes que ensombrecieran unos años de innegable luna de miel con el vecino, y el famoso "colchón de intereses" interconectados había funcionado muy bien, a la par que el pacto no escrito por el cual España apoyaba discretamente a Marruecos en sus tesis sobre el Sáhara y a cambio Rabat metía bajo la alfombra su reivindicación de Ceuta y Melilla.

Pero todo eso saltó por los aires el 17 y 18 de mayo, cuando una avalancha de unos 10.000 emigrantes invadió literalmente la ciudad de Ceuta sin que el espionaje español, que tiene sus mayores recursos en todo el mundo desplegados en Marruecos, hubiera sido capaz de preverlo. Había algunas señales en el aire, como eran la sucesión de comunicados y de entrevistas del superministro de Exteriores, Nasser Bourita, en los que

mostraba sin ambages su enfado por la admisión en un hospital español de Brahim Ghali, quien por ser el máximo líder de los saharauis era el enemigo público número uno de Marruecos. Bourita había llamado al embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, para protestar por lo que consideraba una traición de su socio y vecino del norte, que ni siquiera había tenido a bien informar a Marruecos de esa llegada de Ghali, aunque ya los servicios secretos marroquíes estaban al tanto y fueron los que desvelaron la información.

Y sin embargo, el enfado de Marruecos por el caso Ghali parecía una de tantas pataletas a las que el país magrebí nos tenía acostumbrados, siempre por culpa de su causa sagrada, el Sáhara: lo había hecho previamente con Estados Unidos, con el secretario general de la ONU, con Alemania y con Suecia. Lo que no entraba en las previsiones era que Rabat recurriera a las *armas de emigración masiva* en busca de sus objetivos, que sin ser explícitamente expuestos parecían consistir en un ofrecimiento español de explicaciones de la entrada de Ghali en el país (sin que bastaran las "razones humanitarias" evocadas por la ministra Arancha González Laya) y la comparecencia de Ghali ante la Justicia española. Marruecos no era tan torpe como para exigir explícitamente una condena, pues eso habría supuesto una injerencia inaceptable, además de desconocimiento del funcionamiento del sistema jurídico en España, pero sí se permitía repetidos comentarios en el sentido de que "confiaba en la Justicia española" para que Ghali respondiera por sus denuncias. De ese modo, la presión que sentimos a diario los periodistas o los diplomáticos se trasladaba también a los pasillos de la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz, encargado de tomar declaración a Brahim Ghali el 1 de junio, sabía que había demasiados ojos puestos en él, y que su nombre nunca sería olvidado en Rabat, para bien o para mal.

LA IMPORTANCIA DE GHALI

No era la primera vez que un prominente miembro del Polisario era hospitalizado en España: antes que él lo había sido Ahmed Bujari, el mejor diplomático del movimiento e incombustible representante suyo ante la ONU, que murió de cáncer de pulmón en el Hospital de Cruces de

Baracaldo en 2018, o Mohamed Jaddad, coordinador ante la misión de la ONU en el Sáhara (MINURSO), fallecido en un hospital de Madrid tras una larga enfermedad en abril de 2020. Era natural que los saharauis eligieran hospitales de España, un país donde conocen el idioma y cuentan con numerosas redes de apoyo.

Tal vez por eso no pareció extraño que Brahim Ghali solicitara ser trasladado en España cuando las complicaciones graves de la COVID-19 le hicieron pensar que el hospital argelino donde se trataba no podría salvarlo; tal vez por eso, porque existían precedentes, el Gobierno español consideró que su llegada no revestiría mayor problema.

Sin embargo, en el grupo restringido que estuvo al tanto de la operación, hubo un ministro que se opuso y subrayó los potenciales problemas que eso podría suponer con Marruecos: se trató de Grande-Marlaska, que por la cartera que ostenta sabe cuán necesario es tener calmado al vecino que nos protege la frontera sur. Marlaska es probablemente el ministro español que más veces ha visitado Rabat a lo largo de su mandato, así que sabe bien hasta dónde se puede llegar con Marruecos. Al parecer, y según han filtrado varias fuentes, González Laya impuso su opinión sobre Marlaska, y se llegó a una solución de compromiso: trasladarlo a un lugar discreto en una ciudad discreta, y para ello se eligió el Hospital San Pedro de Logroño. Eso era sin contar con la capacidad de penetración de los servicios secretos marroquíes, que Fouad Yazough, número dos de Exteriores, definía en esos días como "de los más eficaces" del mundo, y adelantó un detalle: hubo en la operación de traslado cuatro generales argelinos.

Es posible que hubiera un error de apreciación en considerar el caso Ghali como el caso de Bujari o de Jadad: después de todo, Ghali era el secretario general del Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, en otras palabras, se trataba del líder máximo, una pieza de caza mayor. Pero además, había otra razón: Ghali había declarado la guerra a Marruecos cinco meses atrás, el 13 de noviembre, y si bien Rabat había optado por *ningunear* la guerra y no responder a los casi 200 partes de guerra emitidos por el Polisario, no es menos cierto que los combatientes saharauis hostigaban sin cesar a las Fuerzas Armadas Marroquíes (FAR). No constaba, pasados cinco meses, que hubieran

causado una sola baja entre los soldados de las FAR, pero sus ataques podían compararse con "el picor de una manada de insectos que apartas a manotazos pero no logras olvidar", como describía por esos días un viejo dirigente polisario pasado a Marruecos y que pese a todo guardaba —como casi todos los saharauis— estrechos vínculos con sus hermanos de Tinduf.

Que a Marruecos le importaba esa guerra silenciosa lo confirmó el ministro Bourita en una rueda de prensa el 20 de mayo de 2020: "Todos sabemos por qué hay crisis: porque España juzgó conveniente, de manera soberana, maniobrar con los enemigos de Marruecos y alojar a quien nos hace la guerra a diario", dijo. Era la primera vez que Marruecos utilizaba la palabra guerra y se refería así a lo que sucedía en sus fronteras, junto a los "muros de defensa" levantados por el Ejército y que han dejado al Polisario el control (cada vez más relativo) de solamente una pequeña franja al este de esos muros.

Efectivamente, Brahim Ghali había roto casi treinta años de paz en el Sáhara, los que siguieron a la firma del alto el fuego en 1991 entre Marruecos y el Frente Polisario, que supusieron poner el conflicto en manos de la ONU. Allí, entre los pasillos de la diplomacia, Marruecos había ido ganando pacientemente una partida tras otra, y las sesiones del Consejo de Seguridad, que se sentaba una vez al año (a veces hasta dos) para discutir sobre el Sáhara, terminaban con unas resoluciones que cada vez inclinaban más su vocabulario hacia las tesis marroquíes. De hecho, la palabra "referéndum" ya había desaparecido de las últimas resoluciones en favor de "una solución negociada": Marruecos llevaba ya muchos años rechazando abiertamente la idea de una consulta de autodeterminación y proponiendo en su lugar un impreciso plan de autonomía para el Sáhara.

Brahim Ghali tomó las riendas del Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática tras la muerte de Mohamed Abdelaziz en 2016. Abdelaziz había llevado el conflicto saharaui de la guerra a la paz, y de allí a la irrelevancia: a su muerte, había desaparecido del mapa de preocupación internacional. Todos los años, cada 27 de febrero, se repetían las arengas de la vuelta a la guerra en los desfiles de aniversario de la RASD en la inhóspita *hamada* de Tinduf, pero los tanques y *jeeps* de los militares saharauis aparecían cada vez más oxidados, y sus uniformes más ajados. Los periodistas españoles, únicos en el mundo que aún acudían a las

arengas del desierto, repetían un año tras otro que la frustración crecía en los campamentos de Tinduf, cuartel general del Polisario y precario hogar para las decenas de miles de refugiados saharauis.

Brahim Ghali se propuso sacudir el tablero: una de sus primeras acciones fue fotografiarse con los pies en el agua en las costas de La Güera, en el cabo Blanco, la estrecha franja de tierra donde termina el Sáhara Occidental por el sur. La imagen era un recordatorio de que los saharauis no se conformaban con soñar desde el desierto argelino con la quimera de una patria, sino que reclamaban una tierra con una extensa costa atlántica de la que llevaban cuarenta años expulsados. En esas costas, barcos, cientos de barcos españoles y europeos, chinos y rusos, extraían cada año toneladas y toneladas de pescado gracias a acuerdos firmados con el Gobierno marroquí en lo que los saharauis consideraban un expolio de sus riquezas.

Aun sabedor de la aplastante diferencia en poderío militar con Marruecos, Ghali tomó en 2020 la decisión más arriesgada de su vida, al declarar la guerra a Marruecos un 13 de noviembre de 2020. Ghali tenía entonces 71 años, y no ignoraba que esa guerra no la podría ganar, pero confiaba en sacar al conflicto del inmovilismo y obligar a Marruecos a negociar una salida honrosa para los saharauis.

Con lo que Ghali no contaba era con la reacción de Marruecos, que decidió responder con el silencio a esa guerra en su frontera sur. Ni siquiera cuando el Polisario reconoció la muerte en combate del jefe de la Gendarmería Saharaui, Adah el Bendir, en abril de 2021, Marruecos quiso ponerse una medalla: ignorar la guerra era la mejor manera de negar al enemigo. La propia forma en que el Bendir murió da buena idea del desequilibrio brutal de fuerzas: un dron marroquí, un Harfang de procedencia israelí (como contó entonces el portal noticioso marroquí *Le Desk*) había disparado certeramente contra el responsable militar cuando este realizaba uno de los numerosos intentos de hostigamiento frente al muro de defensa. En esas escaramuzas que ya duraban cinco meses, el muro no se había movido un milímetro.

Si el Polisario esperaba que el Consejo de Seguridad, en su reunión semestral del 31 de marzo, argumentase que la guerra en el Sáhara necesitaba nuevas decisiones, recibió un jarro de agua fría: la resolución

de ese día terminó sin hacer siquiera mención a esa guerra. Marruecos había ganado también en los pasillos de la ONU.

ENTRA EN JUEGO LA GEOPOLÍTICA

Lo cierto es que Marruecos estaba jugando en otras ligas: mientras el Polisario declaró la guerra, Rabat estaba poniendo a punto una jugada maestra que implicaba a varios países y para la que contaba con la ayuda de Donald Trump, en el ocaso de su mandato. El 10 de diciembre de 2020, un mes antes de dejar el poder, el presidente estadounidense anunció desde Washington un pacto tripartito que incluía el reconocimiento por parte de su país de la soberanía marroquí en el Sáhara a cambio de que Marruecos restableciera sus relaciones diplomáticas con Israel y se sumara así a los Acuerdos de Abraham, en referencia a los países árabes (Emiratos, Baréin y Sudán) que anteriormente habían firmado la paz con el Estado hebreo.

La noticia fue un verdadero bombazo de alcance global: Trump, y no la guerra, había puesto al Sáhara en la agenda mundial.

Dentro de la Unión Europea, Alemania y España salieron de inmediato a recordar que la ONU era el terreno donde debía negociarse el estatuto final del Sáhara Occidental, y que declaraciones como la de Trump no ayudaban nada a la hora de encontrar una salida negociada. Alemania (que llegó a pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad) y España pronto iban a pagar caras esas declaraciones, consideradas por Rabat como un gesto de hostilidad para con Marruecos.

De hecho, fue muy significativo que el mismo día en que Trump anunció su acuerdo tripartito, Marruecos decidiera aplazar la Reunión de Alto Nivel (RAN) prevista con España para solo una semana más tarde en Rabat. Alegó la imposibilidad de celebrar una reunión así en plena pandemia, pero nadie lo creyó: de hecho, desde ese mismo día las relaciones entre Rabat y Madrid se enfriaron perceptiblemente. Que la pandemia fue una excusa improvisada y falaz para anular la RAN lo demostró el hecho de que apenas unos días después, el 22 de diciembre, una delegación estadounidense e israelí, con el consejero y yerno de Trump, Jared Kuchner, a su cabeza visitara Rabat y celebrase reuniones por todo lo alto; poco más tarde, el 10 de enero, una nutrida delegación estadounidense se

desplazó hasta la ciudad saharaui de Dajla en olor de multitudes para escenificar el nuevo apoyo de Estados Unidos a la idea del Sáhara marroquí.

¿Qué busca Marruecos desde entonces? Lo dijo de forma velada el ministro Bourita el 15 de enero, cuando en una rueda de prensa y casi sin venir a cuento afirmó que Europa debía "salir de la zona de confort" en lo referente al Sáhara y dejar de refugiarse en la cómoda neutralidad que suponía escudarse detrás de la ONU. "Europa —dijo Bourita dirigiéndose a mí, único periodista europeo en aquella sala— debe tomar el ejemplo de Estados Unidos. Hoy hace falta un movimiento conjunto de Europa para apoyar la única perspectiva posible de arreglo para la cuestión del Sáhara: la autonomía en el marco de la soberanía marroquí". Bourita acababa de celebrar una conferencia telemática con cuarenta países afectos a sus tesis sobre el Sáhara, y añadió: "Habría que preguntarse por qué España no estuvo ahí [en la conferencia]".

El primero en pagar la actitud de firmeza ante Marruecos fue Alemania: el 2 de marzo, Rabat anunció que suspendía todo contacto con la embajada alemana y sus instituciones, y dos meses más tarde, el 6 de mayo, ante la falta de respuestas convincentes desde Berlín, el Gobierno marroquí llamó a consultas a su embajadora en Alemania, una princesa de la Casa Real llamada Zohour Alaoui. El Ministerio de Exteriores fue esta vez explícito: Alemania —decía— tiene "una actitud negativa sobre la cuestión del Sáhara" y "ha multiplicado los actos hostiles que atentan contra los intereses superiores de Marruecos". Olvidó mencionar que solo cinco meses atrás, en diciembre, Alemania había concedido a Marruecos 1.387 millones de euros (202 en donación, el resto en créditos de condiciones muy ventajosas) para combatir los efectos de la pandemia de la COVID-19. La generosidad por parte alemana había sido muy mal pagada.

A su modo, también Estados Unidos se veía en 2021 en una difícil tesitura con Marruecos: Donald Trump había dejado un regalo envenenado a Joe Biden con aquel acuerdo tripartito. Si Biden lo revertía, podría por un lado precipitar la ruptura entre Marruecos e Israel, pero además no le convenía indisponerse con el país magrebí, cuya importancia estratégica había ido claramente en aumento en los últimos años. Pocos meses atrás, en octubre de 2020, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, había firmado en Rabat un acuerdo militar para diez años para "fortalecer

la cooperación militar ante las amenazas comunes". Estados Unidos era desde hace mucho el principal proveedor de armas y equipamiento militar a Marruecos, donde los aviones F-16, los carros de combate Abrams y los helicópteros Apache son ya familiares para las Fuerzas Armadas Reales, que con sus más de 200.000 soldados suponen uno de los mayores ejércitos de África. De ellos, más de la mitad están destinados en el Sáhara Occidental, en tiempos de guerra o de paz.

Cada año, el Africom, mando militar estadounidense en África, celebra en Marruecos sus ejercicios militares, African Lion, a los que invita, como participantes u observadores, a numerosos países africanos y europeos, España entre ellos. Estas maniobras habían evitado escrupulosamente adentrarse en territorio saharaui, no por miedo al Polisario, sino para evitar malentendidos diplomáticos. Pero en 2021 las cosas habían cambiado y Marruecos creyó que la nueva declaración de Trump lo legitimaba para programar una parte de esas maniobras dentro del Sáhara, y así lo propuso a Estados Unidos. Era la primera prueba que la Administración Biden tenía delante para confirmar o desmentir el acuerdo tripartito de Trump, cuando sus portavoces llevaban meses esquivando una y otra vez la cuestión del Sáhara. España, uno de los países invitados, anunció que en esta ocasión no acudiría a las maniobras "para no legitimar las tesis marroquíes sobre el Sáhara", según explicó una fuente gubernamental a *El País* en plena crisis bilateral con Marruecos. Pero eso era sin contar que los estadounidenses terminarían por no ceder ante los marroquíes: pocos días antes del comienzo de las maniobras de African Lion, un portavoz militar norteamericano aclaró a la agencia EFE que las maniobras, en su punto sur más extremo, llegarían hasta un lugar llamado Greier al Bouhi, que queda exactamente en los confines del sur de Marruecos, apenas unos cientos de metros por encima del paralelo 27.40 que marca la frontera imaginaria con el Sáhara Occidental. Nada más confirmarse el detalle, el presidente del Gobierno marroquí, Saadedín Otmani, se apresuró a borrar un tuit escrito dos días antes en el que proclamaba eufórico la presencia del African Lion en el territorio contestado como un espaldarazo de Estados Unidos a Marruecos.

El Gobierno marroquí, a buen seguro decepcionado por su amigo americano, continuaba diciendo que los ejercicios militares llegaban hasta

Mahbes, población saharaui a escasos kilómetros de Greier al Bouhi, pero los mapas no mentían: la intensa presión ejercida por Rabat sobre Estados Unidos no conseguía convencer a Joe Biden para bendecir de una vez y para siempre la *marroquinidad* del Sáhara. Pero tampoco se pronunciaba en sentido contrario: cinco meses después de la proclamación de Trump, Estados Unidos seguía deshojando la margarita, con un ojo puesto en Israel.

Y España, mientras tanto, seguía refugiada en su histórica *neutralidad activa* en el conflicto saharaui, una postura que cada vez le resultaba más difícil mantener. El 31 de mayo, el Gobierno marroquí se quitó la careta: la crisis con España no se limitaba a la torpeza de haber acogido con nocturnidad y a escondidas a Brahim Ghali. Un comunicado de la diplomacia marroquí recordó a Madrid que lo que esperaba de España era "una aclaración, sin ambigüedades, de sus elecciones, sus decisiones y sus posiciones", que terminasen de una vez con "las segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara".

Al día siguiente, el ya famosísimo Brahim Ghali, fue interrogado en su cama de hospital y por vía telemática por el juez Pedraz, quien no quiso imponerle medidas cautelares. A continuación, un avión fletado por la Presidencia de Argelia lo trasladó esa misma noche hasta Argel, donde a las pocas horas fue mostrado en una cama de hospital mientras era visitado por el presidente del país, Abdelmajid Tebboun. De este modo, el último actor en este conflicto, que había pasado hasta entonces discretamente en segundo plano durante toda esta crisis, apareció con claridad como lo que siempre ha sido: el otro país magrebí y africano con el que siempre habrá que contar para resolver definitivamente la cuestión del Sáhara.

CAPÍTULO 2
LA OBSESIÓN MIGRATORIA

En mi barrio de Rabat hay un chico nuevo en la peluquería. Moderno, bien vestido, con dibujos en el pelo, pronto quiere trabar conversación. Me pregunta de dónde soy.

—Ah, España… Yo me quiero ir a vivir a España.

—¿Y qué harías allí? —le pregunto—. No creas que sobran oportunidades para un peluquero. Hay muchísimos jóvenes en paro. Aquí por lo menos tienes un trabajo.

—Ya, pero allí, aunque no tenga trabajo, tendré derechos.

La conversación muestra que detrás de los motivos para emigrar hay una gran cantidad de razones, más allá del desempleo o la pobreza. Razones que ayudan a entender la avalancha de más de 10.000 personas que aquel 17 de mayo entró en Ceuta en apenas 36 horas, y que constituyó una de las crisis migratorias más graves en la España de los últimos años, además de abrir con Marruecos una crisis bilateral que se adivina muy larga.

Entre todas aquellas personas que irrumpieron en Ceuta en esos dos días, hubo desde luego jóvenes sin presente ni futuro, pero no todos correspondían al perfil del desesperado que no tiene qué comer mañana. La mera idea de ver una puerta abierta hacia una ciudad que se proclama "Municipio de Europa" sirvió como imán para una población que siempre ha mirado el continente europeo como un lugar que provee trabajo, bienestar y derechos.

La emigración está espoleada por muchos deseos, carencias y esperanzas.

HUIR DE LA *HOGRA*

En los países del Magreb, se llama *hogra* al sentimiento de humillación e

impotencia que el débil siente ante el poderoso. La *hogra* tiene muchas caras, no tiene que ver solo con la autoridad del Gobierno: es el muchacho ricachón que golpea a un aparcacoches en público sin que nada suceda; el saudí que atropella y mata a una joven una noche de borrachera y toma tranquilo un avión hasta su país para huir de la justicia, o el empresario rural que disfraza impunemente un accidente laboral de sus trabajadoras para no asumir ninguna indemnización a sus víctimas.

Hay muchos tipos de *hogra*, a veces es la arbitrariedad de un *moqadem*, el empleado de la Administración de quien depende todo el papeleo relacionado con la vida común de los ciudadanos, como permisos de residencia o de trabajo, certificados de soltería o licencias comerciales, entre otros. Uno de estos *moqadems* de barrio protagoniza un ejemplo cotidiano de *hogra*: en este caso se trata de un amigo mío que estaba ultimando todos los requisitos para abrir un negocio del que no daré más detalles para no complicarle la vida. Los permisos tardaban, todo eran retrasos y él ya estaba desesperado. Un buen día, el *moqadem* se presentó en su casa:

—¿Sabes que la semana que viene va a pasar Sidna (el rey Mohamed VI) por la ciudad? —dice el *moqadem*.

—Claro, no se habla de otra cosa.

—Bueno, necesito que consigas a cincuenta personas para llenar esta manzana de tu calle y que salgan a dar vivas al rey.

—¿Pero de dónde voy a sacar a cincuenta personas? —exclama mi amigo.

—¿Acaso tu taller no va a tener empleados, gente con familiares, con amigos? Argumentos te sobran para convencerlos. Yo quiero tener esta calle llena. Así, tú me entiendes, podremos luego ocuparnos de tus papeles.

Negarse a complacer al *moqadem* no solo habría supuesto nuevos retrasos en su negocio: significaba ponerse en contra del eslabón más bajo de la cadena de poder y exponerse a su arbitrariedad para el resto de sus días.

Es un ejemplo casi anecdótico, pero la *hogra* puede llegar a ser mucho más trágica, como el suceso que levantó a toda la población del Rif a fines de 2016. Mouhcine Fikri era un joven de Alhucemas de 31 años que se buscaba la vida como podía en una región maltratada por el desempleo y la

marginación histórica. Un día de octubre, había negociado con pescadores locales para comprarles 500 kilos de pez espada que luego él revendería en los restaurantes locales. Cuando tenía el pescado en su poder, un funcionario del Ministerio de Pesca se presentó para notificarle que era periodo de veda para esa especie y la captura era ilegal. Confiscó los 500 kilos y pidió un camión de basura donde trituraría el pescado para dejarlo inservible. Indignado, Fikri se metió dentro del camión, junto al pescado, para evitarlo, pero de alguna manera —nunca se esclareció qué pasó— el mecanismo triturador se puso en marcha y aplastó y despedazó el cuerpo de Fikri.

Numerosas personas habían sido testigos de lo sucedido, incluso tomaron fotos del horrible momento que todos los marroquíes pudieron ver. Se sucedieron entonces semanas y meses de protesta nunca vistas en Marruecos, con decenas de miles de personas en las calles de Alhucemas y las poblaciones vecinas protestando por la muerte de Fikri y la marginación histórica del Rif. Aquello era la expresión colectiva de rabia y de *hogra*, pero ocho meses más tarde el Estado cayó con toda su fuerza, detuvo a casi 500 personas por organizar o participar en las protestas y a sus líderes (entre ellos el ya carismático Nasser Zefzafi); les cayeron penas durísimas de hasta veinte años de cárcel.

En comparación, los siete implicados en la muerte de Fikri fueron condenados a penas de entre cinco y ocho meses de cárcel, en un juicio celebrado un año después de los hechos. Por aquel entonces, cientos de jóvenes rifeños, que huían de la represión, habían elegido el camino del exilio: cotizaban juntos para comprar una lancha neumática y cruzaban de noche el Mediterráneo hasta las playas de Granada, donde sistemáticamente pedían asilo político. Si los funcionarios españoles hubieran conocido la palabra, habrían admitido la *hogra* entre las razones de más peso para justificar la protección internacional.

Los campos de fútbol, un buen termómetro de los sentimientos juveniles en un país donde la libertad de expresión es cada vez más difícil, son habitualmente el terreno de desahogo de la *hogra*. En el año 2018, unos hinchas del equipo de Berkane (noreste del país) desplegaron en el campo una enorme pancarta que decía "Lo siento, patria mía. Nos han machacado y hemos preferido emigrar". Era aquel un año complicado: a la

represión en el Rif se había sumado la falta de salidas para los jóvenes y la imposición por sorpresa por parte del rey del servicio militar obligatorio. En las regiones del norte, cientos de jóvenes se daban cita con sus teléfonos móviles en las mismas playas, en la creencia de que salían pateras gratuitas hacia Europa. No era cierto, pero las mafias migratorias captaron la demanda y el tráfico de lanchas neumáticas *go-fast* era muy abundante aquel verano, hasta que un día la Marina Real, tratando de interceptar una de ellas en las cercanías de Tetuán, disparó contra sus pasajeros y mató a una joven de 22 años llamada Hayat Belqasem. Una estudiante de Derecho que dejó sus sueños en el Estrecho. Su muerte puso un final abrupto al delirio migratorio durante aquel verano.

Ese incidente sacó a la calle a cientos de jóvenes tetuaníes, encabezados precisamente por los hinchas del equipo MAT local, y en esas manifestaciones espontáneas gritaron que renunciaban a la nacionalidad marroquí. No era una simple metáfora: todos habían visto a otros jóvenes que, subidos en una patera en medio del mar, se graban con el teléfono móvil mientras queman o tiran al agua su pasaporte.

También por esos días, un grupo de damnificados por el inminente desalojo de tres poblados chabolistas de Casablanca anunciaron que proyectaban una marcha a pie hacia la ciudad de Ceuta "para reclamar asilo humanitario". Ni que decir tiene que la marcha nunca fue autorizada, y la cosa terminó en espontáneas manifestaciones de rabia junto a sus casuchas que estaban a punto de ser derribadas. Los teléfonos móviles grabaron una imagen inédita: la de un joven gritando colérico mientras se señalaba ostentosamente la muñeca de la mano izquierda. Todos reconocieron en ese momento lo que quería decir: el rey Mohamed VI se acababa de comprar un reloj exclusivo de oro y diamantes de marca Patek Philippe de 1,2 millones de dólares y la noticia había corrido como la pólvora por todo el país. Para aquel joven chabolista, la *hogra* tenía forma de reloj.

EL BRILLO DE EUROPA

En los años noventa, cuando en las regiones del norte de Marruecos se seguían con delectación las cadenas de televisión españolas, los lunes por

la noche uno podía pasear por las calles de Tánger y escuchar por las ventanas abiertas a Joaquín Prat gritando "¡A jugar!". Aquel programa mítico llamado *El precio justo* consistía en que los concursantes ganaban gratis electrodomésticos o hasta un coche con tal de adivinar su precio exacto. En el norte de Marruecos hizo furor: era la imagen perfecta de la sociedad de consumo, bastaba perder la timidez, ir a la televisión y recitar unos números, y uno podía ganar el premio gordo.

Fue en aquellos años noventa cuando empezó el tráfico de pateras, circunscrito entonces al estrecho de Gibraltar. España, y Europa en general, proyectaban un brillo que no era solo metafórico, pues desde gran parte de Tánger era posible ver las luces de Tarifa al fondo, titilando en la noche desde las costas de la llamada Punta de Europa.

Desde entonces, el deseo de emigrar e instalarse en el viejo continente ha espoleado a generaciones enteras de marroquíes. Recientemente, una encuesta nacional realizada por el Alto Comisariado del Plan (organismo estadístico nacional) en enero de 2020 revelaba que casi la cuarta parte de los marroquíes tenía la intención (y no solo el deseo) de emigrar, y el porcentaje subía hasta un 40% solo entre las edades de 15-29 años, misma cifra que se registraba entre las personas con una formación profesional. La mayoría (70%) invocaban razones económicas, pero un 24% aludía a razones sociales.

No parece hacer mella en los marroquíes las historias recurrentes sobre ejemplos de racismo o islamofobia en Francia, Holanda o España, especialmente desde el ascenso de grupos de extrema derecha que no esconden un discurso marcadamente antimigratorio. Los *zmigriya*, como se llama popularmente a los que marcharon e hicieron fortuna, se encargan de relatar solo el lado más dulce de su experiencia. Regresan cada verano con el coche cargado hasta los topes de regalos para toda la familia, y aun, a veces, con objetos para revender, y se convierten de inmediato en objeto de envidia para sus primos y vecinos que dejaron atrás. Ocultan que muchas veces se endeudaron para llenar el coche de regalos, o que encadenan trabajos para poder llegar a fin de mes, o que viven muy lejos del *glamour*, en barrios periféricos, o que realizan labores que los europeos no quieren, por no hablar de los incidentes de desprecio o xenofobia por sus nombres, por su color, por sus costumbres.

Se calcula que hay cinco millones de marroquíes viviendo en el extranjero, principalmente en Francia, España, Italia, Holanda y Bélgica, por este orden. La emigración hacia el norte de Europa es más antigua, data de los años sesenta y setenta del pasado siglo, mientras que España e Italia son destinos migratorios principalmente a partir de los años noventa. De entre las poblaciones inmigrantes en la Unión Europea, los marroquíes constituyen cada año la primera en acceso a la ciudadanía europea. Solo en nuestro país, 306.000 marroquíes se han nacionalizado españoles desde 1996, según cifras del Ministerio de Justicia, pero ellos, y pese a lo que diga la ley española, no pierden nunca la nacionalidad marroquí. Marruecos siempre considera a los suyos como nacionales, y eso explica el hecho de que existan tantos marroquíes con dos pasaportes.

El vínculo con el país de origen no es solo legal, se manifiesta en una solidaridad admirable, que resiste al paso de los años y al relevo generacional, en forma de remesas de divisas. Marruecos es, con México, uno de los países del mundo donde las remesas de los emigrantes mejor han aguantado a los embates de las distintas crisis. No solo son una de las principales fuentes de divisas, sino que supusieron en 2018 el 6,2% del PIB nacional. Pero sobre todo tienen un enorme simbolismo social y cultural: representan el vínculo aparentemente irrompible entre el país y su diáspora, que continúa durante décadas. En 2020, el año de la pandemia mundial, y cuando el mundo entero se encontraba en recesión, las remesas de los emigrantes marroquíes no solo no menguaron, sino que aumentaron con respecto al año anterior, lo que era llamativo y solo podía explicarse porque era mediante estos envíos regularizados como afloraba el dinero que antes traían los emigrantes de manera informal y entregaban en mano a sus familiares.

Otro ejemplo que muestra ese sólido vínculo de los emigrantes con su país de origen es el de los viajes anuales de veraneo, en la llamada Operación Paso del Estrecho, que supone el desplazamiento de casi dos millones de personas en viajes de ida y vuelta desde los países europeos hasta Marruecos. Los marroquíes llaman a esto Operación Marhaba (que significa "bienvenida") y es tal su valor simbólico que cuando en 2020 se tuvo que cancelar por las restricciones de la pandemia, aquello se vivió como una catástrofe nacional. Al año siguiente, también la Operación Paso del Estrecho fue víctima de la profunda crisis política entre Rabat y

Madrid, y Marruecos excluyó a todos los puertos españoles de la operación, obligando a sus emigrantes a viajar en avión o por puertos franceses.

Las remesas, al igual que los viajes familiares en verano, son ejemplos de cómo los emigrantes marroquíes perpetúan sus vínculos con la madre patria, vínculos que han sabido transmitir a las generaciones siguientes. Sirven además para mantener viva esa idea de Europa como tierra de oportunidades donde un hijo del pueblo puede hacer fortuna sin por ello olvidar sus raíces.

FUGA DE CEREBROS

Pero la obsesión migratoria es poderosa no solo entre las clases bajas, sino también y en gran medida entre profesionales cualificados. Y es que el deseo de una vida mejor se traduce en muchas cosas, no siempre materiales. En noviembre de 2019, el semanario *TelQuel* publicó un largo reportaje sobre la atracción que para los marroquíes ejerce el destino de Canadá: explicaba cómo ese lejano país seduce sobre todo a clases profesionales tituladas, con empleos bien remunerados en su país de origen —contables de banca, arquitectos, economistas, informáticos— y que terminan marchándose para no dejarse la mitad de sus salarios en escuelas privadas y seguros médicos. La mayoría de ellos había viajado a Canadá para aceptar salarios que sumaban menos de lo que ganaban en Marruecos, pero todos aducían las mismas razones: unos servicios públicos canadienses gratuitos, además de entornos de mayor igualdad para sus hijas y de mayor seguridad familiar. Algunos llegaban incluso a citar la carencia de entornos públicos de ocio en Marruecos, que les obligaba a importantes gastos para llenar el tiempo libre de sus hijos en cualquier fin de semana o durante los veranos. En resumidas cuentas: con el mismo dinero o incluso más, la vida en su país les resultaba más cara que en Canadá.

En junio de 2021, la cámara baja del Parlamento marroquí encargó un estudio sobre la carencia de médicos en Marruecos, cuando al mismo tiempo había 7.000 marroquíes trabajando como doctores en el extranjero. Solo en 2018, 603 médicos recién licenciados de sus facultades se habían marchado a ejercer a Europa, lo que supuso ese año un 30% del

total de titulados. El problema de la fuga de talentos comienza a ser acuciante en el país, y ha sido ya objeto de conversaciones políticas entre los Ministerios de Economía de Marruecos y de Francia, al ser este país el destino preferido por los profesionales cualificados, debido evidentemente al entorno francófono en el que se han educado y en el que han crecido.

Los ingenieros, y en especial los programadores informáticos, son algunos de los principales protagonistas de esta fuga de talentos. Cada año se calcula que 600 de estos profesionales se marchan de Marruecos a Francia para continuar sus carreras y casi nunca regresan, contaba recientemente el diario *Le Monde*. Mejores sueldos, reconocimiento profesional, sanidad y educación garantizada o el modo de vida eran citados entre las principales motivaciones para el éxodo profesional. Un ingeniero informático llamado Zakaria, 28 años, hoy empleado en un banco francés, se expresaba así: "El contexto actual (en Marruecos), con esas penas de cárcel solo por haber expresado su opinión en las redes sociales, no invita a regresar. Lo mismo sucede con la corrupción, o el hecho de que en Marruecos haya que proceder de un medio favorecido para tener puestos interesantes. La ascensión social no existe".

UN PAÍS DE TRÁNSITO PARA LOS AFRICANOS

Marruecos ha sabido vender muy bien su papel de gendarme para toda la emigración africana que pasa por su suelo camino de Europa, y ha convertido esta función en eje central de su relación con los países europeos. Pero lo que realmente le ha servido para distanciarse de otros países norteafricanos con similar problemática ha sido la creación de una Estrategia Nacional de Emigración y Asilo a principios de la década pasada. Se convirtió en el primer país africano en diseñar una estrategia semejante y eso le valió abundantes elogios internacionales de los que aún trata de sacar rédito.

La emigración subsahariana es antigua en Marruecos, y la mayor parte de las veces es una emigración fracasada, que tenía como destino último Europa pero no lo pudo lograr. Abundan los casos de africanos que han intentado dos, tres y cuatro veces la travesía a España, en ocasiones en

patera, otras saltando las vallas de Ceuta y Melilla, para ser devueltos una y otra vez hasta Marruecos.

El tratamiento de esta emigración subsahariana ha evolucionado con el paso del tiempo. En los años noventa se llegó a encerrar a cientos de africanos en la plaza de toros de Tánger sin el menor control ni garantías; más tarde, en los años 2000, ya en el reinado de Mohamed VI, se practicaban con ellos expulsiones expeditivas en pleno desierto: transportados en masa en autobuses, los emigrantes eran abandonados a su suerte en lugares inhóspitos sin comida ni agua, de los que terminaban volviendo tras múltiples penalidades. Pero a partir de 2012 el Gobierno diseñó por orden del monarca lo que llamó "una estrategia humanista" para esta población que por una u otra razón había recabado en Marruecos y finalmente habían convertido el país en su lugar de residencia. Emigrantes negros, generalmente del África francófona, eran cada vez más visibles mendigando en los semáforos o trabajando en la construcción, pero también en los abundantes *call centers* que pululan por todo Marruecos y que proveen abundantes empleos de baja calidad a jóvenes que hablen varias lenguas. Como en cualquier país, la integración de estos negroafricanos no es fácil: el marroquí de a pie los llama cariñosamente *mon ami* (mi amigo), pero a veces usa el despectivo *azzi* (negro) para dirigirse a ellos.

Las órdenes del rey cristalizaron en 2014 en un proceso de regularización por el que 23.096 emigrantes obtuvieron documentos que les permitieron acceso a la sanidad básica, escuelas para sus hijos y la firma de contratos de trabajo y alquiler. Aquello convirtió a Marruecos en un ejemplo a nivel continental, y así fue puesto de relieve en 2017, cuando Marruecos volvió a la Unión Africana por la puerta grande y el rey Mohamed VI hizo un discurso triunfal de retorno en la cumbre de ese año en Adís Abeba. En ese *apogeo africano* de 2017, el Gobierno anunció un segundo proceso de regularización al que se sumaron unos 30.000 peticionarios, y aunque se repite esa cifra como la de presuntos regularizados, los organismos de la ONU presentes en Rabat (OIM, ACNUR) jamás han recibido datos oficiales que así lo corroboren.

La pandemia del coronavirus supuso en todo caso un mazazo para la emigración subsahariana en el pasado 2020: una buena parte de ellos

perdieron sus trabajos, y con ello la justificación de su estancia. Muchos cayeron de nuevo en la irregularidad, sin que el Gobierno se aviniera a reconocerlo; es más, continuaban con el mantra de la "estrategia humanista de integración" cuando la realidad es que los subsaharianos se quejaban del regreso de las trabas administrativas y Marruecos había vuelto en 2020, con gran opacidad, a practicar los vuelos de deportación a Mali, Senegal y Guinea Conakry: cientos de subsaharianos eran atrapados en redadas intempestivas en Rabat, Tánger o Casablanca, conducidos a Casablanca e introducidos en aviones de la Royal Air Maroc, la compañía de bandera que no podía negarse a dar este tipo de servicios al Estado. Solo al llegar a sus países los deportados daban cuenta de lo sucedido. El Gobierno, en las pocas ocasiones en las que se refería a estas operaciones, las presentaba falazmente como "vuelos de repatriación" y sostenía que se respetaban en ellos todas las "garantías humanitarias" de los viajeros. Las embajadas africanas en Rabat eran las cómplices necesarias en los vuelos, pero las oficinas de la ONU no eran informadas ni siquiera *a posteriori*: se enteraban por la prensa. Jamás esas oficinas presentaron una queja ante el Gobierno, pues su estrategia era siempre la de la negociación y no la protesta.

En 2021, la imagen de país modélico con sus propios inmigrantes ya era un recuerdo. La avalancha migratoria sobre Ceuta en aquel 17 de mayo (en la que no faltaron subsaharianos) arrojó al suelo una estrategia pacientemente construida durante años, que había permitido a Marruecos convertirse en la excepción africana.

EL CONTROL EN LAS FRONTERAS

Marruecos siempre se ha quejado, y con razón, de la ingrata tarea que supone ser el gendarme en el flanco sur de Europa, expresión que chirría en los oídos europeos pero que refleja perfectamente una realidad: la UE trata de externalizar en lo posible dos políticas, la migratoria y la antiterrorista, que implican un alto grado de represión y la utilización de prácticas no siempre respetuosas de los derechos humanos. Hay una cierta hipocresía europea cuando cierra los ojos ante los eventuales abusos que serían inadmisibles en las democracias del viejo continente pero son

generosamente toleradas si quien las practica es un Estado sureño.

Hasta el incidente de Ceuta, Marruecos había sido considerado un buen alumno. Esto le ha convertido en el segundo país, solo por detrás de Turquía, en recibir fondos comunitarios para llevar a la práctica el control migratorio. Desde 2018, año en que las quejas de Marruecos comenzaron a surtir verdaderamente efecto, las distintas partidas de la UE han destinado un total de 343 millones de euros al país magrebí solo en control migratorio.

Esos fondos han financiado al menos 1.300 vehículos —entre todoterrenos que patrullan por las costas, motos y autobuses para el traslado de emigrantes—, además de radares, drones, equipos de radio, escáneres, pantallas de reconocimiento facial y un sinfín de accesorios tecnológicos de uso policial que entran en este dispositivo con el que Marruecos vigila sus 3.500 kilómetros de costas, si sumamos las del Sáhara Occidental, administradas por el reino alauí.

La UE ha elegido el Fondo Fiduciario de Emergencia para África para canalizar estas ayudas; una de sus responsables, de visita en Marruecos, me reconocía recientemente que las políticas europeas han ido deslizándose en estos últimos años de la asistencia en programas de cooperación en países terceros —para atajar las llamadas "causas profundas" de la emigración— a las partidas de control policial, y esto por un obsesivo empeño europeo en tratar la emigración ante todo como un problema de orden público. Si el dinero que antes financiaba una escuela de formación profesional ahora se destina a una partida de gafas policiales de visión nocturna, eso no se debe a Marruecos, sino a la UE: esas son ahora, y cada vez más, las prioridades con el vecino magrebí.

Es cierto que Marruecos vende muy cara su ayuda migratoria, y siempre clama que las partidas que recibe de la UE están muy por debajo de sus gastos reales. El despliegue de agentes de tres cuerpos policiales (Policía, Gendarmería y Fuerzas Auxiliares), más las patrullas de la Marina Real, suponen un dispositivo de 20.000 agentes dedicados solo al control migratorio, según las cifras del ministro de Exteriores, Nasser Bourita; de ellos, 15.000 están en las costas del norte (estrecho de Gibraltar y mar Mediterráneo) y el resto en la atlántica.

En una de sus últimas entrevistas, realizada en plena crisis por el incidente de Ceuta, el día 20 de mayo, Bourita se explayó en sus quejas:

"Europa no nos da ni el 20% del costo que asumimos contra la emigración clandestina", dijo. Solo en 2020, la UE dio a Marruecos 101 millones de euros, pero tampoco eso es suficiente para mantener el dispositivo, insistió Burita, que subrayaba "el alto costo que tiene mantener una política de buena vecindad". El ministro se quejaba de que una relación "no puede ser a la carta", basada solo en la emigración y el terrorismo. "¿Dónde están nuestras propias prioridades? Sacrificadas por la agenda española y europea", se lamentaba.

En sus negociaciones con las delegaciones europeas, Marruecos ha expuesto así las necesidades que genera el control migratorio: en la década pasada, el Ministerio del Interior marroquí asegura haber gastado 4.500 millones de euros en esas tareas (es decir, 450 millones al año), y para el periodo 2020-2027 las necesidades se estiman en 3.500 millones, lo que arroja un promedio más o menos parecido, de 430 millones anuales. Estas son las cifras que la UE recoge en sus informes y que da por buenas; en todo caso, son las cifras que Marruecos pone sobre la mesa para exigir un justo precio por proteger a Europa en uno de los capítulos más sensibles en términos de opinión pública.

La cuestión migratoria se ha convertido en central en las relaciones entre Europa y Marruecos, y el país magrebí ha sabido vender muy bien su especial situación estratégica como extremo norte del continente africano. Hasta el 17 de mayo pasado, su papel había sido reconocido y alabado por propios y extraños. Sin embargo, y desde aquella fatídica fecha, cuando la desagradable metáfora del "grifo de emigrantes" se convirtió en un hecho innegable, su prestigio como aliado modélico en África quedó gravemente tocado.

CAPÍTULO 3
CEUTA LA DESEADA

Ceuta, una ciudad española desde el año 1580, ha pasado toda su vida encajonada entre Marruecos y el estrecho de Gibraltar: su única salida es el mar, porque todas las demás llevan "al enemigo", el país que nunca ha dejado de reclamar su soberanía y que jamás la nombra de otro modo que *Sebta muhtal-la* (Ceuta ocupada). Pero que ese país utilizara a simples ciudadanos, muchos de ellos desharrapados, para invadirla sin armas ni ejércitos, no entraba en los planes de ningún estratega militar. Aquellos fatídicos 17 y 18 de mayo, la Guardia Civil calculó que llegaron a pasar a la ciudad hasta 90 personas por minuto en los momentos de mayor aluvión migratorio, según contó la vicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu.

Nadie pensó que aquello se tratara de una invasión en toda regla del país magrebí sobre la plaza española, pero el hecho de haber elegido Ceuta para llevar a cabo una amenaza contra España demostró la vulnerabilidad de la ciudad: si en una urbe de 85.000 habitantes aparecen por ensalmo más de 10.000 marroquíes —pudieron llegar hasta 12.000—, aquello puede suponer una bomba demográfica incontrolable. Es cierto que en los días siguientes hubo devoluciones organizadas de la mayoría de los que habían entrado, aunque tres semanas después la misma Mabel Deu aseguró que quedaban todavía 3.000 marroquíes "vagando" por las calles de la ciudad, de los que 1.160 eran menores de edad. Pero aunque las devoluciones se hubieran realizado con cierto orden y colaboración con Marruecos, no es menos cierto que la imagen de un vecino que en solo 36 horas lanzó a 10.000 de sus ciudadanos contra la ciudad que reivindica fue para los ceutíes un recordatorio doloroso de su fragilidad como enclave español en tierra africana.

Sin embargo, la reclamación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla no está en la agenda. El jefe de Gobierno marroquí puede recordarla en una entrevista y el Gobierno español puede por eso mismo formular una

protesta ante su embajadora en Madrid —había sucedido así en diciembre anterior—, pero un observador avezado de la política marroquí sacará sin duda otra conclusión: Ceuta y Melilla no están entre las prioridades del rey Mohamed VI. No es el momento. Esa tarea quedará en todo caso para su hijo, el príncipe heredero, el que algún día reinará con el nombre de Hassan III.

UNA ATRACCIÓN PECAMINOSA

En julio de 2019, el Gobierno marroquí prohibió a sus altos cargos que visitaran Ceuta y Melilla. Una circular del Ministerio de Exteriores enviada a todos los ministerios, al Parlamento y otros organismos públicos decía: "Se prohíbe tajantemente a todos los portadores de un pasaporte oficial que los usen para acceder a las ciudades marroquíes ocupadas de Ceuta y Melilla". Se refería a los pasaportes VIP que usan diplomáticos y todos los altos funcionarios en misiones especiales: a ellos se les exigía "entrar y salir de Europa a través de los aeropuertos y puntos de tránsito (puertos) del Reino de Marruecos".

La circular quería poner freno a una realidad pocas veces confesada: la pecaminosa atracción que Ceuta y Melilla supone para todos los marroquíes de clase media y alta, que son los que los fines de semana llenan ambas ciudades de visitantes que compran en Zara y en Mango, comen pescadito con cerveza en los restaurantes de la ciudad, se bañan en sus piscinas y playas donde no hay *burkinis* y acaban el domingo llenando hasta reventar el maletero del coche en Mercadona. El consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Alejandro Ramírez, reconocía recientemente que el 80% del turismo en la ciudad era el procedente del vecino Marruecos, y lo mismo lo corroboran los trabajadores de los hoteles. En las tiendas de Ceuta, cualquier fin de semana, lo que más se oye hablar es árabe, con acento de Tetuán, Casablanca o Rabat. Un fin de semana en Ceuta supone para un marroquí cambiar de aires por un módico precio, sin tomar un avión. Solo hay que pasar el pequeño engorro de la frontera, una frontera que pasa por ser una de las más desiguales del mundo, si se tiene en cuenta que el PIB per cápita de España es diez veces mayor que el de Marruecos.

Claro que no son solo los marroquíes pudientes los que visitan Ceuta: están sobre todo los habitantes de la región vecina, que como los vecinos de Melilla tienen una exención de los visados Schengen que les permiten entrar en las ciudades españolas en cualquier momento mostrando con su documento de identidad que son residentes en Castillejos o Tetuán, en el caso de Ceuta, o en Beni Ensar y Nador, en el de Melilla. Esa exención de visados, que ha funcionado durante décadas, es la que ha permitido no solo el contrabando, sino también la entrada y salida fluida de los llamados trabajadores transfronterizos, que entran a diario a las ciudades españolas a realizar tareas subalternas, fundamentalmente servicio doméstico pero también trabajos como fontanería, jardinería, guardianaje y todo tipo de actividades manuales. Es una de tantas paradojas de Ceuta y Melilla: tratándose de dos fronteras no reconocidas oficialmente por el vecino, es asombrosa la densidad del tráfico humano que transita por ellas un día cualquiera: el Gobierno ceutí calculaba en 2020, justo antes de la pandemia, que cada día entraba en la ciudad el equivalente al 22% de su población.

Después de la pandemia, de las medidas de precaución sanitaria y de la avalancha migratoria, ya nadie sabe cómo será el futuro, pero hay señales que muestran que nada será igual que antes. En verano de 2021, las fronteras seguían herméticamente cerradas y llevaban así quince meses: ¿qué futuro podían esperar dos ciudades que tienen su esencia misma en su carácter fronterizo?

EL CONTRABANDO, UNA FORMA DE VIDA

En el año de la avalancha, el Gobierno marroquí ya estaba ejecutando todo un plan para poner fin al contrabando con las dos ciudades españolas y terminar así con una anomalía económica que se sumaba a la anomalía geográfica: Ceuta y Melilla eran dos focos de atracción comercial innegable y proporcionaban trabajo a miles de personas de sus regiones vecinas como porteadores (unos 9.000 en cada ciudad, según el Gobierno de Rabat), pero su existencia había supuesto un freno para el despegue y desarrollo de las dos regiones vecinas de Tetuán y Nador, respectivamente, donde la ausencia de industria impedía que se generasen suficientes

empleos para la población vecina. El contrabando, que los ceutíes y melillenses llamaban púdicamente "comercio atípico" suponía un parche en la miseria, pero a largo plazo estaba suponiendo un freno para un verdadero desarrollo integral de toda la región vecina. Según las cifras de la Dirección General de Aduanas en Marruecos, el contrabando suponía un volumen de negocios anual de entre 1.300 y 1.800 millones de euros, una cifra que se quedaba mayormente en las ciudades españolas. Aunque pueda parecer exagerada, la cifra no dista mucho de la que ofrecía el consejero de Hacienda de Ceuta, Guillermo Martínez Arcas (PP), quien calculaba que las "exportaciones" de su ciudad a Marruecos suponían unos 700 millones de euros anuales.

No era un secreto para nadie que los contenedores que llegaban a Ceuta y Melilla con mercancía española, o china en muchas ocasiones, eran de un volumen que no se justificaba en ningún caso tratándose de dos ciudades de tamaño pequeño. En realidad, un 80% de todo lo que llegaba a esos puertos no era para consumo local, sino que terminaba inundando los mercados marroquíes. Y en cuanto a los "puestos de trabajo" que el contrabando generaba, también la cifra era engañosa: por cada empleo en el contrabando, se destruían cinco en el circuito formal, según los cálculos que se hacían en Marruecos. Había hechos que avalaban la queja marroquí: las únicas fábricas existentes en la región de Castillejos —una de alcoholes, otra de cerámica y otra de salazón de pescado— habían cerrado en los últimos años por la imposibilidad de hacer la competencia a los productos de Ceuta, como contaba el concejal local Mohamed Yunes. Tampoco era un secreto que muchos marroquíes sin derecho a entrada a Ceuta o Melilla se iban "de compras" a Castillejos o a Nador con el único fin de adquirir allí los productos recién llegados de las ciudades españolas, más baratos que en el resto del país.

Pero además, las imágenes de las mujeres-mula cargando unos enormes fardos a la espalda cada mañana en la frontera, haciendo colas interminables bajo el sol o la lluvia y apiñándose peligrosamente en los controles policiales de acceso a Marruecos eran una imagen indigna, más propia de un país bananero. Cada tanto tiempo, una mujer moría asfixiada o pisoteada por sus semejantes en las avalanchas que se formaban en los estrechos pasos fronterizos de Tarajal o de Beni Ensar. Había más razones que abonaban la voluntad marroquí de acabar con aquel fenómeno: si hace

cuarenta años el contrabando era una actividad de supervivencia individual, con el tiempo se había refinado y profesionalizado por medio de unas mafias que operaban a ambos lados de la frontera: las mujeres-mula hace tiempo que ni siquiera sabían lo que transportaban, pues llegaban a una enorme nave en la periferia ceutí o melillense, allí recibían un paquete perfectamente embalado, con forma cuadrada y unos 50 kilos (y hasta 90) de peso, y más tarde un representante de la misma mafia recepcionaba el paquete en otra nave en Marruecos. La porteadora cobraba entre 30 y 50 euros por su trabajo del día (a más peso, más dinero). A continuación, el paquete era desembalado y su contenido —galletas, champú, latas de sardinas, mantas, peines… ellas no lo sabían— terminaba distribuido en los días siguientes por tiendas de todo Marruecos a precios claramente ventajosos frente a los del circuito local que sí pagaban impuestos.

Ceutíes y melillenses se echaban las manos a la cabeza, pero era comprensible que Marruecos quisiera acabar con el contrabando: por razones económicas y por razones sociales. Si aquello suponía "asfixiar" a las dos ciudades españolas, como titulaba profusamente la prensa española, era la consecuencia inevitable de no querer asfixiar las poblaciones vecinas, que no hacían sino perpetuar una vida a la sombra del contrabando. No había nada político en aquella decisión. Al menos por el momento.

En octubre de 2019, poco antes de que apareciese en el mundo el coronavirus, el Gobierno marroquí interrumpió casi sin avisar el contrabando con Ceuta. El director de Aduanas, evitando escrupulosamente todo comentario político, me dijo que su Gobierno solo pretendía transformar esas fronteras en lo más parecido a un aeropuerto: un turista entra con una maletita pequeña a pasar el fin de semana y regresa con la misma maleta. Tal vez haya comprado un pantalón o unas latas de aceitunas, pero lo que no era normal era ver a personas con maletones de 30 kilos transportando decenas de artículos de confección que luego revenderían en Marruecos sin el menor control.

El razonamiento era impecable, pero había un pequeño gran problema: ¿qué iba a ser de las personas que vivían —más bien subsistían— del porteo de mercancías? ¿Había un plan B para ellas? ¿Dónde se iban a colocar si el problema estructural de las regiones de Tetuán y Nador era precisamente

la falta de actividades que generasen empleos por millares para absorber toda esa mano de obra?

Entonces llegó la pandemia y el Gobierno marroquí tomó medidas drásticas de aislamiento del país, terrestre y marítimo contra el virus. Ceuta y Melilla quedaron cortadas de su entorno inmediato y sus fronteras selladas. No pasaban ni mercancías ni personas. Las dos ciudades estaban ahora estranguladas: vetados los pasos hacia el sur, su único acceso al mundo exterior era el Mediterráneo y el único modo de salir de allí era subir en un ferri e ir a la península. La sensación de encierro era total.

Para Ceuta y Melilla aquello fue dramático. Pero para Beni Ensar o Castillejos supuso un golpe mortal: el fin de un modo de vida dependiente de la frontera. Y durante los meses que duró la pandemia, el descontento no paraba de crecer en ambas ciudades.

CEUTA OCUPADA, NADA MÁS QUE UN ESLOGAN

Cuando uno llega a Ceuta desde Marruecos, es notoria la ausencia de carteles indicadores en las carreteras que llevan hacia ella. *Sebta*, transcripción de su nombre en árabe, solo aparece en los últimos kilómetros, pero desde Tánger o Tetuán, las dos grandes ciudades marroquíes más cercanas (a 60 y a 40 kilómetros, respectivamente), no hay cartel alguno que indique su cercanía.

Es como si se negase de algún modo su existencia, la dolorosa presencia de un enclave extranjero en el territorio nacional. No es que quite el sueño al marroquí de a pie, pero crece escuchando las expresiones "Ceuta y Melilla ocupadas", "nuestras ciudades ocupadas". Así, desde los libros de la escuela hasta la televisión nacional, donde se informa de las previsiones del tiempo contando a las dos ciudades como parte del territorio nacional, aunque sea *usurpado*.

En diciembre de 2020, precisamente cuando se acababa de anular la Reunión de Alto Nivel entre Marruecos y España y flotaba en el aire una sensación de que se gestaba una crisis, el jefe de Gobierno marroquí Saadedín Otmani respondía a una entrevista de un canal egipcio y dijo lo que cualquier marroquí repite siempre: "Ceuta y Melilla son marroquíes como el Sáhara". Sus palabras crearon un enorme revuelo y motivaron una

protesta oficial del Ministerio de Exteriores español, que convocó a la embajadora, Karima Benyaich, probablemente debido al revuelo mediático, porque nadie en Exteriores en España desconoce que esas palabras forman parte del vocabulario de rutina entre los políticos marroquíes.

En realidad, hace veinte años que la reivindicación de Ceuta y Melilla no figura en la agenda política marroquí. De hecho, el rey Mohamed VI nunca se ha referido de manera explícita a esta cuestión, dando la impresión de que pretende dejar la cuestión para su sucesor mientras él se dedica a resolver definitivamente la cuestión nacional por excelencia, la del Sáhara, para pasar a la historia como el rey que culminó "la integridad territorial con el sur".

Mohamed VI nunca ha querido referirse, por ejemplo, a la "célula de reflexión" sugerida en tantas ocasiones por su propio padre, Hassan II. Aquella idea, que provocaba urticaria en la diplomacia española, no era descabellada: el difunto monarca venía a decir que España y Marruecos deberían sentarse juntos a "reflexionar" sobre el futuro de Ceuta y de Melilla, que inevitablemente iba unido al de sus regiones vecinas. Una célula que estudiase proyectos comunes de desarrollo, de comercio o de turismo, aunque con el objetivo final de "devolver" su soberanía a Marruecos. Algo parecido había hecho el Reino Unido con Hong Kong y Macao antes de entregar ambas ciudades al Gobierno de China. La mera idea de asociar a Rabat para hablar del futuro de las dos ciudades hizo que España nunca recogiera la idea ni como un acuse de recibo.

Prueba de que el estatus de Ceuta y Melilla no ha sido prioritario para el rey Mohamed VI fue el incidente de tintes surrealistas del brazo de Estopiñán. Pedro de Estopiñán fue el comendador castellano que en 1497 conquistó Melilla para la corona de Castilla, y una estatua se levantaba en su honor en la ciudad desde hacía décadas (estatua, por cierto, modelada por un musulmán llamado Mustafa Arruf). Una noche de noviembre de 2012, unos desconocidos cercenaron con una sierra el brazo con la espada de Estopiñán, que dejaron mutilada. El suceso no trascendió fuera de Melilla, parecía un acto vandálico cualquiera, pero tres semanas después se descubrió la verdad: dos marroquíes miembros del Comité de Liberación de Ceuta y Melilla, Yahya Yahya y Said Chramti, aparecieron en Rabat con el brazo amputado de Estopiñán, que aún sostenía la espada y se

fotografiaron con él en el Mausoleo de Mohamed V, un lugar simbólico en Rabat donde están enterrados los últimos reyes. Yahya y Chramti eran dos personas bien conocidas por las policías española y marroquí, a los que nadie se tomaba muy en serio. Chramti, un gigante de casi dos metros, protagonizaba altercados en la frontera melillense cada dos por tres, mientras que su jefe, al que le gustaba ser llamado "el senador Yahya", porque fue durante un tiempo miembro de la Cámara de Consejeros (alta), era el presunto ideólogo del movimiento y el que hablaba con los periodistas, pero tampoco estos se lo tomaban en serio. Los dos sujetos se pasearon por Rabat con el brazo de Estopiñán, pidieron ser recibidos en Palacio, en el Gobierno, en los partidos políticos, sin el menor éxito. Ni siquiera la prensa local les prestó mayor atención. Prometieron que el brazo arrancado iría a parar a un museo, pero nadie supo qué pasó con él. Estaba literalmente guardado en un cajón, y un día de julio de 2020, en vísperas del centenario de la Batalla de Annual, Yahya Yahya me llamó por teléfono para contarme que sus acólitos habían enterrado el olvidado brazo de Estopiñán en un lugar impreciso de la llanura de Annual. Unas fotos del brazo cercenado escondido en un hoyo y luego enterrado así lo atestiguaban. Ni siquiera entonces, en plena crisis hispano-marroquí, nadie lo quiso tomar en serio.

Aquel incidente de tintes berlanguianos dejó muy claro que nadie en Rabat quería sacar rédito político de una "hazaña" tan osada y tan significativa. No había la menor voluntad por traducir en hechos reales el eslogan de *Sebta ua Meliliya, magrebiya* (Ceuta y Melilla son marroquíes).

Aquel mismo año de 2012, en el mes de agosto, siete seguidores de Yahya y Chramti se acercaron una noche sigilosamente a nado hasta el Peñón de Vélez de la Gomera (uno de los islotes y peñones de soberanía española frente a las costas marroquíes) y plantaron una bandera de Marruecos sin que el contingente militar español, todos ellos dormidos, tuviera tiempo de impedirlo. Los activistas se hicieron una fotografía junto a la bandera y luego se pavonearon de su gesta en las redes sociales. Tampoco entonces obtuvieron la menor notoriedad, y pese a su insistencia ante los periodistas, ni siquiera los reporteros marroquíes les prestaron atención.

Ha habido durante todo el reinado de Mohamed VI un consenso no

escrito de "no tocar" la reivindicación de Ceuta y Melilla, y así se ha respetado durante los centenares de reuniones que los ministros españoles han celebrado en Rabat con sus contrapartes marroquíes. El tema de Ceuta y Melilla "no toca", "no es el momento", me repetían una y otra vez los ministros marroquíes, negándose a pronunciar una sola palabra que pudiera ser malinterpretada.

CEUTA, SIEMPRE EN EQUILIBRIO

La ciudad de Ceuta es una gran desconocida, tanto para Marruecos como para España. Como Melilla, podría ser un perfecto ejemplo de convivencia entre culturas, y en muchos casos lo son. En ella conviven cuatro religiones (cristiana, musulmana, judía e hindú), pero la musulmana dista mucho de ser una "minoría": según las cifras de UCIDE (Unión de Comunidades Islámicas de España), un 43% de la población ceutí es musulmana, frente a la media nacional española, donde los musulmanes suman el 4% de la población.

El hecho de que los musulmanes ceutíes tengan todos orígenes familiares en Marruecos y apellidos comunes con las poblaciones vecinas de Castillejos o Rincón ha arrojado tradicionalmente una sombra de sospecha sobre esta población como agente oculto o "quinta columna" de Marruecos. No ayuda que el propio país magrebí reconozca su injerencia en las mezquitas de la ciudad. En una entrevista en 2018, el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Tawfiq, me confesó sin rubor que su país financia 34 de los 42 templos islámicos en Ceuta, y paga además los sueldos de 95 funcionarios religiosos de la ciudad (entre predicadores, imanes y almuédanos). Las cifras son similares para Melilla. A Marruecos siempre le ha obsesionado controlar el islam en las que considera "sus" poblaciones: lo hace en la península y lo hace en Ceuta, con la idea de que es la mejor manera de no romper el cordón umbilical profundo con la madre patria. Una consecuencia de esto es, por ejemplo, que los sermones de las mezquitas de Ceuta sean en árabe y no en español. Los espías del CNI necesitan a muchos traductores en la ciudad.

¿Qué hace España por integrar a unos ciudadanos y apartarlos así de la órbita del vecino? Según Carmen Echarri, una navarra directora de *El*

Faro de Ceuta y observadora privilegiada en una ciudad en la que lleva viviendo más de veinte años, la escuela está siendo el principal factor de integración de los musulmanes. Salvo algún colegio religioso confesional, la gran mayoría de escuelas ceutíes tienen un alumnado mixto y los niños crecen y se relacionan al lado "del otro", pues las tasas de escolarización ya se han generalizado entre todas las poblaciones. Y es, en efecto, en la escuela donde han comenzado a reconocerse las fiestas islámicas más importantes, como la del fin de ramadán o la Fiesta del Sacrificio (también conocida como Fiesta del Cordero). Pequeños detalles, como el hecho de que la ciudad destine partidas presupuestarias para la iluminación de las calles en ramadán al igual que lo hace en Navidad suponen símbolos muy importantes para avanzar en esa integración y hacer verdadero el eslogan no siempre cierto de una ciudad multicultural.

Y aunque cada vez es más fácil encontrar apellidos musulmanes en las instituciones de la ciudad —empezando por la Asamblea local—, el Poder con mayúsculas se encuentra en manos "cristianas", como bien recuerda Karim Prim, un empresario local hiperactivo en las redes sociales y en la vida civil. Hablamos del poder político, económico, cultural o militar: en las altas instituciones de la ciudad, casi no existen apellidos musulmanes. Curiosamente, las instituciones donde la presencia musulmana crece más rápido son las relacionadas con la seguridad: Policía, Guardia Civil y Ejército. Muchos recordarán la sorpresa que causaron los soldados españoles que en los días de la "invasión" hablaban en árabe a los marroquíes que se encontraban en frágiles balsas en el agua para tranquilizarlos y que no volcasen.

UNA CIUDAD DEPRIMIDA POR LA CRISIS

Karim Prim sostiene que aquella llegada masiva de emigrantes ha servido, paradójicamente, para reforzar el sentimiento común de pertenencia a la ciudad entre todos los ceutíes, porque la amenaza que ello supuso para la vida en la ciudad fue sentida del mismo modo por cristianos y musulmanes. Hubo, sin embargo, quien esos días trató de utilizar la acción de Marruecos para poner en duda la convivencia y la fidelidad de los musulmanes locales, como fue el caso de Vox. La visita de Santiago Abascal

a la ciudad en la semana más tensa de su historia reciente fue muy mal recibida, y acabó en una algarada callejera con algún brote de violencia en el corazón de la ciudad, la Plaza de África. No se conformó Vox con esa visita; pocos días después, su portavoz en la Asamblea, Carlos Verdejo, tuvo un agrio enfrentamiento con la diputada del Movimiento Democrático y Ciudadano, Fatima Hamed, a la que espetó con sorna: "Nunca jamás usted va a tener una diputada en Madrid como tenemos nosotros, quizá lo vaya a tener en el Reino de Marruecos", agitando así de nuevo el fantasma del quintacolumnismo que tanto duele a los musulmanes. El propio presidente de la ciudad, Juan Vivas (PP) le pidió retirar sus palabras con este mensaje: "Marruecos no tiene nada que ver aquí, no hay ningún diputado que esté a favor de Marruecos". Pero conviene no olvidar que Verdejo no es un electrón libre: Vox fue el partido más votado en Ceuta en las últimas legislativas (35% de los votos).

Hay que entender el contexto en que se produjo la oleada migratoria en la propia ciudad de Ceuta: por culpa del coronavirus, la ciudad llevaba quince meses con la frontera cerrada, cortada por tierra de su región vecina, y su única salida era el ferri que la conecta con la península y que falla en los días de mar gruesa. Esto significa que todas las personas que cruzaban a diario desde Marruecos para trabajar en los servicios (principalmente el doméstico) habían perdido sus trabajos desde el cierre fronterizo. Algunas familias ceutíes seguían mandando puntualmente sus sueldos a estas empleadas por transferencia bancaria, pero otras, también asfixiadas por la crisis, habían dejado de hacerlo.

Porque el cierre de la frontera había sido el segundo clavo en el ataúd: pocos meses antes, en octubre de 2019, el Gobierno marroquí había interrumpido el contrabando, con lo que la ciudad vivía un momento de crisis económica profunda. No hay que olvidar que Ceuta es una población que casi no genera actividad productiva (hasta los salazones de pescado cerraron por no poder competir con Marruecos), y era el comercio el verdadero motor de la ciudad. De hecho, la crisis puso en evidencia la enorme dependencia de la ciudad de los flujos humanos con Marruecos, algo que no siempre los ceutíes quieren ver. Tras un año de cierre fronterizo, el desempleo había subido hasta el 28% de la población.

La otra fuente generadora de empleos en Ceuta no es sino el Estado español y las distintas Administraciones. Es la cifra más alta de España,

con un 52% de funcionarios (9.614, de los cuales 3.200 son militares y 1.040 policías). Este segundo detalle también revela la dependencia vital del mismo Estado, al que los ceutíes ven con frecuencia como el lejano padre que tiene a su hija olvidada más allá del Estrecho.

"Si algo tuvo de positivo el aluvión migratorio —reflexiona la periodista Carmen Echarri— es que puso a Ceuta en la agenda. Ha permitido que se vean nuestros problemas. Ahora bien, hay una sensación generalizada de inquietud, hasta terror sicológico, por el futuro inmediato: ¿qué va a pasar? Ceuta no está normalizada, porque su población está quemada y sin vías de escape".

El presidente Pedro Sánchez entendió que en los días de la crisis se necesitaba un gesto para con Ceuta y visitó la ciudad durante unas horas aquel fatídico 18 de julio (también lo hizo en Melilla ese mismo día). Pocas horas antes había dicho en Madrid lo que todos los ceutíes querían oír: que España defendería su integridad territorial con los medios que fueran necesarios. También desde Europa llegaban mensajes en este sentido: que Ceuta era la frontera de la Unión Europea y atacarla era como atacar a la UE.

¿Se atreverá el Gobierno español a organizar una visita del rey Felipe VI a Ceuta como gesto rotundo de afirmación de la soberanía sobre la ciudad? Es improbable, pues todos recuerdan que en 2007 la visita de su padre Juan Carlos I a las dos ciudades africanas provocó otro solemne enfado del vecino, que retiró temporalmente a su embajador en Madrid. Las visitas de los reyes a Ceuta o Melilla son otro de los tabúes no escritos que permiten mantener la relación bilateral dentro de los límites de la cordialidad, y alcanzar así un equilibrio que durante varias décadas ha sido estable. Ahora el futuro se adivina mucho más incierto. España teme hasta los estornudos de su vecino.

CAPÍTULO 4
EL SÁHARA, CUESTIÓN EXISTENCIAL

El rey Mohamed VI lo dijo sin medias tintas en un discurso de 2014: en la cuestión del Sáhara "no hay grados en el patriotismo ni en la traición: o se es patriota o se es traidor". Sus palabras no sorprendieron a nadie dentro de Marruecos, porque no hay ningún otro tema, aparte tal vez el del régimen monárquico, que suscite tal unanimidad nacional. La clase política de todas las tendencias (islamista o laica, derecha o izquierda), así como los sindicatos, las asociaciones profesionales, los intelectuales, los artistas… es imposible encontrar disidencia en una cuestión que define el ADN del Marruecos contemporáneo. Pero lo más preocupante es que esta unanimidad afecta no solo al principio mismo de la marroquinidad del Sáhara, sino al modo concreto en que las políticas sobre el Sáhara se gestionan desde Rabat: el despliegue militar (100.000 soldados permanentemente acuartelados o desplegados en el territorio), el generoso (y opaco) reparto de ayudas a la población, los enormes medios financieros con que la diplomacia marroquí defiende la causa, la frecuente expulsión de extranjeros que tratan de llegar a El Aaiún: ninguna de estas prácticas merecen jamás el menor reproche, crítica o siquiera pregunta por parte de nadie, pues apartarse un milímetro de la línea oficial supone inmediatamente ser tachado de traidor a la patria.

Desde el extranjero, es imposible comprender cómo el Sáhara es una cuestión existencial para el Marruecos contemporáneo, sobre la que gravita todo lo demás. En España, único país del mundo donde la cuestión saharaui aún importa debido al complejo histórico de culpa, la clase política suele darse cuenta al llegar al poder de que para el vecino del sur esa cuestión es intocable. Lo ha entendido el PSOE y también el PP, y hasta Podemos, que desde su entrada en el Gobierno de coalición ha temperado mucho sus proclamas favorables a la independencia saharaui. Incluso los partidos nacionalistas vascos y catalanes, siempre cercanos al Polisario,

suelen ser más pragmáticos cuando gestionan sus Gobiernos autonómicos, y se vuelven más comprensivos con la sensibilidad de Marruecos al respecto.

PARTE DE LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL

Ya desde la escuela primaria, el niño crece escuchando y cantando el mantra del *Sáhara marroquí* y la epopeya nacional de la reunificación territorial. Los billetes de 100 dírhams (que están entre los de mayor circulación) han tenido impresa durante muchas décadas una imagen de la Marcha Verde, la televisión la recuerda constantemente, y en todas las ciudades hay una gran avenida o un barrio entero que se llama al Massira (la marcha), en referencia a aquel momento épico en la historia nacional, cuando decenas de miles de civiles desarmados fueron movilizados por Hasán II, con un Corán en la mano y una bandera en la otra, para atravesar los límites del Sáhara español, ocupar la tierra que consideraban suya y obligar a los españoles al abandono precipitado del territorio.

Sobre el Sáhara los marroquíes han escrito libros, han filmado películas, han creado institutos de estudios saharianos, todo con un único fin: apuntalar la tesis oficial de una sola patria, sin dar cabida casi nunca al menor discurso crítico. En los primeros años del reinado de Mohamed VI, cuando se respiraba una cierta apertura, tres periodistas marroquíes de medios distintos *se atrevieron* a viajar por separado a Tinduf, la casa del enemigo, sede del Frente Polisario, para ver con sus propios ojos si eran efectivamente un grupo de mercenarios que tenía a toda la población saharaui secuestrada en el campamento de refugiados, tal como machaconamente repite la tesis oficial. De los tres, Ali Lmrabet vive hoy en el exilio en Barcelona, Ali Anouzla tiene pendiente un juicio por terrorismo y ya está retirado del periodismo, mientras que Ahmed Benchemsi terminó trabajando para Human Rights Watch. Ser periodista y dar la palabra al enemigo termina pagándose. Hoy, en 2021, es inimaginable que un periodista marroquí se atreva a prestar un altavoz al Frente Polisario.

Y junto al discurso oficial, ha prosperado además otra idea compartida por la mayoría aplastante de marroquíes: la de que el Sáhara ha costado

demasiada sangre y demasiado dinero al bolsillo del ciudadano, incluidas las prebendas sin fin que se ofrecen a los saharauis solo por serlo. El economista Fuad Abdelmoumni escribió en la década pasada que los esfuerzos internos y externos por defender la causa nacional costaban al Estado marroquí una cantidad anual de entre el 3 y el 5% del PIB del país. Esa idea significa que tantos sacrificios no pueden quedar en nada y que por consiguiente la pertenencia del Sáhara a Marruecos es innegociable.

Los extranjeros que llegan a Marruecos tardan en comprender esa vinculación sentimental profunda con el Sáhara, tierra que por otro lado la gran mayoría de marroquíes no ha visitado nunca aunque la consideren suya. Ya se trate de diplomáticos, empresarios, periodistas o cooperantes, los extranjeros pronto entienden que sobre la cuestión del Sáhara no caben puntos de vista divergentes, no es posible expresar la menor duda sobre la pertenencia del Sáhara a Marruecos hasta el fin de los tiempos y que, en suma, es mejor cambiar de tema cuando la cuestión sale a relucir. Esto es particularmente cierto para los españoles, a quienes el marroquí adivina por defecto un corazón propolisario, y es frecuente que nos pregunten que por qué nos empeñamos en apoyar a los malos de la historia. Es una pregunta trampa, porque no admite muchas respuestas.

La tesis marroquí es que, en el reparto africano decidido por las potencias europeas en la Conferencia de Berlín, primero (1906), y posteriormente en la Conferencia de Algeciras (1912), el Reino de Marruecos había corrido la mala suerte de ser troceado entre dos potencias europeas, Francia y España. Así, Francia se reservó las partes más ricas del territorio y España tuvo que contentarse con sus "márgenes": el norte del país, con el inhóspito e indómito Rif como eje central, más el sur desértico del Sáhara, además de los protectorados de Sidi Ifni y Tarfaya, ambos alrededor de dos colonias pesqueras. Para Marruecos, cuando España salió precipitadamente del Sáhara en 1975, concluyó la colonización extranjera del territorio y culminó así la unidad nacional del reino.

Sin embargo, no es así como las Naciones Unidas contemplan la cuestión: el Sáhara Occidental figura todavía en la lista de territorios no autónomos y es, con mucha diferencia, el territorio más extenso de esta lista compuesta mayormente por pequeñas islas en el Pacífico y el Caribe, además del peñón de Gibraltar. Estos 17 lugares son, en vocabulario de la ONU, "territorios cuyos pueblos no han alcanzado todavía plenitud de

Gobierno propio". Cada año, en otoño, la Cuarta Comisión de la ONU (o C4) se reúne para tratar sobre estos territorios pendientes de descolonización, para disgusto de Marruecos, que preferiría circunscribir el asunto al Consejo de Seguridad, donde cuenta al menos con el sólido apoyo de un miembro con derecho a veto, como es Francia, siempre dispuesta a salir en ayuda de su antigua colonia. La cuarta comisión se convierte en teatro de ásperos debates entre los diplomáticos marroquíes y los argelinos, para quienes también la cuestión saharaui tiene un carácter existencial dentro de su pugna con el vecino Marruecos por la hegemonía en el Magreb.

ARGUMENTOS DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

La historia es escurridiza y admite múltiples lecturas; así, Marruecos y el independentismo saharaui tienen diferentes versiones de lo que el Sáhara ha representado en tiempos pasados y los vínculos que sus pobladores han tenido con los sultanatos de Fez o Marrakech a lo largo de los siglos. Rabat y el Polisario acudieron para dilucidar la cuestión al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que en 1975 falló que existían vínculos religiosos entre los saharauis y el emir al Muminín, autoridad religiosa representada por el sultán marroquí, pero que esos vínculos no equivalían a una relación política. Puede parecer definitivo, pero Marruecos ha interpretado ese veredicto, al menos de puertas adentro, como una victoria de sus tesis, de forma que la historia sigue siendo arma arrojadiza.

Tampoco la geografía es concluyente en lo relativo al Sáhara: las tribus que poblaban el Sáhara español —los *rguibat*, *tekna* o *larusiyin*— tienen continuidad más arriba del paralelo 27.40, el que marcaba el límite norte del territorio. Es ilusorio pensar que una cultura y una forma de vida iba a interrumpirse en una línea recta en el mapa; la lengua hasanía de los saharauis, sus ropas tradicionales (la *derraa* azul de los hombres y las *melfas* de las mujeres), su artesanía, su música y sus danzas también son las propias del sur marroquí, de las provincias de Guelmim, de Tarfaya y de Tantán. Sus habitantes, por otra parte, están emparentados de una u otra forma con los saharauis de El Aaiún o Bujador.

Los marroquíes suelen decir que el Sáhara Occidental es un país ficticio

por esa misma razón, y porque unas fronteras trazadas con una regla no pueden ser verdaderas. El argumento, con ser de peso, no sirve, porque con él perderían legitimidad todas las fronteras del vasto espacio africano del Sáhara y el Sahel, donde los colonizadores los separaron con contundentes líneas rectas.

Hassan II (1961-1999), el rey que marcó a varias generaciones de marroquíes y ha modelado sus mentalidades, fue también quien diseñó toda la estrategia con respecto al Sáhara: primero organizó la Marcha Verde, en la que no me detendré porque hay abundante literatura en España, pero conviene recordar que a efectos internos en Marruecos significó la subordinación de cualquier otro objetivo a la llamada causa nacional y obligó a los partidos políticos a alinearse tras la corona y la bandera en defensa del objetivo sagrado. Desde la Marcha Verde, la clase política marroquí fue perdiendo protagonismo y quedó domesticada por una monarquía ejecutiva que nunca creyó en el juego de la democracia.

Pacientemente, Hassan II ganó también la guerra del Sáhara (1975-1990) gracias a la estrategia de los sucesivos muros de defensa, que consiguieron asegurar el control del oeste atlántico, el único con núcleos de población, y fueron arrinconando al Polisario cada vez más al este, hasta dejarles solo el control (cada vez más frágil) de una zona que el Polisario llama "territorios liberados" que no suponen hoy en día ni la cuarta parte del territorio total y consisten únicamente en vastas extensiones despobladas de arena y piedras.

Pero la verdadera estrategia a largo plazo del monarca era la poblacional: llenar el Sáhara de colonos y diluir la población saharaui en ciudades habitadas por marroquíes con un aspecto cada vez más parecido a las urbes de tamaño medio de más arriba de la cordillera del Atlas.

En cierto modo, asistí al diseño y desarrollo de estos movimientos humanos que tuvieron lugar en los años 1991 y 1992: la ONU trataba de consensuar un censo poblacional de saharauis de cara a un futuro referéndum de autodeterminación. Se consideraban con derecho a voto a aquellos que se encontrasen en 1975 en el territorio (unas 74.000 personas, según el censo español) más sus descendientes. Marruecos comenzó entonces a reclamar derecho al voto a personas que pudieran demostrar parentesco familiar o tribal con los saharauis, aunque hubieran perdido la vinculación con el territorio. No era una reclamación teórica:

Hassan II organizó viajes de miles y miles de personas que acamparon en las afueras de El Aaiún o Dajla exigiendo ruidosamente su derecho a ser parte de las listas de votantes. Los barrios de tiendas donde se establecieron aquellos presuntos saharauis se llamaron al Wahda (campamentos de la unidad) y poco a poco fueron transformándose en bloques de pisos, calles asfaltadas y rotondas.

Los periodistas que cubríamos entonces aquella avalancha de personas que querían votar no teníamos acceso a sus campamentos; mejor dicho, la policía nos programaba las visitas para un día posterior, para poder disfrazar de saharauis a todos los presentes, distribuirles retratos de Hassan II y recibir así a los reporteros con música patriótica y gritos de "viva el rey". Era una puesta en escena demasiado burda, máxime cuando la lengua que hablaban demostraba que no tenían nada de saharauis. Pronto quedó en evidencia que aquellas personas eran habitantes desalojados de los barrios de chabolas de Casablanca y otras grandes ciudades marroquíes, trasladadas en masa hasta el Sáhara solo para hacer presión sobre las Naciones Unidas y los funcionarios que a duras penas trataban de confeccionar un censo creíble.

ANTIGUOS Y NUEVOS COLONOS

Aquellos pobladores de los años noventa se establecieron definitivamente en las ciudades saharauis y dieron un vuelco demográfico en el territorio. Aunque las estadísticas con distinciones étnicas están prohibidas en Marruecos, los saharauis calculan que en su capital, El Aaiún, ellos suponen no más del 40% de la población, y en el caso de Dajla, la segunda ciudad, el porcentaje de saharauis cae dramáticamente hasta un 10%.

La llegada de los pobladores marroquíes y la guerra de los años ochenta trajo también otras consecuencias, como fue la sedentarización casi definitiva de un territorio que en tiempos de los españoles era todavía nómada en gran medida, con tribus que se desplazaban de un lugar a otro con sus camellos en busca de agua y pastos. Hoy, todo aquello es apenas un recuerdo y la vinculación del saharaui con el desierto ya no es cotidiana y vital, sino que se reduce a excursiones de recreo de uno o varios días donde un grupo de familiares y amigos montan su campamento durante horas o

días para regresar más tarde a la ciudad. A título de ejemplo, en la región de El Aaiún vivían 367.758 habitantes en el último censo marroquí de 2014; de ellos, el 93% residía en las ciudades, un porcentaje superior a la de cualquier región marroquí.

Marruecos no tolera que se utilice la palabra "colonos" para sus pobladores en el Sáhara, del mismo modo que no tolera que se utilice la palabra "ocupación", ni en boca de nacionales ni de foráneos. Los diplomáticos y los periodistas nos vemos obligados a utilizar expresiones como "territorio administrado por Marruecos" o "bajo control marroquí", y hasta el vocabulario de las Naciones Unidas se ha ido adaptando a esta susceptibilidad, que como veremos más adelante puede causar problemas al mismísimo secretario general de la ONU.

La nueva realidad poblacional representó un problema inmediato para la ONU, que había creado la llamada Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), llegada al territorio en 1992, nada más declararse el alto el fuego que puso fin a la guerra. La estrategia de Rabat de hinchar el censo con marroquíes obligó a negociaciones sin fin para ver qué criterios documentales, familiares o tribales se aplicaban a los potenciales votantes. Hubo incluso un enviado especial para el Sáhara, el norteamericano James Baker, que llegó a plantear (en el llamado Plan Baker II) un referéndum donde tendrían derecho a voto todos los residentes en el territorio, fueran o no saharauis. Por extraño que parezca, el Polisario lo aceptó, pero no así Marruecos, que parecía no fiarse ni de su propia población. Si Hassan II se había sacado de la manga la expresión "referéndum confirmativo" como única opción en la mesa, su hijo Mohamed VI descartó definitivamente desde el año 2003 la idea del referéndum, para proponer en su lugar una autonomía de contornos imprecisos. Desde esa fecha, las negociaciones por el futuro de la excolonia española están en un punto muerto, pues el Polisario no acepta ninguna alternativa que no incluya una consulta de autodeterminación, y Marruecos ha dejado claro que nunca irá más allá de la autonomía. En cuanto al Consejo de Seguridad, único habilitado para decidir el futuro del Sáhara, su vocabulario ha ido cambiando en los últimos años hasta hacer desaparecer de sus resoluciones la palabra "referéndum" en favor de expresiones como "una solución realista y aceptable para las partes", más del gusto de la diplomacia marroquí.

UNA RELACIÓN CLIENTELAR CON LOS CIUDADANOS

Aunque Marruecos se empeña en presentar el Sáhara como "las provincias del sur", en todo punto iguales a las demás del país, hay numerosos aspectos en los que se manifiesta la particular relación que el poder en Rabat ha establecido con los habitantes en esas regiones, sean o no de origen saharaui, una relación que las propias instituciones marroquíes no dudan en calificar de "clientelar" en los escasos informes en los que a veces se atreven a deslizar algún atisbo de crítica a la gestión del territorio. Llaman de forma eufemística "economía de renta" al complejo sistema de privilegios que se reparten de forma no siempre transparente entre los habitantes del Sáhara y que convierten a toda la población en beneficiaria de las larguezas de un Estado que no trata del mismo modo al resto de sus ciudadanos. Nunca se ha dado una explicación pública de estos privilegios, pero es evidente que tienen un único objetivo: comprar la paz social.

Comencemos por los privilegios más "lineales": los precios de los productos de primera necesidad (aceite, azúcar, harina, té y combustibles) están subvencionados y tienen en el Sáhara precios rebajados con respecto a Marruecos; además, los funcionarios, que constituyen el grueso de la fuerza laboral en el Sáhara, tienen un sobresueldo por la penosidad que supone estar destinado en el extremo sur del país. En paralelo, las familias disponen de una "cartilla" heredada desde tiempos de la colonización española y todavía llamada así, que supone una ayuda de 2.100 dírhams (unos 200 euros).

Las compañías marroquíes están exentas de impuestos si se establecen en el Sáhara, tras una orden de tiempos de Hassan II pensada para animar a la presencia empresarial en el territorio. No son pocas las empresas que simplemente declaran su razón social en una región saharaui mientras que operan en Marrakech o Casablanca, sin tener un solo empleado en el Sáhara, y de hecho esta exención ha dado lugar a tantos abusos, más quejas del sector empresarial por lo que supone de competencia desleal, que comienza ya a desaparecer, aunque una vez más sin la menor transparencia.

Hay un grupo particular de ciudadanos que es merecedor más que ningún otro de la especial generosidad del Estado: los llamados "retornados", aquellos que rompieron con el Frente Polisario,

abandonaron los campos de Tinduf y regresaron a su tierra, en respuesta a las palabras de Hassan II dirigidas a sus hijos *extraviados*: "La Patria es clemente y misericordiosa" (atributos del mismo Dios). Con ello, el monarca prometía casa y empleo a los que huyeran de Tinduf e hicieran una demostración pública de lealtad a Marruecos. La casa era una realidad; el empleo, no siempre, porque muchas veces se trataba de empleos fantasmas donde ni siquiera había que hacer acto de presencia en las oficinas de El Aaiún, Bujador o Dajla.

Las prebendas ofrecidas a los retornados a veces van más allá: pueden consistir en una licencia para operar un taxi o una línea de autobús, una licencia de pesca para fletar un barco en las ricas aguas saharauis o un permiso para extraer arena de playa. Todas esas licencias, que en la lengua popular se llaman *grima*, son vitalicias y significan un vínculo irrompible con el Estado, siempre que el beneficiario, y por extensión toda su familia, no den muestras de desapego con el régimen marroquí.

Cuando los retornados son de peso, se les puede nombrar concejales en una ciudad, miembros de los consejos regionales, diputados en el Parlamento nacional o embajadores: este último es el caso de Ahmed uld Souilem, el último de los peces gordos del Polisario que se pasó a Marruecos en 2009 tras una larga carrera diplomática con el movimiento saharaui. Solo un año después de su deserción, Marruecos lo nombró embajador en España, donde pasó tres años sin pena ni gloria hasta ser sustituido por Fadel Benyaich, amigo personal de Mohamed VI.

La extensión de las prebendas, privilegios y otras ventajas materiales cuestan mucho dinero a Marruecos (nunca se ha hecho público cuánto) y son las que hacen que los saharauis gocen en Marruecos, en muchos casos, de fama de aprovechados o de indolentes. Han servido también al mismo rey Mohamed VI para esquivar el discurso cada vez más estructurado del movimiento saharaui, que protesta por el expolio de sus riquezas. "Por cada dírham de beneficio salido de la región, Marruecos invierte siete dírhams en su Sáhara", dijo el monarca en un discurso en 2014.

LA INTEGRACIÓN SOCIAL

Pero todas estas políticas de ayudas y subvenciones, de atracción a los

desafectos del Polisario y de otras excepciones, no esconden una realidad: cuarenta años después de la Marcha Verde, la integración social entre saharauis y marroquíes es nula: no se casan entre ellos, no socializan juntos ni comparten grupos de amigos comunes. Sigue imperando en ambas partes una línea invisible de ellos y nosotros. Con excepción de las ceremonias oficiales, las reuniones de saharauis y marroquíes son casi una excepción.

En los días en que el Polisario había declarado la guerra a Marruecos, el pasado noviembre, me encontraba en una casa de un saharaui que había invitado a un grupo de amigos, una buena parte de ellos retornados de Tinduf. Miraban absortos la televisión para ver las últimas noticias de esa guerra que Marruecos se empeñaba en negar, ávidos de noticias sobre los choques en las fronteras entre el Polisario y los militares marroquíes. Flotaba en el aire un sentimiento de solidaridad con sus hermanos que les hacía tener el corazón más cerca de Tinduf que de Rabat, y aunque hubieran abandonado al Polisario, sus sentimientos estaban con ellos. Era como si compartiesen la idea de que el Polisario tenía razón, pero no tenía futuro.

Uno de ellos (llamémoslo Larbi) contó en voz alta que al día siguiente había sido llamado junto a otros notables saharauis, gente que por rango o edad tienen una mayor consideración social, para participar en una ceremonia oficial organizada por las autoridades marroquíes para, precisamente, mostrar al mundo cómo la sociedad civil saharaui estaba unida tras la bandera marroquí para hacer frente a la agresión armada de los separatistas. En este tipo de ceremonias, los saharauis aparecen convenientemente vestidos con su *derraa* y sostienen una pancarta con proclamas patrióticas, una imagen que sirve a los medios oficiales marroquíes para mostrar con pruebas ante el mundo que también hay saharauis favorables a Marruecos. Dijo Larbi: "No sé si podré ausentarme mañana, porque ya son muchas las veces que he pretextado estar enfermo para no participar en ese circo", y toda la concurrencia se rió. El patriotismo de Larbi y de sus amigos era cuando menos muy tibio.

Otro saharaui me relató la siguiente escena que demuestra que la desconfianza entre Rabat y "sus" saharauis es bidireccional: este "retornado", prominente miembro del Polisario en el pasado y hoy cargo

electo en una institución local, vio su nombre entre los firmantes de una carta de apoyo al Gobierno de Rabat en su enésima disputa con alguna institución europea sobre la soberanía en el territorio. Nadie le había llamado previamente para incluir su nombre en el listado. Su opinión no importaba: se daba por supuesta, y no se atrevería a protestar por el hecho. Del mismo modo, una colega periodista obtuvo en Rabat unas declaraciones de un ministro sobre la guerra de 2020, de la que nadie quería hablar, pero el ministro le dijo que debía poner las palabras en boca de un electo local saharaui. "No puedo hacerlo, no he hablado con él", replicó ella. "No te preocupes por ese detalle, ahora mismo yo lo llamo y será como si hubierais hablado", zanjó el ministro.

En resumen, Rabat llena las instituciones locales de saharauis para proclamar así su legitimidad y su representatividad, pero las vacía por completo de competencias y significado. No es de extrañar que su propuesta de autonomía para el Sáhara suscite una gran incredulidad. Por mucho que Trump la apoye.

UN AGUJERO NEGRO INFORMATIVO

En noviembre de 2020, nada más declarar el Polisario la guerra a Marruecos, me desplacé hasta Dajla para comprobar *in situ* qué estaba sucediendo. Los periodistas trataban de llegar hasta Guerguerat, el punto donde comenzó todo, en el extremo sur, donde el Ejército marroquí se afanaba en "limpiar" la zona antes de permitir una especie de "viaje organizado". Opté entonces por dirigirme a El Aaiún, la ciudad con mayor masa crítica de saharauis, y para ello me camuflé en un gran taxi que compartí con dos personas más, uno de ellos un hombre que viajaba al entierro de su propio padre entre sollozos. En un control de carretera —hay decenas de ellos en el Sáhara, en mitad de la nada— la policía pidió nuestros documentos, y al ver mi nombre y hacer varias llamadas, me sacó del taxi. "No tienes permiso para viajar a El Aaiún", me explicaron. "¿Me van a dejar aquí tirado como un perro, en mitad del desierto? ¡Estoy acreditado con una tarjeta del ministerio!", repliqué, pero el policía ni siquiera pestañeó: seguía instrucciones.

El taxista se apiadó de mí y regresó hasta Dajla. Los otros pasajeros

habían enmudecido; aunque el hombre iba a perderse el entierro de su padre, no dijo nada salvo "no hay problema, no hay problema", pues lo último que quería era verse mezclado en un lío de periodistas. En un espeso silencio, regresamos hasta Dajla. No sabía qué hacer. Sabía que si escribía que "la policía marroquí impide a un periodista español entrar en El Aaiún tras la declaración de guerra", aquello significaría muy probablemente mi expulsión de Marruecos. Tuve que callármelo, como nos sucede tantas veces a los periodistas en este país. Aquella misma noche, regresé a Rabat.

Y es que el Sáhara es un lugar de excepción también para el periodismo: no existen en el territorio órganos de prensa independientes, y a los reporteros extranjeros se nos permite la entrada de forma arbitraria si al poder marroquí le parece conveniente. Cuando así sucede, la vigilancia a la que se nos somete es casi asfixiante: policías de civil o militar no tienen el menor reparo en demostrar que nos siguen, o se presentan en el hotel a preguntar "a quién ve, con quién habla, cuánto tiempo se queda".

En cuanto a los medios locales, los hay de dos tipos: antenas regionales de la televisión o la agencia marroquí, meros transmisores de la historia oficial, y un grupo de periodistas saharauis que ejercen en la clandestinidad, sin local propio ni tarjeta de prensa, y se dedican a documentar la represión marroquí del movimiento independentista. Se llaman Équipe Média y han ganado un premio por su documental *Three Stolen Cameras* (*Tres cámaras robadas*), rodado con financiación sueca. El título hace referencia a las imágenes rodadas, siempre a escondidas, que documentan cómo la policía marroquí en uniforme o de civil restringe la libertad de movimientos de los saharauis siempre que estos se disponen a organizar una protesta civil. Es tal la presencia policial en el Sáhara que los movimientos del independentismo son detectados antes incluso de que lleguen a juntarse una decena de personas, y por esa razón no se celebran jamás manifestaciones masivas, porque la policía aborta el más mínimo movimiento de descontento.

Y aunque son valientes en su periodismo de denuncia, los jóvenes de Équipe Média, con el combativo Ahmed Tanji a la cabeza, son patriotas antes que periodistas, y jamás darán una información que desacredite a los saharauis. Por esa razón, cada vez que se produce un caso de disturbios o

protestas en El Aaiún, abundan las versiones totalmente contradictorias, que en unos casos minimizan los hechos y en otros los hinchan (con abultadas cifras de heridos o de detenidos). Es muy difícil para la prensa independiente (y hasta para las organizaciones pro derechos humanos) encontrar la verdad entre versiones tan dispares, y por ello muchas veces el resultado es el silencio.

Tiene razón Ahmed Tanji: el Sáhara Occidental es un desierto informativo.

CAPÍTULO 5
UNA DIPLOMACIA SUPEDITADA AL SÁHARA

En diciembre de 2020, unas semanas antes de concluir su mandato, el presidente estadounidense Donald Trump se sacó un último as de la manga al anunciar al mundo por Twitter un acuerdo tripartito entre Estados Unidos, Marruecos e Israel por el que Washington reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Rabat restableciera relaciones diplomáticas con Israel, rotas en el año 2000. Trump anunció incluso que su país abriría un consulado en la ciudad de Dajla como muestra de apoyo a su nueva postura. Con ese anuncio sorpresivo, el presidente estadounidense sacó del olvido el conflicto saharaui, que languidecía en los últimos años sin visos de encontrarse una salida a un litigio de casi medio siglo.

El Sáhara volvió así al tablero de la geopolítica y Rabat se sintió envalentonado para exigir a los países de Europa un cambio de postura y "salir de la zona de confort", que según el ministro Nasser Bourita suponía escudarse tras las resoluciones de la ONU a la espera de una solución que nunca llegaba. Algunos pensamos entonces que el anuncio de Trump provocaría un efecto cascada por el que otros países se apresurarían a reconocer la marroquinidad del Sáhara, comenzando por el mismo Israel, pero nos equivocamos: ni un solo Estado ha seguido la senda de Trump y Rabat no ha logrado en los meses posteriores sumar nuevos adeptos a su causa.

Sin embargo, basta dar un repaso a lo sucedido en los últimos años para observar cómo Marruecos ha movido hábilmente sus piezas en el tablero internacional y ha conseguido, con una mezcla de presión, persuasión y seducción, ir arrinconando al Frente Polisario y convertir la idea de la independencia en el Sáhara en una quimera irrealizable. Han ayudado también las experiencias más bien calamitosas de los últimos nuevos Estados creados en África, como el de Sudán del Sur o Eritrea, sumido uno

en la miseria y la guerra y el otro en una espiral de represión que ha hecho huir a miles de eritreos de la pesadilla de su nuevo país. Además, Marruecos siempre se afana en recordar el volátil espacio sahariano/saheliano donde se encuentra el Sáhara Occidental, demasiado cerca de territorios donde el yihadismo medra sin freno, y alerta del peligro que supondría un nuevo Estado frágil, imán para las rutas de la migración clandestina y los adeptos de la yihad global.

La labor paciente y tozuda de la diplomacia marroquí en defensa de su obsesiva causa nacional ha ido dando sus frutos, aunque eso haya supuesto enfrentarse puntualmente con países tan poderosos como Estados Unidos, Alemania, Suecia, España, la Unión Europea o la ONU, como vamos a ver. Y lo más sorprendente es que Marruecos ha salido casi siempre indemne de estos retos, sin pagar consecuencias mayores en sus relaciones exteriores y sin dejar de ser considerado un país necesario para la estabilidad continental en África y un socio imprescindible para yugular el terrorismo y contener los flujos migratorios.

UN PULSO TRAS OTRO A LOS PAÍSES GRANDES

La apertura por parte de Marruecos de la frontera de Ceuta para dejar pasar a más de 10.000 personas en protesta por la postura de España sobre el Sáhara no es, ni mucho menos, un hecho aislado en Marruecos: en la última década Rabat ha elegido todos los medios de presión posibles para defender sus intereses, enfrentándose sin rubor a potencias mucho más grandes.

En 2013, el Gobierno estadounidense de Barack Obama quiso sacar al conflicto del Sáhara de su marasmo y anunció un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad para dotar a la misión de la ONU en el terreno (MINURSO) de competencias en la observación de los derechos humanos en el Sáhara, vieja reivindicación del independentismo. Rabat montó en cólera y anuló unilateralmente los ejercicios militares mixtos African Lion cuando gran parte de los soldados estadounidenses y de sus pertrechos ya habían desembarcado en la playa marroquí de Tantan donde cada año se realizan las maniobras. A continuación, Rabat envió urgentemente delegaciones diplomáticas a todas las capitales de los países con asiento

permanente en el Consejo y pudo finalmente conseguir que Estados Unidos se retractara y dejara a la MINURSO descafeinada: es la única misión de paz de las ocho existentes en territorio africano sin competencias en derechos humanos y que no tiene papel alguno ante la sociedad civil local.

Dos años después, en 2015, el entonces nuevo Gobierno sueco, con un partido socialdemócrata simpatizante con el Polisario, planteó la posibilidad de reconocer la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La represalia de Rabat llegó por el lado económico: anuló en el último momento, solo horas antes de su celebración por todo lo alto, la inauguración de una enorme planta de la famosa franquicia sueca IKEA, de 27.000 metros cuadrados y que había requerido una inversión de 40 millones de euros. El presidente del Gobierno había convocado una reunión de urgencia de todos los partidos con ese único asunto en el orden del día, y uno de sus participantes, Nabil Benabdallah, me dijo entonces que la soberanía "había que defenderla por todos los medios, incluso los económicos". Daba igual si la imagen de socio fiable para una inversión extranjera salía claramente perjudicada. IKEA tardó seis meses en abrir finalmente su planta, los mismos que tomó el Gobierno sueco para anunciar que retiraba su proyecto de reconocer la RASD.

A principios de 2016 el enfado de Rabat fue con la Unión Europea: el Tribunal de Justicia de la UE había anulado un acuerdo agrícola y pesquero euromarroquí por incluir el territorio y las aguas del Sáhara, de soberanía aún en disputa. Aunque la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión, recurrió el fallo, Marruecos suspendió todos los contactos con las instituciones europeas desde enero y durante cuatro meses. El Gobierno marroquí (primer beneficiario de los fondos europeos de buena vecindad: 200 millones de euros en aquel año) emitió una nota en la que demostró lo que pensaba de la división de poderes en la UE: dijo entonces que "no puede aceptar pasar de mano en mano entre los distintos servicios e instituciones de la UE". La crisis terminó cuando la Comisión garantizó a Rabat que el acuerdo seguiría aplicándose hasta agotar todos los recursos judiciales y que Marruecos tendría información privilegiada sobre el transcurso del caso en los tribunales.

El cuarto capítulo de desafíos tuvo como protagonista a Ban Ki-moon: el secretario general de la ONU, en la recta final de su mandato, quiso visitar

el Sáhara Occidental, pero Rabat no dio su plácet y más bien puso una traba tras otra. Ban decidió entonces que visitaría a "la otra parte", los campamentos del Frente Polisario, y se personó en Tinduf en marzo de 2016, donde tuvo un recibimiento por todo lo alto y, conmovido por lo que había visto aquella tarde —según relató posteriormente—, dijo lamentar la situación de los refugiados y sobre todo la vida de todos aquellos nacidos "en la ocupación".

Ocupación. Había pronunciado la palabra prohibida en Marruecos, y pronto se vieron las consecuencias. Primero, el Gobierno montó una manifestación gigantesca en Rabat contra Ban, y no escatimó gastos para hacer venir de todo el país a decenas de miles de personas que ni siquiera sabían qué hacían allí —algunos campesinos confundían a Pokémon con Ban Ki-moon, como yo mismo pude ver— pero obedecían a una consigna: había que insultar a Ban de todas las maneras posibles. Desde Nueva York, Ban dijo sentirse "indignado" por las imágenes de la manifestación donde aparecía caracterizado con las orejas de un asno en presencia de varios ministros, pero lejos de obtener reparación, el ministro de Exteriores marroquí lo visitó poco después en la sede de la ONU y le exigió que se disculpara con el Gobierno y el rey Mohamed VI. "En una década de servicio en la ONU, nunca antes había visto u oído hablar de un comportamiento tan inaceptablemente grosero por parte de ningún Estado miembro", ha escrito Ban en sus memorias.

Aquel enfado con el secretario general fue más lejos: el Gobierno marroquí expulsó del Sáhara a 73 miembros del contingente de la MINURSO, el llamado "sector civil", que estuvieron varios meses sin poder regresar a Marruecos. Consideró que era una medida proporcionada a la gravedad de las palabras de Ban.

Como se puede ver, Rabat no ha dudado en tomar represalias militares, económicas y diplomáticas, sin importar la talla del adversario, y lo más sorprendente es que ninguno de los países o instituciones afectadas ha tomado medidas recíprocas contra Marruecos; es más, han aceptado doblegarse ante las imposiciones del país magrebí, que ha demostrado que sabe defender sus intereses con uñas y dientes sin pagar por ello las consecuencias.

CON ÁFRICA, LA ESTRATEGIA ES LA SEDUCCIÓN

El rey Mohamed VI ha remediado uno de los mayores errores de su padre, como fue el abandono de la Unión Africana en 1984 en protesta por la admisión de la República Árabe Saharaui Democrática. Hassan II limitó entonces sus vínculos continentales al África francófona, y particularmente Gabón, Senegal y Costa de Marfil, sus aliados más fieles. Eran, por así decirlo, los más prooccidentales del continente, los que huían de la retórica antiimperialista que hizo furor en el continente durante décadas, todo alrededor del eje Argelia-Nigeria-Sudáfrica, que pasan por ser hasta el día de hoy los sostenes más sólidos del Polisario.

A Mohamed VI esta "política de la silla vacía" no le convencía, pero antes de solicitar su regreso a la Unión Africana, desplegó pacientemente una estrategia de seducción en múltiples frentes, de entre los que resalta la diplomacia religiosa: regaló cientos de miles de Coranes por todo el continente y envió por toda África misiones de imanes que predicasen el islam marroquí o "islam del justo medio", así llamado para expresar su alejamiento tanto del fanatismo como del aperturismo "demasiado liberal". En paralelo, anunció una "estrategia nacional de inmigración y asilo" para regularizar a decenas de miles de subsaharianos, algo que lo distinguió a nivel continental y le valió numerosos elogios (aunque finalmente los resultados no fueran tan ambiciosos). También pesaron en favor de la imagen de Rabat una política de puertas abiertas con estudiantes de todo el continente becados en las universidades marroquíes, que luego expandirían el poder blando marroquí por África. Y por último, la muy potente Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP, siglas en francés) comenzó a montar plantas de fertilizantes en todo el continente para ayudar a desarrollar el sector agrícola africano al ritmo que lo había hecho el marroquí.

Y así, el 30 de enero de 2017, en la cumbre africana de Adís Abeba, Mohamed VI hizo una entrada triunfal, con todos los delegados puestos en pie antes y después de su discurso. "Es bello el día en que uno vuelve al hogar, tras una larga ausencia. África es mi continente y es mi casa", comenzó diciendo el rey, y la audiencia estalló en aplausos. Marruecos se disponía a ejercer en la UA como gran potencia africana.

¿Qué quería hacer Marruecos en la UA? ¿Expulsar a la RASD? Eso

habría sido demasiado burdo. Su estrategia iba a ser más paciente y más costosa, pero probablemente más eficaz.

La parte más visible de esta estrategia eran los consulados en el Sáhara: una quincena de países subsaharianos (además de Jordania, Emiratos Árabes y Haití) comenzaron a abrir desde 2020 consulados en las ciudades saharauis de El Aaiún o Dajla, algo que parecía incongruente teniendo en cuenta la escasa población subsahariana en esas ciudades, pero a nadie se le escapaba el espaldarazo político que ello significaba. Que los consulados no tuvieran trabajo real o que fueran financiados enteramente por Marruecos no sorprendía a nadie; es más, una fuente diplomática dijo a la revista *TelQuel* que era "una práctica normal" en la diplomacia y puso el ejemplo de Catar, país que paga a algunos países para que instalen embajadas en su territorio (omitió señalar que Catar, sentado sobre un yacimiento gigante de gas, tiene recursos sobrantes para hacer eso).

Más significativo, y eso no tuvo la más mínima publicidad, fue saber que Marruecos estaba pagando la construcción de la nueva sede del Ministerio de Exteriores de Guinea Bissau. ¿Era un justo pago por su consulado recién estrenado en Dajla en octubre de 2020? La pregunta era legítima, dado que el anuncio de la construcción de la nueva sede diplomática "a título de donativo marroquí" fue hecho por la ministra Suzi Barbosa en noviembre, apenas un mes después de asistir a la apertura de su oficina en Dajla y deshacerse en proclamas sobre la marroquinidad del Sáhara. Barbosa dejó caer que no hacían sino seguir el ejemplo de Gambia, país que también era supuestamente beneficiario de la generosidad marroquí tras haber abierto otro consulado en la misma ciudad.

Nigeria, potencia económica y diplomática continental, se presenta como un hueso más duro de roer, pero Rabat está determinado a romper la alianza de Abuja con el Polisario. Primero, el Gobierno marroquí ha anunciado el pasado marzo una megaplanta de fosfatos en el país africano tras un acuerdo entre la OCP marroquí y la Autoridad Soberana de Inversiones de Nigeria, una planta para producir en ese país 750.000 toneladas anuales de amoniaco y un millón de toneladas de abonos de fosfato para el sector agrícola. Al mismo tiempo, Marruecos proyecta con Nigeria un gasoducto africano que parta de los ricos yacimientos del delta del río Níger y atraviese todo el oeste de África, hasta llegar a Marruecos,

país que no dispone de combustibles fósiles.

Por el momento, Nigeria aún no ha cambiado oficialmente de línea diplomática sobre el Sáhara, pero los gestos de Marruecos no caerán en saco roto. Las tesis marroquíes avanzan imparables en el continente negro.

EL PAPEL DE ARGELIA

Que Brahim Ghali entrase en España a tratarse de la COVID-19 en una avión argelino y que saliera a bordo de otro avión fletado por la Presidencia argelina puso negro sobre blanco el verdadero protagonismo de Argelia en el conflicto saharaui. Y que Brahim Ghali recibiera la visita del presidente argelino Abdelmejid Tebboun (acompañado de varios generales de su Ejército) en un hospital militar argelino, solo horas antes de su regreso de España y con una cámara de televisión presente, fue la proclamación de que en la cuestión saharaui, el Estado argelino es algo más que un mero observador.

Marruecos lleva años acusando a Argelia de financiar, adiestrar y armar al Frente Polisario, es decir, de hacer mucho más que albergar en su suelo los campamentos de refugiados saharauis. Y por esa misma razón, exige que toda eventual negociación sobre el Sáhara se lleve a cabo con el Gobierno argelino, ya no como mero observador (papel que la ONU concede a Argelia y a Mauritania), sino como actor principal. No le falta razón: son los argelinos los que proveen de pasaportes diplomáticos a los saharauis si van a viajar por el mundo, y ciertamente son ellos los que dan su visto bueno cuando el Polisario elige pasar a la acción (en los dos bloqueos del paso de Guerguerat, en 2017 y en 2020) o declarar la guerra, como hizo en noviembre de 2020.

En los foros de la ONU, las grescas protagonizadas por argelinos y marroquíes a cuenta siempre del Sáhara Occidental son legendarias. Recientemente, un experto de un organismo internacional comentaba en Twitter cómo había asistido "al lamentable espectáculo" de dos diplomáticos enviados a Ginebra por Argel y Rabat que habían aprovechado su presencia en el Examen Periódico Universal de derechos humanos, en una sesión específicamente dedicada a la situación en Jamaica, para volver a su eterna querella sahariana y monopolizar el uso de

la palabra, sin prestar el menor interés por lo relativo a Jamaica y despreciando de paso el paciente trabajo de las ONG y otros organismos que llevaban un año documentándose sobre el país caribeño y sus políticas educativas, de gestión de prisiones o de acceso al agua. Describía cómo los diplomáticos escandinavos presentes manipulaban sus auriculares, creyendo asistir a un error de traducción, hasta que captaron, consternados, el tiempo perdido por la enésima gresca verbal intermagrebí.

Si ha quedado claro que el Sáhara es una cuestión existencial para los marroquíes, no lo es menos para los argelinos. Las proclamas de la solidaridad entre los pueblos y la fraternidad argelino-saharaui sirven para dorar el discurso oficial del régimen de Argel, pero a nadie se le escapa que la causa saharaui no figura entre las prioridades del pueblo llano en Argelia.

En el fondo, Argelia y Marruecos viven desde su nacimiento como Estados poscoloniales una sorda pugna por la hegemonía en el Magreb. A Argelia, un Estado saharaui independiente y aliado suyo, le representaría la salida al Atlántico de que carece, y en cualquier caso supondría debilitar a su eterno rival. No son solo palabras: en 1963, solo un año después de la proclamación de la independencia de Argelia, el nuevo país entró en conflicto con Marruecos en la llamada "guerra de las arenas", por el control de los territorios fronterizos. La guerra de varios meses no movió las líneas marcadas por los colonizadores franceses, tampoco causó muchos muertos (apenas medio millar), pero dejó instalada entre los dos contendientes una desconfianza que no disipó el paso de los años. En Marruecos hay todavía partidos, como el nacionalista Istiqlal, que reivindican lo que llaman "el Sáhara Oriental", en referencia a las regiones argelinas de Tinduf y Bechar, aunque la reivindicación ya no forme parte del argumentario oficial. Ambos países tienen embajadas abiertas en las respectivas capitales, pero su cooperación es casi nula en todos los ámbitos. La frontera terrestre común está cerrada desde 1994 por decisión argelina, después de que Marruecos acusara a los servicios secretos de Argel de estar detrás de un atentado terrorista en un hotel de Marrakech que causó dos muertos (ambos turistas españoles). Esa frontera cerrada ha roto familias que para visitarse tienen que viajar hasta Casablanca o Argel y tomar un avión. No es un chiste, pero parece que algún genio maledicente

es el que tuvo la ocurrencia de llamar al puesto fronterizo permanentemente cerrado Jouj Bghal, que significa "las dos mulas", nombre que parecería una alusión a la obstinación de dos vecinos.

Ha habido, es cierto, algo de ideología en esta pugna entre hermanos magrebíes: Marruecos optó desde su independencia en 1956 por el bando prooccidental, con Estados Unidos, Francia y Arabia Saudí como principales aliados, mientras que Argelia se alineó con el bando socialista. En los años de la Guerra Fría esto fue determinante y significó que el Polisario contó con el apoyo de todos los amigos socialistas que Argelia tenía en el mundo, desde Cuba hasta Albania o Angola. La historia, como sabemos, no fue amable con el campo socialista, y los apoyos del Polisario fueron reduciéndose en el mundo, sobre todo después de la caída del Muro de Berlín. Algo de las simpatías socialistas les queda a los saharauis en América Latina, donde los países del ALBA (Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, principalmente) siguen apoyando al Frente Polisario, pero los demás países del continente se han dejado ganar por los cantos de sirena de Marruecos, que ha sabido engrasar alianzas en los distintos países de cultura hispana.

En cualquier caso, si el régimen argelino ya es visto como decadente y en vías de extinción, con una juventud que no se siente representada por los generales argelinos, la pregunta legítima que cualquier observador se hace es: ¿qué será del Polisario a medio plazo?, ¿sobrevivirá la alianza argelino-saharaui a los avatares de la historia? Hace mucho tiempo que el Polisario, y por extensión Argelia, apuestan solo por no perder más terreno, porque en el mundo actual, muy lejos ya de los avatares de la Guerra Fría, el tiempo parece jugar en favor de Marruecos.

EL MENGUANTE PAPEL DE LA ONU EN EL TERRENO

Si hay un lugar donde se manifiestan los frutos que Marruecos ha logrado obtener en sus tesis sobre el Sáhara es en la presencia y funciones de la misión de la ONU sobre el terreno. Su mero nombre, Misión de las Naciones Unidas para un Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) no dejaba en teoría lugar a equívocos cuando fue creada en 1991 y, sin embargo, Marruecos ha descartado de plano esa consulta, desvirtuando

por completo el objetivo de la misión. Treinta años después de su llegada, los cascos azules se ocupan simplemente de la observación del alto el fuego entre las partes. Pero conviene recordar cómo Marruecos ha erosionado, una tras otra, las funciones de la MINURSO hasta convertirla en irrelevante, en ocasiones con limitaciones humillantes, como la obligación que impone a sus vehículos de llevar matrículas marroquíes. Esos todoterrenos con grandes letras negras "UN" estampadas en su carrocería solo pueden cambiar las placas marroquíes por placas azules de la ONU cuando entran en la estrecha franja del territorio saharaui que el Polisario llama "territorios liberados". Si la MINURSO no ha logrado imponer su criterio en el tema de las matrículas, podemos imaginar cómo es en el transcurso de su vida cotidiana en el Sáhara: la población huye de ellos como de la peste, sabedores de que quien se acerque a ellos es tildado inmediatamente de sospechoso.

Cuando Rabat comenzó a descartar abiertamente la idea del referéndum a partir del año 2000, rediseñó de forma unilateral las funciones de la MINURSO hasta dejarlas en solamente tres: observación del alto el fuego, desminado del territorio y "construcción de medidas de confianza". Esto último se traducía en la promoción de viajes de saharauis entre Tinduf y El Aaiún para posibilitar el reencuentro de familias tras más de treinta años de separación, pero muy pocos de estos viajes se han podido realizar, al poner Rabat una traba tras otra a estas visitas familiares de los saharauis.

Había otra función, no escrita, que implicaba establecer contactos con la sociedad civil saharaui y redactar seguidamente informes para el secretario general y su enviado personal para el Sáhara que sirvieran para avanzar en la negociación política. Para ello existe en la MINURSO una misión civil y a su cabeza un responsable político. Pero solo a duras penas, y por obstinación de algunos enviados personales concretos, estos contactos han podido llevarse a cabo y los independentistas saharauis han logrado en alguna que otra ocasión reunirse con representantes de la MINURSO y detallar las múltiples facetas de la represión a que son sometidos: la libertad de asociación, de reunión y de manifestación es sencillamente inexistente en el Sáhara, y la policía marroquí, de uniforme o de civil, ahoga cualquier conato de protesta.

Uno de los enviados del secretario general que más se empeñó en reunirse con las asociaciones saharauis (no aquellas que Rabat promueve,

sino las de sensibilidad independentista) fue el norteamericano Christopher Ross, que estuvo en el cargo entre 2009 y 2017. Su tenacidad en tener una agenda propia cuando viajaba al Sáhara y no aceptar la agenda que le marcaba Marruecos le costó muy cara. En 2012, el Gobierno marroquí anunció que le retiraba su confianza, pero sorprendentemente el secretario general, entonces Ban Ki-moon, lo mantuvo en el puesto. Tres años después, en 2015, el ministro de Exteriores marroquí me dijo en una entrevista que su Gobierno había prohibido a Ross viajar al territorio saharaui. Salaheddine Mezouar fue de una franqueza brutal: "No tiene nada que hacer aquí en el Sáhara —dijo utilizando una expresión malsonante—. Está fuera de discusión que vaya a reunirse con quienquiera que sea en El Aaiún. Cuando Ross viene a Marruecos, viene para reunirse con los responsables marroquíes y los encuentra en la capital, que es Rabat, y ahí termina el asunto. Así es y así será", zanjó Mezouar.

Las palabras de Mezouar cayeron en la ONU como una bomba, pues dejaron muy claro que era Rabat y no Nueva York quien fijaba los límites de la misión de la ONU. Y Rabat había decidido que la MINURSO no debía tener ninguna relación con la sociedad civil saharaui, salvo con las asociaciones promarroquíes que cuentan con escasa credibilidad entre la población local. Tampoco la MINURSO ha tenido nunca ningún papel de monitoreo de los derechos humanos, y el tímido intento de Estados Unidos por introducir esta función —como vimos anteriormente— fue inmediatamente abortado por Marruecos.

En realidad, la MINURSO es una de las misiones más inútiles del mundo. Sin referéndum que preparar, sin sociedad civil con la que interactuar, sus cascos azules pasan los días quemando gasolina en viajes interminables por las carreteras del desierto verificando que todo está en calma. Y en la única ocasión en la que el alto el fuego se ha roto de verdad, como sucedió en noviembre de 2020 con la declaración de guerra del Polisario, la MINURSO permaneció igualmente muda. No emitieron ningún informe, al menos no en público, que ayudase a saber cuánto había de cierto en los "partes de guerra" que el Polisario emitía a diario. ¿Había exageración en esos partes? ¿Cuántas víctimas había causado esa guerra? Si la MINURSO, reducida a esa única función de observar los combates, no hablaba, ¿cómo podía saberse la verdad? En un territorio donde los periodistas independientes no son bienvenidos, la ausencia de testigos

hacía imposible cualquier verificación.

En marzo de 2021, el Consejo de Seguridad se reunió para sacar un nuevo informe sobre el Sáhara. Era su primera reunión tras el estallido de esa guerra, o pseudoguerra, y la ocasión perfecta para que la MINURSO se explayase sobre sus observaciones. Pues bien: el informe final del Consejo no incluyó una sola línea sobre los combates, era como si nunca hubieran existido. Marruecos había hecho callar las armas y sus amistades en el Consejo habían extendido este silencio a la diplomacia misma.

ÚLTIMA ESPERANZA PARA EL POLISARIO, EL FRENTE JUDICIAL

En 2021, al Polisario no le queda sino el recurso al frente judicial para plantar batalla a Marruecos. Perdido el control del territorio, enzarzados en una guerra de la que nadie habla y con un panorama internacional claramente proclive a Marruecos, a los saharauis solo les queda denunciar los distintos acuerdos, comerciales o políticos, que el Gobierno o las instituciones marroquíes firman aquí y allá y que incluyen el territorio saharaui como parte de Marruecos.

La batalla tiene que ver sobre todo con los recursos naturales: el Polisario, ayudado por sus aliados europeos, denuncia cómo las principales riquezas del Sáhara —pesca, fosfatos y agricultura, y últimamente también las "energías limpias"— son objeto de transacciones comerciales que terminan beneficiando a Marruecos, cuando Rabat no tiene derecho a negociar esos recursos que salen de un territorio en disputa.

Los recursos judiciales interpuestos por el Polisario y sus aliados en la abogacía mundial han conseguido paralizar durante algunos meses algunos envíos de cargamentos de fosfatos a su paso por Sudáfrica o Panamá, con la consiguiente pérdida de dinero para la OCP, pero lo más importante son los acuerdos agrícolas y pesqueros firmados con Marruecos con la Unión Europea, que también incluyen los productos extraídos de las tierras o las aguas saharauis.

Los *lobbies* prosaharauis han hecho presión sobre el Parlamento Europeo, donde parlamentarios de izquierda han conseguido en ocasiones

paralizar los acuerdos hasta que se demuestre de algún modo que la población saharaui es beneficiaria de la parte económica de esos acuerdos: esto se ha solventado con la demostración de que la financiación europea servía para modernizar puertos, embarcar en los pesqueros a marinos saharauis o subvencionar proyectos locales. Pero en los últimos años los saharauis han llevado a los tribunales el principio mismo del acuerdo: ¿con qué derecho Rabat puede negociar *unos recursos que no son suyos*? Sensible a estos argumentos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló en diciembre de 2015 que los acuerdos euromarroquíes eran nulos por incluir el agua y el territorio saharauis. El fallo fue recurrido por el propio Consejo de Ministros de la UE, pero ello no evitó un monumental enfado del Gobierno de Rabat. Finalmente, el TJUE volvió a emitir otro fallo en febrero de 2018 considerando que el acuerdo era válido siempre que no incluyera los productos salidos del Sáhara, pero la Comisión (claramente inclinada a un compromiso con Marruecos) encontró una argucia legal para seguir permitiendo que los barcos europeos faenaran en aguas del Sáhara y que las hortalizas salidas de los invernaderos de Dajla se siguieran vendiendo en los mercados europeos sin ninguna etiqueta particular que los diferenciara del *made in Morocco*.

Los abogados contratados por el Polisario no han tirado la toalla. Han vuelto a denunciar los acuerdos como ilegales y este mismo otoño de 2021 se espera que el TJUE se pronuncie de nuevo sobre la extensión territorial de los acuerdos de asociación y de pesca entre la UE y Marruecos.

Es el último cartucho que le queda al Frente Polisario. En todo lo demás, Marruecos ha ido ganando una batalla tras otra. Si Rabat consintiera celebrar alguna especie de consulta, por muy condicionada que fuera, sobre el futuro de la excolonia española, incluso la ONU podría bendecir para siempre la marroquinidad del Sáhara. Pero la determinación marroquí es total: no consentirá ninguna consulta que se parezca a un referéndum, pues aspira simple y llanamente a aniquilar al adversario.

Mientras Marruecos siga definiendo al Polisario como "terrorista, mercenario, títere de Argelia o contrabandista" —cuando no todas estas cosas a la vez—, es imposible imaginar que se volverá a sentar en la misma mesa que él para negociar una salida honrosa para todos. La estrategia de demonización del Polisario ya no parece tener un punto de retorno.

CAPÍTULO 6

EL RETROCESO DEMOCRÁTICO DE MARRUECOS

En 2021 Mohamed VI llevaba ya 22 años en el trono. El impulso reformista con el que empezó su reinado se había agotado hace tiempo y las medidas de apertura que se vio forzado a aplicar en los turbulentos años de la Primavera Árabe ya eran apenas un recuerdo: como en el resto de la región, la primavera se había tornado en invierno y la represión de las libertades era la tónica dominante en Marruecos, como lo era en Túnez, Egipto, Jordania y la mayoría del mundo árabe.

La avalancha migratoria sobre Ceuta aquel 17 de mayo, que provocó una crisis sin precedentes con España y hundió la imagen internacional de Marruecos, se produjo en un contexto interno marroquí marcado por una erosión cada vez más evidente de las libertades públicas y una regresión muy acusada de los valores democráticos. Un ambiente en el que el disenso es cada vez más difícil de practicar y en el que las grandes decisiones tomadas por el rey son más indiscutibles que nunca. Y así, aunque el mundo entero se escandalizó por la utilización de sus ciudadanos —y en particular los menores de edad— para arreglar cuentas con sus vecinos por litigios políticos, dentro del país era muy difícil exponer abiertamente críticas de ese calado. Solo el semanario *TelQuel* se atrevió a sacar una edición con un título muy elocuente en portada: "Marruecos antes que los marroquíes"; el texto interior venía a decir que el patriotismo y no las vidas concretas de los ciudadanos explicaba el comportamiento oficial en la crisis de Ceuta.

Conviene detenernos en algunos ejemplos para observar cómo el modelo político marroquí, que siempre necesitó poner algún adjetivo a la palabra democracia, se asemeja cada vez más a una monarquía autoritaria, con un rey que reina y gobierna sin contrapesos, un Parlamento que sirve de escaparate de pluralismo sin herramientas reales de control, y por último un Ejecutivo que ni siquiera reclama para sí algunas de las enormes

competencias que han sido y son exclusivas del Palacio Real: defensa, política exterior, seguridad, religión y los grandes lineamientos económicos.

UNA REFORMA ELECTORAL *AD HOC* CONTRA LOS ISLAMISTAS

A Mohamed VI no le gustaban los islamistas, y no lo ocultaba. Por culpa de la Primavera Árabe y de las obligadas señales de apertura, tuvo que permitir que el Partido Justicia y Desarrollo (PJD) ganara con holgura las elecciones en 2011 —consideradas las más limpias de la historia del país— y volviera a ganarlas en 2016, además de barrer en las elecciones municipales de la mayoría de las grandes ciudades del país. El partido había sabido capitalizar mejor que ninguno las esperanzas de las clases medias urbanas hasta entonces huérfanas de representatividad política, un segmento que se identificaba con ese partido conservador en lo moral, levemente reformista en lo político y con un discurso claro contra la corrupción.

Pero pese a encabezar el Gobierno durante toda una década, el partido islamista no tuvo ocasión ni voluntad de emprender reformas que limitaran el poder del Palacio o ampliaran el campo de las libertades; más bien parecía que el partido solo buscaba ser definitivamente admitido dentro de los márgenes del sistema, superando así el eterno estatus de sospechoso. Las sospechas que sistemáticamente recaían sobre el PJD, incluso por parte de ciudadanos corrientes de tendencia laica, eran que el partido tenía algún proyecto oculto sobre la sociedad marroquí para islamizarla y asfixiar así a ese sector urbano que mira hacia París y no hacia Estambul y que frecuenta más los bares que las mezquitas.

El entorno del rey comenzó fulminando al líder islamista más carismático, Abdelilah Benkirane. En 2018 el monarca le retiró el encargo de formar Gobierno, que recaía sobre él por ser el líder del partido más votado, y puso en su lugar a su correligionario Saadedín Otmani, un psiquiatra con un perfil menos estridente que huía de los focos, siempre preocupado por llegar a consensos. El golpe de mano palaciego fue duro de digerir, aunque el partido se plegó: al fin y al cabo, la jefatura del Gobierno

aún recaía en uno de los suyos.

Pero incluso así, con un nuevo jefe de Gobierno inodoro e insípido, el partido seguía molestando, y todo el resto de la clase política, convenientemente inspirada desde los salones del Palacio Real, tenía como principal enemigo a batir al partido islamista. Había una especie de pecado original que el PJD no conseguía quitarse de encima, por mucho que multiplicase sus proclamas monárquicas y patrióticas, y por mucho que descafeinara sus propuestas religiosas y morales.

En 2021, año de elecciones legislativas en el mes de septiembre, el partido descubrió que el Ministerio del Interior había cocinado casi en secreto una reforma del sistema electoral que significaba la pérdida automática de su peso en las dos cámaras parlamentarias, la de Representantes (baja) y la de Consejeros (alta). Mediante una reforma aparentemente técnica, se propiciaba que los partidos pequeños o con muy pocos votos quedasen sobrerrepresentados con respecto a los grandes. La reforma consistía en tomar como base del cálculo en el reparto de escaños el censo electoral completo, con independencia de los votos obtenidos en la jornada electoral. Eso penalizaba al PJD, cuyas bases están entre las más fieles del espectro político y que siempre acudirán a votar. La reforma aplicaba además un nuevo cálculo del "cociente electoral" que hacía casi imposible que el partido consiguiera más de un escaño en cada circunscripción, ya que el nuevo sistema propiciaba un reparto de escaños que penalizaba precisamente a los partidos más votados.

Aquella reforma parecía diseñada con un único fin: golpear al PJD y limitar su peso parlamentario en el futuro. Los pocos analistas políticos independientes que quedan en Marruecos no dudaron en calificar la reforma como una especie de "fraude electoral", como dijo Mohamed Masbah, director del Moroccan Institute for Policy Analisis: "El objetivo de estas medidas es aumentar el grado de certeza en cuanto a los resultados y controlar las reglas del juego". En otras palabras: se trataba de limitar el efecto real de las elecciones y garantizar casi de entrada los resultados deseados.

La reforma había partido del Ministerio del Interior, sin pasar por las manos de su teórico jefe (el presidente del Gobierno), pero en Marruecos las cosas son así: el ministro del Interior tiene interlocución directa con el rey y actúa sin dar explicaciones al primer ministro. En cualquier caso, la

reforma se sometió a votación un día de marzo de 2021 y, curiosamente, todos los partidos con excepción del PJD y un pequeño partido de izquierda votaron favorablemente. Entre los que votaron a favor había partidos grandes, como el Partido Autenticidad y Modernidad o el Istiqlal, que también salían claramente perjudicados por los cálculos del nuevo cociente electoral, pero sencillamente obedecían órdenes "de arriba" y debían mostrar obediencia. Se trataba de cerrar el paso al PJD, y si no se podía hacer en las urnas, se haría con ingeniería electoral. Que eso supusiera despojar de sentido a las reglas de la democracia era un problema menor.

Cuando se convocaron las elecciones para el 8 de septiembre de 2021, la noticia ni siquiera fue *breaking news* a escala nacional, mucho menos internacional. Después de todo, la cita electoral ya no revestía mayor misterio. Gracias a la nueva reforma, los resultados ya podían conocerse de antemano.

ISRAEL, EL AMIGO OBLIGATORIO

El anuncio de Donald Trump de que Marruecos e Israel restablecían relaciones diplomáticas encontró a toda la clase política marroquí con el paso cambiado. Llevaban años manifestándose en las calles contra "la entidad sionista" (ni siquiera llamaban por su nombre al Estado hebreo) y gritando eslóganes contra la normalización diplomática que ya comenzaba a abrirse paso en países como los Emiratos Árabes. En cada ocasión que se producía un ataque a gran escala contra Gaza, los partidos políticos salían como un solo hombre a las calles de Rabat y marchaban juntos, con la bendición de las autoridades, en manifestaciones donde podían verse juntas todas las sensibilidades del arco político: islamistas, laicos, izquierdistas y nacionalistas. El odio a Israel era una de las causas más ampliamente compartidas por todas las sensibilidades políticas, sensibles a los sufrimientos de sus hermanos palestinos que veían acongojados en los informativos de las cadenas árabes.

Es cierto, sin embargo, que ese odio a Israel se había atemperado en las últimas décadas a nivel popular, fuera de la clase política. En ciudades como Marrakech, por ejemplo, los turistas israelíes llevan mucho tiempo

llegando en vuelos a través de Europa. Ruidosos y bullangueros, porque no se esconden, los turistas israelíes llenan hoteles y restaurantes, hacen grandes fiestas y se van luego a comprar artesanía en los zocos con su *kippa* en la cabeza. "No es que sean tolerados, es que son muy bienvenidos", me contaba Abdelali, un guía local acostumbrado a tratar con ellos.

También es cierto que Marruecos separó siempre al Estado de Israel de la religión judía y siempre ha proclamado que el judaísmo ha formado y forma parte de la identidad marroquí: sinagogas y cementerios hebreos existen casi en cada ciudad marroquí. Y aunque la comunidad judía aún residente en Marruecos sea ya casi testimonial (apenas 2.000 personas, casi todas en la ciudad de Casablanca), son miles los judíos de todo el mundo con raíces marroquíes que cada año vienen a visitar a sus ancestros, vivos o muertos, e incluso a celebrar bodas y *bar mitzvah* en Casablanca, Rabat o Marrakech, en un ambiente 100% kosher.

Pero hechas todas estas salvedades, el Estado de Israel era todavía un tabú político, y su aceptación por parte de Marruecos una línea roja imposible de franquear. Así que el anuncio de Donald Trump, que vino seguido de un comunicado del Palacio Real marroquí que refrendaba ese acuerdo tripartito Estados Unidos-Marruecos-Israel, cayó como un jarro de agua fría entre la clase política.

No cabía ninguna duda: aquella era una decisión del propio rey, y por consiguiente imposible de contradecir. Era una rueda de molino que los partidos políticos tenían que tragar entera y sin quejarse de indigestión. Recurrieron entonces a las explicaciones sobre "los intereses nacionales" que obligaban a apoyar la decisión del rey, es decir, el hecho de que Israel fuera un precio a pagar en busca de un bien mayor, como era el apoyo estadounidense en "la causa nacional" del Sáhara. El presidente Othmani fue tal vez un poco más sincero cuando añadió que la política exterior era un dominio reservado del monarca y por tanto se abstendría de toda crítica.

Solo cuatro días después del anuncio de Trump, un comité de defensa de las causas árabes convocó una manifestación en el centro de Rabat para protestar contra la decisión. A diferencia de tantas otras manifestaciones antiisraelíes del pasado, esta era una protesta contra una decisión del mismo rey, y nadie se llamaba a engaño. Dos horas antes de la sentada, un

despliegue policial inédito en muchos años tomó todo el centro de la capital. Pertrechados con flamante material antidisturbios —decían las malas lenguas que era material suministrado por Israel—, los policías y agentes auxiliares impidieron cualquier conato de concentración y protesta y dispersaron sin miramientos a los cuatro temerarios que habían salido a protestar contra los designios del rey.

De entre todos los partidos, el único que practica la democracia interna y que debía algunas explicaciones a sus bases fue el PJD de Othmani. El partido, aliado de los Hermanos Musulmanes y del movimiento palestino Hamás, tenía que avalar las nuevas relaciones con Israel porque debía, antes que nada, fidelidad al monarca. Y en su primer Consejo Nacional, el partido salió con un comunicado salomónico en el que separaba las obligaciones del jefe de Gobierno, secretario general del partido, con las del propio partido. Según el PJD, Othmani había cumplido su obligación como representante máximo del Gobierno, un Gobierno que después de todo está formado por una coalición de partidos; en paralelo, el partido decía que se mantenía fiel a sus tradicionales posturas de apoyo al pueblo palestino y contra la ocupación del territorio palestino por parte de Israel. Era el típico comunicado donde el partido trata de salvar la cara ante una de las decisiones más dolorosas de su existencia, pero en todo caso, se cuidaba de criticar al rey y sus decisiones.

En cuanto al resto de partidos, no existió ni siquiera un amago de debate interno ni nadie cuestionó el nuevo viraje diplomático. La entidad sionista, el innombrable Israel, había pasado como por arte de magia a formar parte de los amigos y aliados y solo quedaba aplaudir con todas las fuerzas.

Todo lo sucedido con Israel se había cocinado finalmente dentro del Palacio Real sin que hubiera ni la más mínima pedagogía a nivel político o popular que explicara por qué de pronto Marruecos se sumaba a lo que Estados Unidos llamaba los Acuerdos de Abraham (los que propiciaron el acercamiento de Israel con varios países árabes). ¿Dejaría de votar Rabat contra Israel en cada discusión que se celebrase en adelante en la Liga Árabe? ¿Condenaría la represión contra los palestinos en la Asamblea General de la ONU? ¿Hasta qué punto Israel había pasado a ser un aliado? Nadie se había preocupado de aclararlo. Supuestamente, el rey sabía lo que hacía y lo que era preferible para los intereses de Marruecos. Pero él no

rinde cuentas a nadie.

Así había sido en los últimos años con otras decisiones mayores de política exterior, que nunca pasaron por el Parlamento ni fueron explicadas a la ciudadanía: la participación de Marruecos en la guerra de Yemen al lado de los Emiratos Árabes, la ruptura con la Siria de Bachar Assad, el reconocimiento del Gobierno golpista en Abdelfattah al Sisi en Egipto o el apoyo a los dos golpes de Estado en Mali en 2020 y 2021. Todas estas decisiones, tomadas en persona por el mismo rey y su entorno, han dejado fuera al Gobierno, a la clase política y a la ciudadanía. Es la interpretación marroquí de la democracia.

UN CLIMA IRRESPIRABLE PARA LOS PERIODISTAS

El tercer capítulo donde queda claro el retroceso democrático en Marruecos es en la libertad de prensa. El periodismo profesional nunca fue un sólido contrapeso al poder como se supone en una democracia: las cadenas de televisión marroquíes son, sin excepción, estatales y la prensa escrita depende por completo de las ayudas públicas para su supervivencia. La crisis del periodismo impreso vivida en todo el mundo por la irrupción de internet y la cultura de la gratuidad digital se manifestó con agudeza en Marruecos, donde los periódicos nunca habían sido autosuficientes, pues dependían de la publicidad estatal para subsistir y sus cifras de ventas eran bajísimas. Si un visitante llega a Marruecos y se sorprende por la cantidad de títulos de prensa impresa, será porque ignora que abundancia de cabeceras no significa necesariamente pluralidad de opiniones. Es el mismo caso que en el paisaje político nacional: que en el Parlamento marroquí se sienten más de diez partidos distintos no quiere decir que el sistema sea plural, pues todos están de acuerdo en lo fundamental y hasta en lo secundario, quedando muy restringido el campo de la discrepancia.

Dentro de la prensa impresa, el único diario independiente era *Akhbar al Yawm*, pero cerró en marzo de 2020 por asfixia financiera: la publicidad institucional con la que sobreviven los rotativos se hacía cada vez más escasa, pero además el Gobierno tuvo a bien excluirlo de las ayudas que distribuyó a todo el sector de la prensa escrita durante la pandemia de COVID-19 para permitir su subsistencia bajo respiración asistida. Pero

por entonces, *Akhbar al Yawm* sufría ya un acoso judicial sin precedentes contra sus periodistas, centrado en sus conductas sexuales.

Todo comenzó con su propio director y propietario, Tawfiq Bouachrine: un día de febrero de 2018, veinte policías irrumpieron en su despacho de Casablanca y se lo llevaron detenido, tras desmontar todo un sistema oculto de filmación interno que "alguien" había colocado en esa habitación. En los días siguientes, ese mismo "alguien" comenzó a difundir dosificadamente vídeos (cincuenta en total) donde Bouachrine aparecía manteniendo relaciones sexuales con varias de sus subordinadas en el mismo despacho. En un clima mundial cada vez más intransigente con el acoso sexual, se hacía difícil defender a quien parecía ser un depredador sexual, por mucho que hubiera sospechas de que la verdadera razón de su detención era otra. No es casualidad que la Fiscalía se defendiera ya de forma preventiva diciendo que la detención "no tenía nada que ver con la profesión del periodismo".

Varias de las periodistas que aparecían en los vídeos lo denunciaron por violación, mientras que otras se negaron y desvelaron las enormes presiones que la policía había ejercido sobre ellas para testificar contra su jefe. Finalmente, nueve meses después, Bouachrine fue condenado a doce años de cárcel por varios delitos de violación o intento de violación, abuso de poder con fines de explotación sexual y hasta "trata de seres humanos". En segunda instancia, la condena subió hasta los quince años.

Pero el cerco contra el diario no había hecho más que empezar: en agosto del año siguiente, una de sus redactoras, Hajjar Raissouni, de 28 años, fue detenida en plena calle en Rabat, cuando salía de la consulta de un ginecólogo, por doce policías de paisano, que la condujeron a un hospital y la obligaron, sin que mediara orden de un juez, a realizar un examen ginecológico durante veinte minutos. Querían probar que Raissouni se había sometido a un aborto, práctica prohibida (aunque muy corriente) en Marruecos. Sometida a juicio junto a su novio sudanés y al ginecólogo, Hajjar fue condenada a un año de cárcel por la práctica del aborto y por mantener relaciones extramatrimoniales, algo que también es delito en Marruecos aunque se castiga de forma aleatoria.

Al contrario de lo sucedido con su jefe, la condena a la joven periodista sí suscitó una gran indignación, que traspasó las fronteras del país. Dos

delitos tan trasnochados aplicados contra una joven reportera daban muy mala imagen a Marruecos. El diario francés *Le Monde* publicó en su portada un manifiesto titulado "Fuera de la ley" firmado por cientos de marroquíes, mayormente mujeres: "Nosotros, ciudadanas y ciudadanos marroquíes, nos declaramos fuera de la ley. Violamos leyes injustas, obsoletas, que no tienen razón de ser. Hemos tenido relaciones sexuales extramaritales, hemos sufrido, practicado o sido cómplices de un aborto. Hemos aprendido a fingir, a disimular. ¿Cuánto tiempo hemos de seguir así?".

Al rey Mohamed VI le importa lo que publica *Le Monde* y su impacto en la opinión pública francesa. Solo quince días después de que concluyera el juicio, concedió un indulto a Hajjar Raissouni y a los demás condenados, pero para que no pareciese una derrota, lo disfrazó de argumentos morales, alegando que el soberano tenía una genuina "preocupación por preservar el futuro de los dos prometidos, que pretendían fundar una familia conforme al respeto de los preceptos religiosos y de la ley".

Nada más ser indultada, Hajjar Raissouni eligió el camino del exilio y se instaló con su prometido en Sudán, desde donde fustiga al régimen marroquí en su deriva autoritaria.

Solo siete meses después, Suleiman Raissouni, redactor jefe del mismo diario *Akhbar al Yawm* y tío de Hajjar, fue a su vez arrestado en plena calle en Casablanca. Su caso es aún más enrevesado, porque su detención se produjo tras la denuncia de un homosexual con el sobrenombre de Adam, que en su cuenta de Facebook aseguró que Suleiman lo había violado dos años atrás, cuando lo citó para trabajar en un reportaje sobre la homosexualidad en Marruecos (igualmente prohibida y también perseguida de forma aleatoria). Nunca quedó claro por qué Adam tardó dos años en denunciar su violación y por qué lo hizo por Facebook, pero la Fiscalía actuó de inmediato cuando vio la denuncia.

Cuando Adam publicó su *post* en la red social, la denuncia fue todo un escándalo en una sociedad homófoba como la marroquí. Raissouni optó en un primer momento por responder también vía Facebook. Aparentemente ebrio, el periodista atacó a Adam con un tono cuartelero y llegó a poner en duda las preferencias sexuales de quien llamó "el Gran Jefe, vuestro Graaan Jefe", alusión inequívoca al monarca. Aunque más tarde borró el

post, miles de personas lo habían leído, y pocas horas después una decena de policías lo arrestó y lo presentó ante el juez. Un año después, y tras protagonizar una huelga de hambre de más de ochenta días, Suleiman Raissouni fue juzgado y condenado a cinco años de cárcel por "secuestro y atentado contra el pudor" (nombre que reciben en Marruecos las violaciones homosexuales). La alusión a los gustos del rey jamás afloró en el juicio, pues aquello habría supuesto romper uno de los tabúes más peligrosos.

Fue durante el proceso contra Suleiman Raissouni cuando cerró el diario *Akhbar al Yawm*, pero para que quedase claro que el acoso no solo afectaba a ese título en concreto, otro periodista sin relación con el rotativo también fue arrestado, juzgado y condenado, también en su caso por otro delito de carácter sexual. El último periodista víctima de las iras del Makhzen se llama Omar Radi, un joven de 35 años de simpatías izquierdistas, colaborador con varios medios nacionales e internacionales e implicado en numerosas causas de defensa a los derechos humanos.

Omar Radi es algo así como una obsesión para los servicios secretos marroquíes: una investigación de Amnistía Internacional desveló que desde 2017 su teléfono había sido infectado por un *software* llamado Pegasus, fabricado por la compañía israelí NSO y que solo se vende a Gobiernos o instituciones estatales. El programa sirve para infiltrarse en un teléfono concreto y desde él acceder a todos sus datos, conversaciones, agendas e intercambios de correo. Aunque Pegasus es teóricamente un programa para protegerse contra amenazas terroristas, una investigación internacional desvelada el pasado 18 de julio demostró que países como Marruecos, México, India, Arabia Saudí o Hungría, entre otros, lo utilizaban contra perfiles de todo tipo: periodistas, activistas pro derechos humanos, abogados o políticos. Marruecos aparecía como uno de los clientes más activos de la NSO: había espiado a varios periodistas locales como Omar Radi, pero también a otros en el extranjero, como el español Ignacio Cembrero y el francés Edwy Plenel, director de *MediaPart*.

Todo indica que fueron los datos encontrados en el teléfono de Omar Radi los que permitieron lanzar la operación contra él, pero hacía falta un buen pretexto, de contenido sexual para no perder el patrón. Había que explotar la sensibilidad mundial del Me Too.

Estos fueron los hechos: una noche de verano de 2020, Omar Radi se encontraba en casa de Ali Amar, fundador del diario digital *Le Desk* (uno de los pocos que hace periodismo de investigación en Marruecos) trabajando en un reportaje con otros colaboradores. La reunión terminó a altas horas y Ali Amar ofreció a los invitados dormir en el sótano del chalet que hace de casa y de redacción para *Le Desk*. En ese sótano, de amplias dimensiones, se instalan Omar Radi, su amigo Imad Stitou y la periodista Hafsa Boutahar. Durante la noche, Omar y Hafsa tienen relaciones sexuales, y días después Hafsa denuncia a Omar por violación. La Fiscalía abre un caso e Imad Stitou, única persona presente en el lugar de los hechos, se presenta voluntariamente como testigo, proclamando que lo que él pudo ver y oír en la oscuridad mostraba claramente que era una relación consentida, pero el juez lo desecha como testigo y pasa a considerarlo cómplice en la violación. Así, la única persona que podía dilucidar qué hubo de cierto en aquella supuesta violación quedaba maniatada para poder dar su testimonio.

En paralelo, el juez abre otra causa contra Radi por "atentar contra la seguridad del Estado": sus contactos con diplomáticos extranjeros en el curso de sus trabajos periodísticos fueron inmediatamente considerados como actividad de espionaje por la Fiscalía y el juez incorporó esta acusación al proceso.

La denunciante, Hafsa Boutahar, trató de aprovechar el ímpetu mundial del "No es No", pero había algo turbio en su propia campaña contra Radi: más allá de que la relación hubiera sido forzada, llamaba la atención el espacio que los medios oficialistas prestaban a su persona. Desde los despachos ministeriales, se animaba a los periodistas extranjeros a entrevistar a Hafsa, algo que podría ayudarlos —les decían— para luego tener acceso a los mismos ministros. El juego era demasiado burdo.

Y finalmente, el 19 de julio, solo diez días después de la condena a Raissouni, Omar Radi fue condenado a seis años de cárcel por violación, mientras que Stitou lo fue a un año por no haber denunciado aquellos hechos.

Amnistía Internacional no tardó ni dos horas en exigir "un nuevo juicio justo", al considerar que Radi había sido "objeto de acoso por su valiente periodismo en el que critica las violaciones a los derechos humanos y

expone la corrupción".

El semanario *TelQuel*, uno de los últimos medios que aún ejerce el periodismo independiente, publicó días después un valiente editorial:

> Una capa de plomo se ha abatido sobre el oficio de periodista. ¿Es mera casualidad (la sucesión de juicios contra los reporteros), es un encadenamiento aleatorio de hechos sin ninguna relación entre sí, sin ninguna causalidad? El periodista no es desde luego un superciudadano, impermeable al principio de rendición de cuentas, pero los casos se suceden y se asemejan hasta hacer creer que el vicio es el segundo nombre de la profesión [...]. Si los marroquíes no perciben el endurecimiento de las autoridades hacia los medios, nosotros periodistas lo sentimos cada día un poco más: es ese sentimiento paralizante de jugársela ante la mínima palabra escrita sobre el papel. Ese sentimiento que alimenta la autocensura y la paranoia.

En 2021, el panorama mediático en Marruecos era desolador. Periodistas encarcelados y diarios dedicados a alabar sin fin a Su Majestad. Gracias a que existe internet, los marroquíes pueden ver al menos lo que escriben los medios extranjeros. Como en los años de plomo de Hassan II, la mejor forma de enterarse de lo que sucede en Marruecos es leer lo que se publica en el exterior.

CAPÍTULO 7
QUEREMOS LA CABEZA DE GONZÁLEZ LAYA

Si de algo estaba orgulloso Marruecos era del "poder blando" que había ido acumulando en el siglo XXI a lo largo de las dos décadas de reinado de Mohamed VI. Motivos no le faltaban: el país tenía una sólida reputación exterior conseguida gracias a su estabilidad en un entorno muy volátil, como lo es todo el norte de África y el Sahel. Sus servicios de información colaboraban intensamente con los europeos y habían contribuido a desactivar varios atentados terroristas en Francia y Bélgica. La imagen de Marruecos cotizaba al alza incluso en la debacle mundial de la pandemia, cuando mantuvo la COVID a raya y logró además cifras de vacunación inauditas para un país africano.

Pero la estampa de racimos de emigrantes subidos en precarias balsas de goma para huir de su país, o la de familias con niños nadando con la ropa puesta para llegar a Ceuta, o la de un agente de las Fuerzas Auxiliares abriendo con descaro una verja fronteriza para dejar pasar sin orden ni control a quien así lo quisiera, todo eso, supuso un brutal recordatorio de que Marruecos podía transformarse de la noche a la mañana en un Estado gamberro, un país del que no es fácil fiarse porque por defender sus intereses, es capaz de mostrarse con la actitud del matón de la clase. "Trata a los emigrantes como moneda de cambio y se aprovecha de ellos para extraer réditos políticos y financieros de España", escribió en esos días *The New York Times*.

EL CAPITAL INMATERIAL DEL PAÍS

En un discurso en el año 2014, el rey Mohamed VI recordó que su país gozaba "de una seguridad y una estabilidad que constituyen el fundamento de la producción y la riqueza", pues aportaban "una credibilidad y una

confianza esenciales para estimular las inversiones". Sin embargo, se quejó de que esas virtudes no fueran tenidas en cuenta en los cómputos internacionales y por eso mismo encargó un estudio al Consejo Económico y Social que midiera "el valor global" del Estado y su capital inmaterial.

Efectivamente, Marruecos gozaba de buena fama internacional: no solo era un lugar atractivo donde hacer inversiones y negocios, era además una potencia turística en alza con más de diez millones de visitantes anuales durante toda la década 2010-2020 (primera del continente tras desbancar a Egipto), había salido indemne de las revueltas árabes, había logrado neutralizar el terrorismo interno y estaba exportando por toda África lo que llamaba "el islam del justo medio" alejado de todo radicalismo. Comparado con sus vecinos, ya fuera a escala árabe o africana, Marruecos sobresalía por encima de todos ellos y los dignatarios extranjeros que visitaban el país a lo largo de la década pasada se deshacían en elogios. Le perdonaban incluso una marcada tendencia a la represión en los últimos cinco años y una asfixia de las libertades. En general, Marruecos podía jactarse de tener una excelente reputación internacional.

Lo que Marruecos había conseguido en cuestión de imagen es llamado por los politólogos "el poder blando": el que no procede de los ejércitos ni de las finanzas, ni se apoya en valiosas materias primas como el petróleo. Las únicas riquezas materiales de Marruecos eran la agricultura, muy competitiva en Europa y en África, y los fosfatos, materia en la que era líder mundial. Todo lo demás —la seguridad, el turismo, la religión— tenían más que ver con los valores culturales de un país, con el *savoir faire* y con su propia imagen, y eso era lo que según el rey no era apreciado en su justa medida.

Mohamed VI, que durante su reinado ha llegado a pasar más de la mitad del tiempo en algunos años en el extranjero —particularmente en París, su ciudad preferida—, llevaba en mayo de 2020 casi un año y medio sin salir de Marruecos por culpa de la pandemia. Durante ese tiempo, no se prodigó en apariciones públicas fuera de las estrictamente necesarias por cuestiones ceremoniales y a lo largo de todos esos meses ni siquiera se sabía en cuál de sus palacios se encontraba residiendo y dirigiendo el país.

UN ESCARMIENTO A ESPAÑA

En mayo de 2021 Mohamed VI se encontraba en Fez. Con un Gobierno que tiene su sede en Rabat, el rey tenía como únicos asesores a sus inseparables Fuad Ali Himma, llamado maliciosamente "el virrey" por su calidad de valido, y su secretario particular Munir el Majidi, que gestiona todas sus cuentas y administra sus millones. Su antaño asesor en asuntos exteriores, Taieb Fassi Fihri, parecía haber caído en desgracia, mientras que otra estrella ascendente, el máximo jefe de la Policía y de los servicios de inteligencia, Abdellatif Hamouchi, tenía cada vez más predicamento en los oídos del monarca.

Asesorado por estos hombres y desde su palacio de Fez, el rey decide en mayo dar un escarmiento a España. Mohamed VI nunca ha tenido una especial simpatía por el país vecino, pese a haber sido criado por ayas españolas y pese a hablar castellano a la perfección. Nunca va de vacaciones a España ni tiene en nuestro país —como sí tiene en Francia— palacios o lujosos apartamentos donde retirarse cuando así lo desea. Ha perdido con Felipe VI la cercanía que tuvo con su padre, Juan Carlos I, con el que compartió lágrimas y lamentos el día de la muerte de Hassan II, como todo el mundo pudo ver. Es cierto que ha conseguido ganarse a notorios aliados dentro del Partido Socialista, como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que ejercen discreta o abiertamente de *lobby* promarroquí en España, mientras que el *lobby* proespañol en Marruecos es inexistente o ineficaz. En el entorno del rey, entre sus consejeros, solo cuentan como hispanistas Omar Azziman y Fadel Benyaich (hermano de la embajadora Karima), ambos lejos del círculo inmediato de poder y por ende con influencia limitada sobre él.

A Mohamed VI le parece que España no solo responde con una insufrible neutralidad a sus demandas de apoyo sobre el Sáhara, sino que en abril de 2020 ha ido mucho más lejos y ha traspasado todos los límites, al acoger en su suelo y dar tratamiento médico al saharaui Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, el hombre al que en Marruecos no se describe de otro modo que no sea terrorista, genocida, violador y mercenario. La agencia oficial MAP escribió sin pestañear que los delitos atribuidos a Ghali eran "dignos del proceso de Nuremberg", pero la atención que habían merecido en la Audiencia Nacional demostraba que en España solo existía "una parodia de Justicia".

Primero viene una convocatoria pública al embajador español para exigirle explicaciones por lo sucedido, luego dos comunicados extremadamente duros del Ministerio de Exteriores marroquí para con su vecino, al que acusa de deslealtad y de maniobrar a sus espaldas. Y por fin, el lunes 17 de mayo, abre las puertas de Ceuta y permite la entrada de más de 11.000 personas en Ceuta como quien va a la feria.

Durante tres días, y mientras que en España no se habla de otra cosa, el Gobierno marroquí guarda silencio, pero el jueves el ministro Nasser Bourita ofrece una rueda de prensa —solo éramos tres periodistas— donde se despacha con gran resentimiento hacia el Gobierno español. Una y otra vez regresa Bourita al tema de la presencia de Ghali en España, como si no fuera consciente de que el mundo entero está hablando de otra cosa, de la avalancha migratoria, y es entonces, tras las insistentes preguntas de los periodistas, cuando el ministro, con fingida candidez, dice que lo sucedido debe entenderse "en el contexto de cierta fatiga de los agentes marroquíes por las fiestas del fin de ramadán". La explicación era tan rocambolesca que al publicarse los primeros teletipos, muchos internautas marroquíes tacharon esas palabras de *fake news* en las redes, hasta convencerse de que el ministro había hablado así. Continuó Bourita quejándose del desigual reparto que suponía el control migratorio en Ceuta, donde según él por cada agente español había 99 marroquíes guardando las famosas vallas fronterizas. Pero el ministro regresaba, como un mantra, a la cuestión de Ghali y al hecho de que España hubiera preferido consultarla con Argelia que con Marruecos. Era como si habitase en una realidad paralela a la del resto del mundo, donde prosperaba la impresión de que Marruecos había perdido toda mesura.

Lo más sorprendente era la locuacidad de la clase política marroquí, algo nunca visto. Unos políticos que esquivan sistemáticamente a los periodistas, sobre todo a los extranjeros, me "regalaban" por aquellos días entrevistas con un único guion: volver a atacar al Gobierno español a cara de perro. Eran tan evidente el juego que cortésmente dije que no a unos y otros: no encontraba el menor interés en un político que repite como papagayo las ideas que el ministro acababa de expresar.

Uno de los que me buscaba era Driss Lachgar, secretario general de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (miembro de la Internacional

Socialista), quien acababa de mandar una carta a Pedro Sánchez para reprocharle su visita a "la ciudad ocupada de Ceuta". Al socialista Lachgar no le dolía la imagen de los menores de su país errando por las calles de Ceuta sin comida ni techo, sino que el Ejército español se hubiera desplegado en Ceuta, en "una demostración de fuerza rayana en la provocación". Se comprende que el partido de Lachgar esté en caída libre desde hace décadas.

Pero no solo era él: Aziz Akhannouch, todopoderoso ministro de Agricultura y Pesca, multimillonario, amigo personal del rey Mohamed VI y secretario general de la Reagrupación Nacional de Independientes, había intentado ofrecerme otra entrevista no para hablar de lo que yo quería, sino de nuevo para cargar contra España por su actitud en el caso Ghali. Como no logró su objetivo, movió otras influencias y dos días después encontró otras puertas abiertas y apareció firmando una columna en el diario *El Mundo* de Madrid.

UNA PRENSA MADRILEÑA HOSTIL

Sin embargo, poco podía hacer una columna de Akhannouch cuando en España el tono de la prensa, impresa o digital, era esos días ferozmente antimarroquí. El entorno del ministro Bourita le había alertado de cómo la imagen del país caía muchos enteros en España. "Hay una hostilidad de todos los medios, una agresividad política y mediática para manchar nuestra imagen, fruto de viejos complejos que creíamos superados", dijo el ministro en esa misma rueda de prensa. Le había herido particularmente —lo citó tres veces en esa conversación— un editorial del diario *ABC* en el que se preguntaba cómo "un país subdesarrollado" se permite tratar así a "una gran potencia". A Bourita le molestaban "los insultos, la instrumentalización mediática y los inaceptables ataques a nuestras instituciones", alusión apenas velada al rey Mohamed VI, objeto aquellos días de abundantes caricaturas en la prensa española. En una de ellas, y no era la más ofensiva, el rey, inconfundible con su chilaba amarilla, aparecía encendiendo la mecha de un cañón apuntando a Ceuta. La munición no eran balas, sino personas harapientas.

Aun siendo cierto que en España habían resucitado los estereotipos más

sangrantes hacia el vecino moro, Bourita demostró que vivía en una realidad paralela cuando exhibió como prueba de sus agravios la fotografía del guardia civil Juan Francisco Valle, que había salvado del ahogamiento a una niña de menos de un año, una fotografía que dio la vuelta al mundo y se convirtió en la imagen que describiría la crisis para la posterioridad. El ministro pidió expresamente a un funcionario que aportase la foto de Juanfran, aumentada, y la puso ante mí, único periodista español en la sala.

—Yo solo veo la imagen de un hombre salvando la vida de un bebé —le comento.

—Ah, no —sonríe Bourita, escéptico—. Esta foto se ha usado para atacar a Marruecos. Aquí hay unos objetivos… —concluyó de manera enigmática.

A Bourita los diplomáticos españoles le habían puesto el apodo de Mister Bean por su parecido relativo con el famoso cómico británico; en privado, esos mismos diplomáticos reconocían que envidiaban la intransigencia y la fiereza con la que defendía los intereses de su país. La agresividad de Bourita —un hombre salido de una pequeña ciudad del norte de Marruecos y que se había hecho a sí mismo en una sociedad muy elitista— era el ejemplo perfecto de una diplomacia que nunca se apartaba un milímetro de sus objetivos y que explicaba el peso internacional del pequeño país africano que era Marruecos: como hemos visto páginas atrás, sus Gobiernos no dudaban en plantar cara a Estados Unidos, Francia, Alemania o al secretario general de la ONU para conseguir sus objetivos.

Aquella particular cruzada contra España, Bourita había elegido hacerla a golpe de comunicados y entrevistas. Los periodistas extranjeros que quedábamos en Rabat éramos llamados casi a diario a Exteriores. En sus pasillos pudimos ver cómo la embajadora Karima Benyaich, convertida también ella en rostro de la crisis, era aleccionada por el ministro para que tradujera al español y luego ensayara una y otra vez la lectura de comunicados furibundos que declamaría luego ante un *prompter* y en los que atacaba a su diana favorita en aquella crisis: la ministra Arancha González Laya. Que Rabat quería cobrarse la cabeza de Laya era un secreto a voces, como lo puso de manifiesto la embajadora en una de sus comparecencias: dijo que el Gobierno lamentaba "las declaraciones inapropiadas y lamentables" de las declaraciones de González Laya y añadió: "Marruecos toma buena nota y actuará en consecuencia".

—¿A qué declaraciones de Laya se refiere? —preguntó un periodista.

—A ninguna en concreto y a todas —respondió la embajadora.

En el Ministerio de Exteriores español no daban crédito: la ministra llevaba días rechazando dar entrevistas que le pedían desde todo el mundo con el único fin de calmar los ánimos y rebajar la tensión con el vecino; todo lo que pedía era silencio y discreción. "Es como si diera igual lo que digamos —me dijo una persona del entorno de Laya—, porque todo lo quieren utilizar en su contra. Ya no sabemos qué hacer con ellos".

Marruecos había detectado que en España la crisis bilateral no había provocado un impulso de cohesión nacional, sino que muy pronto había servido como argumento de luchas partidistas. Lo mismo sucedía con la prensa, que en muchos casos atacaba de forma inmisericorde a Pedro Sánchez y sus ministros por el manejo de esa crisis. Comenzaron a aparecer artículos que se mostraban proclives a recoger las tesis marroquíes —la recepción a Brahim Ghali sin consultar al vecino, los crímenes atribuidos al saharaui, las penalidades en que viven los saharauis de Tinduf frente a la prosperidad del Sáhara marroquí, etc.— y que incluían detalles secretos sobre la estancia de Ghali, procedentes sin ninguna duda de los servicios marroquíes de inteligencia y que dejaban en mal lugar al Gobierno español. Rabat parecía haber comprendido la importancia de contar con medios afines en España, un territorio hasta ahora descuidado por sus aparatos, y solo así se entendía la profusión con que en este 2021 han ido apareciendo páginas web abiertamente promarroquíes como La hora de África, Rue 20 (versión española) o Atalayar, esta última creada unos años atrás. En paralelo, politólogos amigos como Pedro Ignacio Altamirano se afanaban en servir de altavoz de Rabat allá donde quisieran entrevistarlo. Pero no era suficiente: hacía falta un medio de mayor tirada que recogiera las tesis de Rabat, y este papel lo cumplió *La Razón*: el diario dirigido por Paco Marhuenda se convirtió en el medio donde aparecían las exclusivas y los artículos proclives a Marruecos, que luego eran profusamente reproducidos en los medios de Rabat. Así, las filtraciones tenían un aire de mayor profesionalidad, puesto que un medio de Madrid las había revelado primero.

LA OFENSIVA EUROPEA

Brahim Ghali salió finalmente de España y la crisis no escampaba. Y lo que era peor para Rabat: al norte de los Pirineos, se multiplicaban las voces de solidaridad con España y de indignación con Marruecos. Cuando el ministro Bourita advirtió sobre los intentos de España de "europeizar" una crisis bilateral, llegaba demasiado tarde: aquello ya era una realidad.

Marruecos había errado utilizando el arma migratoria, algo altamente sensible en las prioridades de Bruselas, que trata mal que bien de consensuar una política común al respecto. El 21 de mayo, en los días posteriores a la avalancha migratoria en Ceuta, la vicepresidenta de la Comisión, Margaritis Schinas, advirtió a Marruecos: "Nadie puede intimidar o hacer chantaje a la Unión Europea [...]. Ceuta es Europa, esa frontera es una frontera europea y lo que ahí sucede no es solo problema de Madrid, es problema de todos".

Ese tono, con leves variaciones, fue repetido por unos y otros responsables europeos en las semanas siguientes: era incomprensible que un vecino tan bien considerado como Marruecos, que recibía las segundas partidas de ayuda migratoria por parte de Bruselas (tras Turquía), actuase de ese modo con un Estado miembro. Ni siquiera Francia, el aliado por excelencia de Rabat, el que siempre se ha erigido en portavoz oficioso de su excolonia, salió esos días en su defensa, refugiándose en una tibia neutralidad que no servía a los intereses de Rabat, aunque tampoco complaciera a Madrid.

Que Marruecos se había equivocado en sus cálculos quedó en evidencia cuando el Parlamento Europeo programó una votación para tratar el uso de Rabat de su propia población y de sus propios niños y adolescentes como arma migratoria. A los eurodiputados no les importaba el caso Ghali ni las discrepancias hispano-marroquíes sobre el Sáhara, como machaconamente repetía Bourita tratando de desviar la atención. El 10 de junio, la Eurocámara votó un texto en el que "rechazaba" y "lamentaba" la actuación de Marruecos. Los medios marroquíes vendieron como una victoria que la palabra "condena" hubiera desaparecido del texto final, pero no podían ocultar el hecho de que de los 678 votos emitidos, 397 lo hicieron a favor y 196 se abstuvieron: solo 85 eurodiputados se mostraron proclives a las tesis marroquíes y votaron en contra. Casi todas las tendencias políticas de la Eurocámara, de derechas e izquierdas, habían dado la espalda a Marruecos. Nunca la imagen del país magrebí había

cotizado tan bajo en los pasillos de Estrasburgo. El eurodiputado español Jordi Cañas, impulsor de la resolución, relató al diario *El Confidencial* "las presiones que vivimos durante aquellas semanas para que esa resolución no se presentase ni se aprobase, para que se aguara e incluso se cambiara el título", y especificó: "Presiones del Gobierno marroquí, de sus embajadas, de los *lobbies* marroquíes llamando por teléfono a los eurodiputados, presionando, utilizando sus tentáculos y sus recursos".

Era la primera vez en muchos años que la Eurocámara se pronunciaba de forma tan contundente con Marruecos, más allá de las diferencias políticas, y que los *lobbies* promarroquíes, empezando por los eurodiputados franceses, habían dejado de funcionar. Y lo que era peor para Rabat: el Parlamento había expresado de paso, y de forma muy contundente, la pertenencia de Ceuta al espacio europeo común. Rabat había errado al atacar, y al hacerlo con personas, las fronteras de la Unión Europea.

MOHAMED VI SE ACUERDA DE PRONTO DE LOS MENORES

Otro detalle demostró que Marruecos comenzaba a salir de su ombligo y darse cuenta de que el mundo veía las cosas de manera diferente a ellos. El 2 de junio, cuando se fraguaba la votación del Parlamento Europeo, la prensa fue convocada de nuevo por Bourita para, supuestamente, leernos un nuevo comunicado antiespañol, pero alguien había convencido al monarca de que debía dar una señal de que tenía presente a sus menores: aquellos dos mil chavales que deambulaban por Ceuta en busca de un bocadillo y un techo para dormir ofrecían una pésima imagen, la de un país que abandona a sus ciudadanos más indefensos. Resultaba desde luego increíble que en dos semanas nadie en la oficialidad marroquí se hubiera percatado de que esa fue una de las peores estampas de la crisis y que dejaba a Marruecos en muy mal lugar a ojos del mundo.

Entre los niños y adolescentes que habían entrado en Ceuta, casi todos procedentes de Castillejos y la región circundante, había de todo: algunos habían oído que iban a encontrarse con Lionel Messi y habían cruzado la frontera abierta como quien corre una aventura, pero otros escapaban de

vidas rotas. Uno de ellos, Haroun, de 16 años, recién expulsado de Ceuta comentaba a mi compañera Fatima en las calles de Castillejos: "Soy huérfano de padres y llevo años viviendo en la calle. Allí, en Ceuta, van a darme un lugar donde vivir y estudiar, y luego me darán trabajo". Otros niños junto a él repetían que era muy fácil pasar de Ceuta a la península, y de ahí a Europa.

Las ideas de Haroun y sus amigos son las que espolean los sueños de los menores que huyen de Marruecos creyendo que Europa les dará todo lo que no tienen, aunque terminen en muchos casos mendigando o delinquiendo en las calles de Barcelona, de París o de Estocolmo, por citar tres de las ciudades donde su presencia se ha convertido en algún momento en un problema de orden público. En España, son los territorios de la periferia (Ceuta, Melilla y Canarias) donde principalmente naufragan estos niños y se quedan ahí meses y hasta años sin poder pasar nunca al continente. En Ceuta, es conocido que en verano esos menores marroquíes aprovechan la animación y la confusión de la feria (a fines de julio) para tratar de colarse en los bajos de los camiones que cruzan al Estrecho, tanto que la policía diseña cada verano la llamada Operación Feriante con el único fin de sacar a esos niños ocultos en los camiones antes de entrar en el ferri.

La policía española acuñó hace unos años el acrónimo "menas" (menores extranjeros no acompañados) que hizo fortuna y que deshumaniza el caso de estos niños abandonados a su suerte. Hace más de una década que los Gobiernos europeos discuten con Marruecos la forma de devolver a esos miles de menores a su país de origen, pero Rabat pone sistemáticamente palos en las ruedas. Una de las ideas recurrentes es la creación de centros de acogida en origen, es decir, una especie de asilos infantiles donde colocar a los menores devueltos en caso (muy frecuente) de que no tengan un hogar al que regresar al tratarse de familias desestructuradas. España ha llegado a dar hasta diez millones de euros a Marruecos para construir centros de acogida en lugares concretos de Tánger y de Marrakech, pero ese dinero de la Agencia Española de Cooperación se ha esfumado sin que se hayan puesto dos ladrillos juntos, según una fuente de toda solvencia. Al parecer, el Gobierno de Rabat es reacio a abrir esos centros porque pueden suponer un "efecto llamada" para los niños de la calle que vagan por sus ciudades.

Alemania, Suecia y Francia también se han sentado con Marruecos a tratar el caso de sus menores, pero siempre se encuentran con evasivas, y entre ellas las más recurrentes son que "no está claro que todos sean marroquíes" (pues efectivamente hay algunos argelinos, los menos) y "no todos son menores" (pues algunos se encuentran cerca de los 18 años). Las policías europeas han recurrido a las pruebas óseas de mayoría de edad, sin fiabilidad científica, para convencer a Rabat, pero todo son pegas y trabas, especialmente para documentar la identidad de esos adolescentes. Las reticencias y las tergiversaciones de Rabat hacen que pasen los meses y muchos menores pasen a la mayoría de edad, adquiriendo entonces la categoría de vagabundos, pues su presencia en los centros de acogida ya no está justificada. Pero ya no son un problema para Marruecos.

Así que Mohamed VI tuvo que admitir que había un problema con sus menores, y no solo en Ceuta en aquellos días, sino en varios países de Europa. Por eso Bourita convocó a los periodistas para leernos un comunicado que decía que el monarca "había dado Sus Muy Altas Instrucciones (sic) para que las situación de los menores sea solucionada definitivamente".

El comunicado reconocía que solo "unas decenas" de menores habían sido devueltos a Marruecos en los pasados años, pero achacaba la responsabilidad de forma cínica a los países europeos: "Hay muchas tardanzas a la hora de concretar esta cooperación, debidas sobre todo a los bloqueos y los procedimientos administrativos y judiciales complejos en varios países europeos", mientras que el país magrebí tiene "un compromiso claro y firme para aceptar el retorno de esos menores". Un compromiso que no había sido capaz de demostrar durante años. Concretamente, España no ha conseguido devolver a uno solo de los menores marroquíes.

LA VENGANZA LLEGA EN LOS PUERTOS

Aquel comunicado que recordaba de pronto que había un problema con los menores terminaba diciendo que esa cuestión "se utilizaba como subterfugio para desviar las verdaderas causas de la crisis con España", y advertía de que "las autoridades marroquíes se reservan el derecho de

aportar, en el momento oportuno, las respuestas apropiadas a las acusaciones infundadas del Gobierno español".

Las "respuestas apropiadas" llegaron por donde menos lo esperábamos. Solo cinco días después, el Gobierno anunció que excluía los puertos españoles de la Operación Marhaba, que es como en Marruecos llaman al dispositivo de acogida de sus emigrantes en Europa que cada verano regresan al país de origen para visitar a sus familias, y que mayormente lo hacen por tierra, atravesando el territorio español para embarcar en ferris que salen de Algeciras, Tarifa, Almería y Motril, principalmente. En España la concentración de tres millones largos de personas (contando ida y vuelta) en las costas del sur entre el 15 de junio y el 15 de septiembre se conoce como Operación Paso del Estrecho (OPE), y se venía realizando de forma coordinada con Marruecos desde hacía treinta años. La OPE moviliza cada año a más de 20.000 agentes policiales en España para que transcurra sin incidentes, y deja millones de euros en áreas de peaje, gasolineras, puertos, hoteles o restaurantes de carretera.

Así que el 7 de junio Rabat decidió de forma unilateral que no habría OPE, sin consultarlo con el Gobierno español. Anunció que los únicos puertos habilitados para los viajes de sus emigrantes serían los de Sète y Marsella (Francia) y el italiano de Génova. Nada más conocerse la noticia, algunos en Marruecos aplaudieron la firmeza de su Gobierno para con España y celebraban en las redes sociales las imágenes de las calles de Algeciras inusualmente vacías cuando en otros años la ciudad hervía con miles de vehículos atravesando la ciudad camino del puerto.

Pero no nos equivoquemos: los principales damnificados por la venganza de Rabat no fueron los españoles, sino los propios marroquíes, aquellos que religiosamente bajan cada año, a veces desde Alemania u Holanda, para visitar a sus familias, en unos viajes que forman parte del simbolismo veraniego marroquí y que ejemplifica mejor que nada el vínculo sentimental de la diáspora con su país de origen. Obligar a los marroquíes a embarcar en un viaje de cuarenta horas desde Marsella excluía de la operación a miles y miles de familias que no tenían cómo pagar esa costosa travesía, y dejaba fuera al millón largo de marroquíes de España, que ya llevaban dos años sin visitar a los suyos por culpa de la pandemia en 2020.

Por eso, mientras que algunos espíritus vengativos celebraban el golpe a

España en las redes, eran miles los marroquíes de Europa que protestaban por verse de pronto víctimas del juego político entre los dos países. Era tan evidente la intención marroquí de castigar a España que comenzaron incluso a negociar una línea de ferris entre el puerto portugués de Portimao, en la costa sur del Algarve, y el de Tanger Med. Cualquier puerto era bueno con tal de no pasar por España, sobre todo porque la elección de Portimao, que tomó por sorpresa a todos dentro y fuera de Marruecos, parecía haber sido tomada desde la más absoluta improvisación y sin tomar en cuenta las características de ese puerto, que hacen difícil una operación de ese calado.

Al llegar a sus oídos las quejas de sus súbditos emigrantes por las dificultades y el encarecimiento de sus viajes, el rey ordenó una rebaja de precios en los billetes de los aviones y los barcos que ese verano se movilizarían para traer a las familias de marroquíes desde Europa. Con la línea aérea nacional Royal Air Maroc no había problema, al ser propiedad del Estado, mientras que las navieras (todas privadas) recibirían una subvención pública que compensara la diferencia, ya que para una compañía de barcos realizar una travesía de 40 horas para una familia completa en ida y vuelta por 950 euros, como ordenó el monarca, distaba mucho de ser rentable, teniendo en cuenta que su precio normal se acercaba a los 3.000 euros. Pocos días después, el presidente del Gobierno, Saadedín Otmani, explicó en el Parlamento cuánto iba a costar al Estado este dispositivo especial de subvención de los viajes a los emigrantes: sumaba la friolera de 4.500 millones de dírhams, es decir, más de 400 millones de euros. "Estamos ante una verdadera epoyeya nacional —dijo Otmani—, y todo el mundo debe contribuir a su éxito".

Ese gasto era una enormidad en un año de crisis pandémica, y máxime si podía haberse evitado levantando el veto sobre los puertos españoles, pero pocos se atrevían a decirlo porque a nadie se le ocultaba que el rey estaba tras la venganza de los puertos. En una conferencia para explicar los resultados trimestrales de la economía nacional, el gobernador de Bank al-Maghrib, Abdellatif Jaouahri, un economista que jamás hacía comentarios políticos, fue preguntado por el coste de toda esta operación en las arcas públicas y por las consecuencias que la crisis abierta con España podría acarrear en el futuro. Jaouahri, que siempre advertía contra los derroches del Estado, dijo esta vez que "lo que toca a nuestra soberanía nacional y a

nuestra integridad territorial no tiene precio. No hemos hecho cálculos económicos", exclamó. Jaouahri tenía presente que era el eterno conflicto del Sáhara, podía justificar huecos y hasta simas presupuestarias.

Como sucedía cada vez que el país se enfrentaba a un enemigo externo, el patriotismo en aquellos días era obligatorio y nadie emitía la menor crítica ante las improvisaciones y los gastos. Solamente en las redes sociales algunos se salían del renglón, aunque refugiados en el anonimato. De forma muy certera, un tuitero identificado como Omar H. resumió así la situación: "Joder a España va a costar al contribuyente marroquí 4.500 millones de dírhams, el coste de dos hospitales universitarios".

Y es que la crisis con Madrid estaba dejando a muchos damnificados, también dentro de Marruecos. Su imagen internacional había caído varios enteros, enterrando los pacientes resultados de sus poderes blandos; sus emigrantes en Europa se sentían víctimas injustas de un conflicto donde no tienen arte ni parte; el racismo *antimoro* crecía en España, y finalmente los marroquíes de a pie comprendían que también su bolsillo iba a terminar pagando los platos rotos del enfado con el vecino del norte.

Pero la obstinación en el Palacio de Fez era patente: habíamos entrado en un largo periodo de aguas revueltas en el estrecho de Gibraltar.

LOS GESTOS LLEGAN SOLO DESDE MADRID

La ministra González Laya estaba quemada tras la larga crisis con Marruecos y para nadie fue una sorpresa que fuera una de las víctimas en la gran remodelación de Gobierno que llevó a cabo Pedro Sánchez el 10 de julio. Todos los observadores en Madrid y Rabat leyeron su salida como un gesto de Sánchez para con el vecino agraviado. La entrada de Ghali a escondidas en España había sido una torpeza, y aunque los motivos de fondo ahora ya fueran otros, era necesaria una señal para apaciguar al vecino.

El siguiente gesto llegó de la mano del nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Nada más tomar posesión el 12 de julio, en sus primeras palabras dijo que uno de sus objetivos inmediatos sería "reforzar las relaciones con Marruecos, gran amigo y vecino del sur", sin emitir la menor crítica al comportamiento nada modélico de ese "gran amigo".

En Rabat, silencio en la plaza. El Gobierno no comentaba ni la salida de Laya ni las palabras de Albares. Pero a través de la prensa afín, en este caso el portal de noticias *le360.ma* (portavoz oficioso del Palacio) llegó el primer mensaje: "Las palabras (de Albares) son sin duda un primer paso para aliviar la tensión entre los dos países. Sin embargo, van a hacer falta hechos, y sobre todo sentarse en una mesa con la parte marroquí para discutir las razones profundas de la crisis", advirtió.

¿Viajaría Albares a Rabat como primera capital para escenificar un nuevo clima? Esa tradición no escrita se había cumplido casi religiosamente —con la excepción de González Laya— en los Gobiernos democráticos españoles, de nuevo como un gesto para con el vecino. Pero la agenda de los marroquíes no encontró hueco para Albares en esas dos primeras semanas clave de su mandato y finalmente el ministro viajó a Londres, tratando de restar importancia a la elección: "Yo puedo liberar una agenda, o poner una cita con un ministro de Asuntos Exteriores ahora o dentro de un mes. Es algo que no incide en los intereses de España", dijo, tratando de ocultar el desaire de Rabat.

En el Ministerio de Exteriores marroquí no parecían tener prisa en recibir a Albares: esperaban otras señales más contundentes desde Madrid. Pero además, aquellos días estaban enfrascados en otro frente que volvió a dejar tocada la imagen mundial del país: Forbidden Stories, un consorcio de medios europeos y americanos creado *ad hoc*, había desvelado una operación mundial de espionaje a periodistas, activistas y políticos rivales llevada a cabo por varios Gobiernos mediante la utilización de un programa llamado Pegasus que había sido creado por la compañía israelí de ciberseguridad NSO. Concebido para frenar las amenazas terroristas y vendido solamente a Gobiernos u organismos oficiales, consistía en una infiltración en los teléfonos móviles de ciertas personas para acceder desde ellos y casi sin dejar huella a todo tipo de conversaciones, agendas telefónicas y mensajes de correo. Sin embargo, los distintos Gobiernos —ahí aparecían India, México, Hungría o Arabia Saudí— estaban utilizando Pegasus con fines de política interna y para espiar a los críticos o disidentes. Y precisamente el Gobierno de Marruecos aparecía como uno de los principales clientes de la NSO: según Forbidden Stories, los servicios secretos marroquíes tenían un listado de

personas de interés que incluían miles de personas no solo dentro del país, sino también en Francia —incluido el mismo presidente Emmanuel Macron— y Argelia, principalmente.

El Gobierno marroquí negó en dos comunicados ser siquiera cliente de la NSO, calificó las informaciones de "surrealistas" por no aportar ninguna prueba y denunció "una campaña mediática engañosa, masiva y maliciosa". Decía ser víctima "de ataques odiosos que revelan la voluntad de ciertos círculos mediáticos y ONG de ponerlo bajo sus órdenes y su tutela", pero lo cierto es que de nuevo ofrecía la imagen de un país que se extralimita en la defensa de sus intereses y que se salta la legalidad internacional si así le conviene. Era otro gesto prepotente similar al asalto sobre Ceuta.

El ministro Bourita, encargado en estos últimos años de dar la cara en nombre de todo un país, se explayó después en una entrevista con *Jeune Afrique* el 23 de julio: dijo que todo el escándalo de Pegasus respondía a que "ciertos medios no acaban de admitir la realidad de que Marruecos se supera, se refuerza y consolida su soberanía a todos los niveles", es decir, situaba la denuncia en una suerte de envidia internacional por los éxitos de su país y subrayaba la eficacia de sus servicios de seguridad, que según él habían "evitado baños de sangre" en varios países amigos.

Para Bourita, no cabía duda de que cada año, al acercarse la muy simbólica Fiesta del Trono (el 30 de julio), la más importante del calendario marroquí porque marca el aniversario de la entronización de Mohamed VI, se producían "picos de hostilidad mediática de medios hostiles que se afanan en destrozar la imagen de Marruecos y sus instituciones".

Pero Marruecos, en ese año 2021, ya se había preocupado él solo de degradar su imagen y desperdiciar así gran parte del poder blando acumulado durante toda una década.

Índice